

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/M/37/Add.1

8 de noviembre de 2002

(02-6169)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

ACTA DE LA REUNIÓN

Celebrada en el Centro William Rappard
los días 17 a 19 de septiembre de 2002

Addendum

Presidente: Embajador Eduardo Pérez Motta (México)

El presente documento contiene el acta de las deliberaciones que tuvieron lugar, en relación con los puntos A, B y D a P del orden del día, durante la reunión del Consejo de los ADPIC celebrada del 17 al 19 de septiembre de 2002. El acta de los debates celebrados en relación con el punto C, sobre el párrafo 6 de la Declaración de Doha, relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, figura en el documento IP/C/M/37.

<u>Asuntos tratados:</u>	<u>Página</u>
A. NOTIFICACIONES PREVISTAS EN DISPOSICIONES DEL ACUERDO	2
B. EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE APLICACIÓN	3
D. CUESTIONES RELATIVAS A LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 23 A PRODUCTOS DISTINTOS DE LOS VINOS Y LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS	22
E. EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL APARTADO B) DEL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 27	50
F. RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y EL CDB	59
G. PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL FOLCLORE	65
H. EXAMEN DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 71	70
I. APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 66	70
J. RECLAMACIONES EN CASOS EN QUE NO EXISTE INFRACCIÓN Y RECLAMACIONES EN CASOS EN QUE EXISTE OTRA SITUACIÓN	71
K. COMERCIO ELECTRÓNICO	78
L. OTRAS CUESTIONES PENDIENTES RELATIVAS A LA APLICACIÓN (INCISOS 93 Y 94 Y PROPUESTA DE LOS PMA SOBRE SU PERÍODO DE TRANSICIÓN)	78
M. EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN RELATIVA A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 24	78

N.	COOPERACIÓN TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD	81
O.	INFORMACIÓN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE INTERÉS REGISTRADOS EN OTROS FOROS DE LA OMC.....	84
P.	CONDICIÓN DE OBSERVADOR DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES INTERGUBERNAMENTALES.....	84
ANEXO		87

A. NOTIFICACIONES PREVISTAS EN DISPOSICIONES DEL ACUERDO

i) Notificaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 63

- *Notificaciones de los Miembros cuyos períodos de transición de conformidad con los párrafos 2 ó 3 del artículo 65 expiraron el 1° de enero de 2000, o que se adhirieron a la OMC después de esa fecha*

1. El Presidente señala a la atención del Consejo la nota actualizada de la Secretaría en que se refleja la situación de las notificaciones recibidas de esos Miembros hasta ahora. En la nota se indica de cuáles de esos Miembros se habían recibido notificaciones al 9 de septiembre de 2002. Desde esa fecha se han recibido nuevas notificaciones de leyes y reglamentos de Tailandia y Cuba. De los 75 Miembros interesados, siete no han presentado aún notificación alguna sobre su legislación de aplicación. Las notificaciones de varios otros Miembros son incompletas. Tras señalar que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, las notificaciones de las leyes y reglamentos en cuestión deberían, en general, haberse presentado el 1° de enero de 2000, insta de nuevo a esos Miembros a que presenten sin demora la documentación pendiente. También insta a las delegaciones interesadas a que, en el caso de que no esté dispuesto todo el material que se ha de notificar, presenten ahora lo que puedan notificar y complementen la notificación tan pronto como estén dispuestas para su presentación otras partes del material que se ha de notificar. Recuerda a las delegaciones que, de conformidad con el Acuerdo de Cooperación OMC/OMPI y las decisiones adoptadas por los órganos rectores de la OMPI, la Oficina Internacional de la OMPI está en condiciones de ayudar a las delegaciones en la traducción de sus principales leyes reglamentos de propiedad intelectual, en caso necesario.

- *Notificaciones de otros Miembros y notificaciones de modificaciones de leyes notificadas anteriormente*

2. El Presidente pone en conocimiento del Consejo que, desde la reunión anterior, se han recibido notificaciones de nueva legislación o de modificaciones de legislación notificada anteriormente de Alemania; China; España; Filipinas; Granada; Guatemala; Hong Kong, China; Lituania; Luxemburgo; Marruecos; la República Checa; y Suiza. Esas notificaciones se distribuirán en la serie de documentos IP/N/1/-.

ii) Notificaciones previstas en el artículo 69

3. El Presidente informa al Consejo de que, con posterioridad a la reunión anterior, se han recibido nuevas notificaciones de servicios de información de Angola y China, de conformidad con el artículo 69 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como información actualizada de Bangladesh, el Canadá y el Taipei Chino (distribuida posteriormente como documento IP/N/3/Rev.6/Add.2). Actualmente son 117 los Miembros que han notificado servicios de información de conformidad con el artículo 69.

B. EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE APLICACIÓN

i) Seguimiento de exámenes ya realizados

4. El Presidente recuerda que, según solicitó el Consejo en su reunión de junio de 2002, la Secretaría ha distribuido una nota informal con la signatura JOB(02)/108 en la que se enumera todo el material pendiente requerido para finalizar diversos exámenes ya emprendidos por el Consejo. En el cuadro adjunto a la nota figura la lista de Miembros cuyos exámenes, iniciados en las reuniones del Consejo de abril, junio y noviembre de 2001 y marzo y junio de 2002, no han finalizado todavía, y se hace referencia a todo el material pendiente. Asimismo, en la nota se enumeran varios Miembros cuyos exámenes se han retirado ya del orden del día del Consejo, pero a los que se han formulado nuevas preguntas.

5. El Presidente señala que Malasia y Omán han facilitado ya las respuestas a todas las preguntas que se les han planteado, y propone que los exámenes de la legislación de esos países se supriman del orden del día, en el entendimiento de que las delegaciones podrán volver a tratar en todo momento cualquier cuestión relacionada con esos exámenes.

6. El Consejo así lo acuerda.

7. El Presidente dice que, según se indica en el cuadro, los exámenes de 21 Miembros, iniciados entre abril de 2001 y junio de 2002, aún no han finalizado. El cuadro hace referencia a las comunicaciones recibidas antes del 4 de septiembre de 2002. Desde entonces, la Secretaría ha recibido respuestas a todas las preguntas pendientes formuladas a Guyana (posteriormente distribuidas en el documento IP/C/W/381). Suriname se halla en el proceso de presentación de información sobre el estado de preparación de su legislación de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa información se distribuirá al Consejo cuando se disponga de ella.

8. El Presidente recuerda que, en la anterior reunión del Consejo, el representante de Mauricio manifestó que las preguntas sobre la legislación de su país planteadas por varias delegaciones se referían todas ellas a antiguas leyes de Mauricio. El representante indicó al Consejo que su delegación había celebrado amplias consultas con esas delegaciones y que todas las cuestiones que habían planteado se habían tenido en cuenta en el nuevo proyecto de legislación, que en ese momento era objeto de examen por el Parlamento. Por último, el representante expresó su esperanza en que esa explicación dejaría sin efecto las preguntas formuladas y que la cuestión podría darse por zanjada una vez que las nuevas leyes se hubiesen distribuido a los Miembros. El Presidente pide a las delegaciones que hayan formulado preguntas a Mauricio que indiquen si están satisfechas con esa explicación, de modo que el examen pueda retirarse del orden del día del Consejo, si prefieren obtener respuestas a las preguntas que han formulado o si desean volver a examinar la cuestión una vez que la nueva legislación se haya notificado y distribuido a los Miembros.

9. Los representantes de los Estados Unidos, el Canadá y Suiza piden a Mauricio que responda a las preguntas que le han formulado, pero con arreglo a la nueva legislación, en lugar de la antigua.

10. El Presidente insta a las 20 delegaciones que aún no lo han hecho a que presenten sin demora sus respuestas a todas las preguntas pendientes.

11. Añade que en la nota se menciona también a cinco Miembros cuyos exámenes se han suprimido ya del orden del día del Consejo, en el entendimiento de que las delegaciones podrán volver a tratar en todo momento cualquier cuestión relacionada con esos exámenes. A ese respecto, se han formulado algunas preguntas relativas a la legislación de aplicación de esos países.

12. La representante de la Argentina dice que, para la próxima reunión del Consejo, su delegación habrá facilitado respuestas a las preguntas pendientes planteadas en relación con el examen de la legislación de su país.

13. El Presidente sugiere que el Consejo pida a la Secretaría que actualice su nota sobre exámenes pendientes antes de la próxima reunión.

14. El Consejo toma nota de las declaraciones realizadas y acuerda proceder según la sugerencia del Presidente y volver a examinar la cuestión en su próxima reunión.

ii) Exámenes de la legislación de China y del Taipei Chino

China

15. El Presidente recuerda que, en su reunión de junio de 2002, el Consejo acordó que el examen normal de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC por China y el examen en el marco del mecanismo de examen transitorio del Protocolo de Adhesión de China se realizarán conjuntamente en la presente reunión y que el examen normal se realizará con arreglo al procedimiento ordinario del Consejo. Añade que la notificación de las leyes y los reglamentos de China se ha distribuido en los documentos IP/N/1/CHN/1 y Add.1; y los textos de las leyes y los reglamentos notificados, en los correspondientes documentos de la serie de leyes. Las respuestas de China a la Lista de cuestiones sobre la observancia se han distribuido en el documento IP/N/6/CHN/1. China ha recibido preguntas de Australia, el Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, el Japón, los Estados Unidos y Suiza (documentos IP/C/W/364, 366, 361, 362, 365 y 372, respectivamente). La comunicación de los Estados Unidos contiene observaciones generales y preguntas, y además hace referencia al mecanismo de examen transitorio. Por otra parte, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros han presentado un documento relativo al mecanismo de examen transitorio que se ha distribuido con la signatura IP/C/W/371. Las respuestas de China a esas preguntas se han distribuido en el documento IP/C/W/374 y Add.1. Más recientemente, China ha recibido preguntas de Corea, que se han distribuido en el documento IP/C/W/380. China ha presentado asimismo información en el contexto del mecanismo de examen transitorio, con arreglo a lo establecido en la sección VI del anexo 1A de su Protocolo de Adhesión (IP/C/W/382). Además, el Consejo acaba de recibir los documentos siguientes: preguntas adicionales formuladas por el Japón, respuestas a algunas de las preguntas formuladas por Corea, y una comunicación de China titulada "Protección de los derechos de propiedad intelectual en China" (distribuidos posteriormente con las signaturas IP/C/W/362/Add.1, 374/Add.2 y 384, respectivamente).

16. El representante de China dice que, como nuevo Miembro de la OMC, su país se felicita de la oportunidad que supone que el Consejo de los ADPIC examine su legislación y su sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual. China está plenamente comprometida con el fortalecimiento y la mejora del sistema multilateral de comercio. Dada la seriedad con que se hace cargo de sus obligaciones para con la OMC, China ha traído de su capital un sólido equipo, integrado por expertos y representantes de alto nivel de los organismos estatales competentes, que desempeña una función esencial en la preparación de todos los documentos y la elaboración de las respuestas a las preguntas formuladas por las distintas delegaciones. El representante confía en que la presencia de ese equipo favorezca un mejor entendimiento mutuo. Añade que, puesto que el proceso es una combinación del examen de la legislación y del examen transitorio previsto en el párrafo 18 del Protocolo de Adhesión de China, desea prestar especial atención a tres cuestiones: en primer lugar, el cumplimiento de las obligaciones de notificación de China; en segundo lugar, el progreso en las medidas adoptadas por China para poner en conformidad las normas y los reglamentos pertinentes con el Acuerdo sobre los ADPIC; y en tercer lugar, las iniciativas emprendidas por China para exigir el cumplimiento de las leyes y los reglamentos sobre protección de los derechos de propiedad intelectual.

17. En lo que respecta a la notificación, el representante dice que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, China notificó, el 21 de mayo de 2002, sus ocho leyes principales dedicadas a la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluidas la Ley de Derecho de Autor, la Ley de Patentes, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y el Reglamento de aplicación de la Ley de Patentes de la República Popular de China. El Reglamento de aplicación de la Ley de Derecho de Autor y el Reglamento de aplicación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, recientemente modificados, se notificaron el 23 de agosto de 2002. Asimismo, el 12 de julio de ese año se notificaron al Consejo de los ADPIC el Código Penal, la Ley de represión de la competencia desleal y la Ley de Procedimiento Civil, bajo el epígrafe "Otras leyes y reglamentos". De conformidad con la decisión del Consejo de los ADPIC de 21 de noviembre de 1995, China notificó, el 12 de julio de 2002, sus respuestas a la Lista de cuestiones sobre la observancia respecto del Acuerdo sobre los ADPIC. Con arreglo al artículo 69 de ese Acuerdo, el 1º de agosto de 2002 se notificó la información relativa al servicio de información en China. Aparte de las obligaciones de notificación establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y por el Consejo, China ha facilitado respuestas a las preguntas recibidas antes del examen de seis Miembros, a saber, Australia, el Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, los Estados Unidos, el Japón y Suiza. Las respuestas a Australia, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, los Estados Unidos y el Japón se comunicaron el 23 de agosto de 2002, mientras que las respuestas al Canadá y Suiza se presentaron el 2 de septiembre de 2002. China recibió preguntas de la República de Corea apenas unos días antes de la reunión, y ha podido facilitar las respuestas a algunas de ellas inmediatamente antes del examen. Además, China ha facilitado al Consejo la información solicitada con arreglo al anexo 1 de su Protocolo de Adhesión.

18. Concluida esa labor preparatoria, China ha proporcionado al Consejo información completa para este examen, con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC, las decisiones conexas del Consejo y su Protocolo de Adhesión. Las leyes y los reglamentos sobre derechos de propiedad intelectual de China se caracterizan por su amplia cobertura y su gran cantidad. Para la notificación a la OMC y la presentación de la información necesaria para el examen han sido necesarios grandes trabajos, en particular de traducción, y una gran aportación de personal y recursos financieros. Al llevar a cabo esas tareas, a pesar de sus enormes dificultades, el Gobierno de China ha dado nuevas muestras de sinceridad y voluntad de respetar sus obligaciones en materia de transparencia y cumplir sus compromisos.

19. En cuanto a la marcha de los trabajos relativos a la legislación, el representante dice que el sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual de China empezó a configurarse ya a principios del decenio de 1970 y se ha convertido en el principal componente de la política de reforma económica y apertura de China. El Gobierno de China considera que el sistema de protección de la propiedad intelectual desempeña una importante función en el fomento de la innovación científica y tecnológica, el adelanto cultural y el desarrollo económico. En lo que respecta a la atracción de inversiones extranjeras, la eficaz protección de los derechos de propiedad intelectual es un importante factor que favorece la entrada de tales inversiones. Mucho antes de la adhesión de China a la OMC se emprendió una modificación general de las leyes y los reglamentos sobre propiedad intelectual con miras a ajustar el régimen de protección de los derechos de propiedad intelectual a las prescripciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Ese proceso está ya ultimado. La revisión a gran escala de la legislación sobre propiedad intelectual abarcó casi en su totalidad las leyes y los reglamentos más importantes relacionados con esa materia, con inclusión de la Ley de Derecho de Autor, la Ley de Patentes, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, el Reglamento de aplicación de la Ley de Patentes, el Reglamento sobre protección de los soportes lógicos de ordenador, el Reglamento de aplicación de la Ley de Derecho de Autor y el Reglamento de aplicación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de la República Popular de China. Además de esa legislación, se ha promulgado una serie de nuevos reglamentos, incluidos el Reglamento sobre la protección de esquemas de trazado de circuitos integrados y Reglamento sobre protección de las obtenciones vegetales.

20. La Ley de Derecho de Autor revisada amplía el alcance de la protección, define claramente los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores, refuerza las medidas provisionales de preservación de la propiedad y las pruebas, establece la cuantía de las indemnizaciones legales por daños y perjuicios y aumenta las sanciones administrativas aplicables en caso de infracciones que perjudiquen los intereses públicos. La Ley está ya en plena conformidad con las prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC. La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio revisada prevé expresamente la protección de las indicaciones geográficas y las marcas notoriamente conocidas, amplía los contenidos que pueden ser materia de una marca de fábrica o de comercio, reconoce el derecho de prioridad, prevé la revisión judicial de las decisiones administrativas relacionadas con el registro de marcas de fábrica o de comercio y refuerza las medidas de lucha contra la infracción de marcas de fábrica o de comercio. La Ley de Patentes revisada establece las condiciones para otorgar licencias obligatorias y prevé la revisión judicial de las decisiones administrativas relacionadas con las patentes de modelos de utilidad y de dibujos y modelos industriales. El Reglamento sobre protección de esquemas de trazado de circuitos integrados, en vigor desde abril de 2001, define la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados. En los textos revisados de la Ley de Patentes, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y la Ley de Derecho de Autor se han estipulado medidas provisionales para interrumpir los actos infractores antes del juicio, con objeto de reforzar aún más la protección de los titulares de derechos. A causa de esas importantes modificaciones introducidas en las correspondientes leyes y reglamentos, la legislación sobre protección de los derechos de propiedad intelectual de China ha experimentado grandes mejoras y alcanzado la plena conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.

21. El Gobierno de China considera que la participación generalizada en las actividades internacionales de intercambio y cooperación en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual es un medio esencial para aprovechar la avanzada experiencia de otros países y mejorar la capacidad y el nivel de protección de esos derechos en China. Desde el decenio de 1980, China se ha adherido sucesivamente a algunos de los principales convenios, tratados y acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, la Convención Universal sobre Derecho de Autor, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios para el Registro de Marcas, el Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, el Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes y el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Al tiempo que participa activamente en los convenios internacionales conexos, el Gobierno de China ha iniciado la cooperación bilateral con varios países para la protección de la propiedad intelectual, por ejemplo mediante el programa de cooperación entre los Estados Unidos y China en materia de propiedad intelectual. Los proyectos de ese tipo han ayudado a China a capacitar a sus profesionales en la protección de la propiedad intelectual y aumentar los conocimientos jurídicos de los funcionarios públicos para la administración del comercio. Esas actividades bilaterales han contribuido a adaptar el sistema de protección de la propiedad intelectual de China a las normas internacionales e impulsar el desarrollo del comercio.

22. En cuanto a la cuestión de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, el representante de China dice que la protección otorgada por el Gobierno de su país no se limita a los logros legislativos. De modo simultáneo a la permanente mejora de su legislación nacional, se ha dado una prioridad consecuente a las cuestiones relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual, tales como la sensibilización del público general respecto a la protección de esos derechos y el fortalecimiento de las medidas de aplicación de las leyes y los reglamentos

pertinentes, a fin de asegurar la eficacia del régimen jurídico de propiedad intelectual a nivel nacional. La protección de los derechos de propiedad intelectual en China se basa en un modelo de "vías paralelas y funcionamiento coordinado". Cuando se produce una infracción, el titular de los derechos de propiedad intelectual puede entablar un proceso judicial o presentar una reclamación ante los organismos administrativos competentes. Estos organismos pueden adoptar diversas medidas como recurso para la protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular órdenes de que se ponga fin a la infracción y multas. La cooperación entre los organismos gubernamentales responsables de la observancia de los derechos de propiedad intelectual no ha cesado de reforzarse. En mayo de 2001, la Administración Estatal de Industria y Comercio, el Ministerio de Seguridad Pública y la Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual convocaron una conferencia del Consejo de Estado sobre derechos de propiedad intelectual y llegaron a un consenso para el establecimiento de un mecanismo interinstitucional de enlace, con inclusión de sistemas de intercambio de información y de coordinación de las medidas de observancia. Los titulares de derechos acogieron satisfactoriamente las medidas administrativas por su rápida respuesta a las infracciones y su bajo costo.

23. La Administración china en todos sus niveles es plenamente consciente de la función que desempeña la protección de los derechos de propiedad intelectual en el fomento del desarrollo económico. Las autoridades locales han promulgado un gran número de reglamentos que refuerzan esa protección en consonancia con los aplicados a nivel nacional. Asimismo, se adoptan medidas eficaces, como las acciones conjuntas interregionales, para acabar con la protección regional de los infractores y combatir prácticas ilícitas como la falsificación. En las provincias de China oriental y nororiental se han establecido redes de cooperación para proteger las marcas de fábrica o de comercio. Los Miembros pueden consultar los documentos facilitados por su delegación para obtener más detalles y estadísticas conexas sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en China en 2001. En lo que respecta a la observancia de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, en 2001 se produjeron en total 41.163 infracciones. Los infractores fueron condenados a resarcir daños y perjuicios a los titulares de derechos por un total de 3.343.400 renminbi (RMB), y 86 casos se remitieron a la jurisdicción penal. En cuanto a la aplicación de la Ley de Derecho de Autor, en el año 2001, las autoridades administrativas competentes admitieron a trámite 4.416 casos en total, de los que 4.306 culminaron en resoluciones judiciales. De ellos, 3.607 casos dieron lugar a la imposición de una multa a los infractores; 633 se resolvieron a través de la mediación; y otros 66 se pasaron a la jurisdicción penal. El Comité de Protección de la Calidad y las Marcas para las Empresas con Inversión Extranjera ha reconocido la gran importancia que la Administración china en todos sus niveles atribuye a las eficaces medidas de lucha contra la falsificación de productos.

24. El representante de China dice que la eficaz protección de los derechos de propiedad intelectual es fuente de invención y creación, así como fuerza impulsadora del desarrollo económico y el cambio social. Hay una tendencia irreversible a aumentar el nivel de protección de esos derechos que, a la larga, redundará en favor de los intereses comunes de todos los países. Para terminar, expresa su agradecimiento al Presidente por su empeño en lograr que el examen avance sin contratiempos, a la Secretaría por su concienzuda labor preparatoria y a los Miembros por su actitud dinámica y meticulosa. Dada esa actitud, el representante cree que su delegación tendrá ocasión de oír comentarios favorables a la causa de la protección de la propiedad intelectual en China.

25. El representante de Djibouti dice que la cuestión de los ADPIC es muy ardua y tiene importantes repercusiones, a veces negativas, para países que, simplemente, carecen de suficiente experiencia o acaban de incorporarse a la OMC. Opina que a los países que se adhieren a la OMC se les debe otorgar un plazo suficiente para desenvolverse en esta esfera. La OMC podría no exigir el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. No sólo China, sino también otros países en desarrollo que no tienen mucha experiencia en este ámbito, necesitan cierto tiempo para la reflexión y la adaptación.

26. El representante de las Comunidades Europeas agradece la referencia de la delegación de China al programa de cooperación técnica entre las Comunidades Europeas y China, que ha durado varios años. En su opinión, todos los Miembros podrían felicitar a China por los progresos realizados en ese terreno. El año pasado, las Comunidades Europeas acogieron satisfactoriamente la adhesión de China a la OMC, tras 15 años de negociaciones muy difíciles. La adhesión de China constituye un histórico salto hacia adelante para la OMC, que se convierte así en una verdadera organización mundial. La pertenencia a la OMC beneficiará a China y a sus interlocutores comerciales, reforzará el lugar de China en la economía mundial y asegurará un mayor grado de certidumbre para los comerciantes de China. En esa disposición, las Comunidades Europeas seguirán colaborando con China para asegurar que ocupe el lugar que le corresponde en la OMC.

27. Para beneficiarse plenamente de ser Miembro de la OMC, es indispensable que China cumpla sus condiciones de adhesión de forma oportuna y global. La supervisión del cumplimiento por China de las normas de la OMC será una importante prioridad para las CE en los años venideros. La delegación china ha puesto ya de manifiesto su compromiso con ese proceso. Las Comunidades Europeas cuentan con que China seguirá en esa línea y permitirá la revisión periódica de los progresos realizados. El representante señala que la mejora de la legislación sobre propiedad intelectual de China en los últimos años podría calificarse de extraordinaria. Con excepción de varios aspectos pendientes, y en términos generales, el marco legislativo de protección de los derechos de propiedad intelectual en China se ajusta, básicamente, a las normas internacionales establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Al igual que otros varios Miembros de la OMC, las Comunidades Europeas formularon diversas preguntas relativas al examen de la legislación sobre propiedad intelectual de China, y no recibieron las respuestas hasta la semana pasada. De ahí que su delegación esté analizando aún en detalle las respuestas de China, por lo que tal vez tenga que volver a plantear esta cuestión en el futuro, formular preguntas adicionales y pedir más explicaciones.

28. Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros han analizado detenidamente, en su comunicación relativa al mecanismo de examen de transición de China (documento IP/C/W/371), la situación actual de la legislación sobre propiedad intelectual en ese país. En el párrafo 3 de esa comunicación pedían a China que facilitará más información, en particular, sobre la protección de la información no divulgada con arreglo al artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC y sobre la protección de las indicaciones geográficas. Su delegación tuvo recientemente ocasión de examinar la protección de las indicaciones geográficas con la delegación china, pero sigue planteándose preguntas relativas al funcionamiento de ese tipo de protección. Además, desea examinar la situación actual de los reglamentos de aplicación de la Ley de Derecho de Autor y de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio.

29. En el mismo documento, las Comunidades Europeas examinan detalladamente el éxito del proceso de aplicación de la legislación sobre propiedad intelectual en China. Sin embargo, las Comunidades Europeas consideran que son necesarias nuevas medidas, en particular en materia de observancia. El nivel de piratería y falsificación sigue siendo sumamente alto e inaceptable, por lo que el representante insta a las autoridades chinas a redoblar sus esfuerzos para combatir ambos tipos de infracción. En su opinión, la autoridad interinstitucional es de suma importancia. En muchos países es necesario que gran número de organismos cooperen entre sí y coordinen su actuación, en particular para combatir la piratería y la falsificación. En su comunicación, las Comunidades Europeas recomendaban a China que estableciera una estrategia clara e integral a largo plazo en la esfera de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. A pesar de las notables iniciativas ya emprendidas, es indispensable una estrategia bien diseñada que se desarrolle a lo largo de varios años. Las Comunidades Europeas desean estudiar con las autoridades chinas la forma de mejorar aún más la observancia. El representante confía en que las autoridades chinas analizarán detenidamente las sugerencias expuestas en el párrafo 10 de la comunicación, y espera debatir con China cualquier aspecto relacionado con la comunicación.

30. El representante señala que, en lo que respecta a la observancia, es importante que las autoridades chinas determinen si elevan el límite máximo de las sanciones administrativas. También debe reconsiderarse la disposición relativa a la compensación de las pérdidas, a fin de que el recurso a la acción judicial tenga más interés. En el caso de infractores reincidentes, los criterios para el encausamiento penal deberían ser menos estrictos. Algunas expresiones del Código Penal, tales como "ventas relativamente altas" o "condiciones sumamente graves", deberían definirse con mayor precisión. El procedimiento para solicitar que una marca de fábrica o de comercio se considere marca notoriamente conocida debería aclararse. El representante espera que, tras la promulgación de la nueva Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y su Reglamento de aplicación, la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio empezará a tramitar solicitudes relativas a marcas de fábrica o de comercio extranjeras notoriamente conocidas. Las autoridades aduaneras de China deberían estar facultadas para poner en conocimiento de los fiscales los casos graves que descubran, para su investigación y enjuiciamiento penal. Tanto las elevadas fianzas como las tasas de almacenamiento solicitadas por las autoridades aduaneras de China han disuadido a muchos titulares de hacer valer sus derechos de propiedad intelectual ante la administración de aduanas. Debería reducirse la cuantía de esas fianzas.

31. Por último, el representante señala que las Comunidades Europeas y sus Estados miembros están dispuestos a proseguir su programa de cooperación técnica con China en ese ámbito, en particular en lo que respecta a la observancia.

32. El representante de Corea agradece los comentarios iniciales con que la delegación de China ha descrito la política adoptada por su país para incrementar la protección de la propiedad intelectual y cumplir los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y de otros acuerdos internacionales. Corea se felicita también por la reciente notificación de las leyes y reglamentos de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC por China, así como por sus respuestas a la Lista de cuestiones sobre la observancia, que ponen de manifiesto el empeño de China en cumplir sus obligaciones como nuevo Miembro y en poner sus leyes y reglamentos nacionales en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. Corea tiene gran interés en cooperar estrechamente con China en el área de la propiedad intelectual, ya que, según sus previsiones, las transacciones bilaterales aumentarán sustancialmente en ese ámbito en los próximos años, en consonancia con la expansión general del comercio entre ambos países.

33. Agradece a China sus prontas respuestas a las numerosas cuestiones que le ha formulado. Esa prontitud pone de manifiesto el sincero empeño de China por respetar sus compromisos en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y fortalecer el sistema multilateral de comercio. Corea espera que las respuestas a las preguntas pendientes se facilitarán a su debido tiempo.

34. El representante del Japón expresa su agradecimiento a la delegación de China por su exposición. De conformidad con la sección 18 del Protocolo de Adhesión de la República Popular China, en que se establece el proceso del mecanismo de examen transitorio, el representante hace los comentarios siguientes respecto de la aplicación por China del Acuerdo sobre los ADPIC.

35. Manifiesta que el Japón reconoce los esfuerzos realizados por China durante los últimos años para establecer una legislación que proteja los derechos de propiedad intelectual. Se han introducido varias leyes y, asimismo, se han mejorado las funciones administrativas y judiciales para la aplicación de esas leyes. En su opinión, esas medidas impulsarán la actividad económica internacional y facilitarán las mejoras de desarrollo y tecnología en China. El Japón espera que China notificará al Consejo de los ADPIC las leyes y los reglamentos pertinentes que aún no ha notificado, y desea seguir aclarando la situación relativa a las leyes y los reglamentos y su aplicación mediante las preguntas que ha formulado ya y las que formulará, y las respuestas a esas preguntas.

36. Al Japón le preocupa la grave situación creada en China por las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, incluidas la falsificación y la piratería. Los daños y perjuicios son cada vez

más graves y las exportaciones de mercancías infractoras a terceros países empiezan a tener efectos negativos en el comercio internacional. Aunque reconoce el empeño del Gobierno de China por resolver esos problemas, el Japón espera que China adoptará nuevas medidas para mejorar la situación. Añade que, en abril de 2002, se estableció en el Japón una organización compuesta por más de 150 empresas y asociaciones de numerosos países para dar solución a esos problemas. Esa asociación ha presentado recientemente al Gobierno del Japón una petición urgente relativa a los problemas existentes en China. Tanto el sector privado como el Gobierno del Japón están muy interesados en la protección de los derechos de propiedad intelectual en China.

37. En vista de las circunstancias mencionadas, el Japón pide al Gobierno de China que examine oportunamente las cuestiones siguientes. Puesto que su delegación no tiene, de momento, información suficiente sobre el ordenamiento jurídico de China y su aplicación, tal vez plantee nuevas cuestiones más adelante, cuando tenga un conocimiento más exacto de la situación.

38. En primer lugar, al representante del Japón le preocupa que las medidas de aplicación adoptadas por el Gobierno de China sean insuficientes si se tiene en cuenta la parte II del Protocolo, en particular los artículos 41 y 61. El Japón pide que se siga mejorando la puesta en práctica del actual sistema de protección legal en los aspectos siguientes: a) Procedimientos penales: aplicación activa de los procedimientos penales, incluida la modificación de las directrices de enjuiciamiento criminal, y fortalecimiento de las sanciones penales; b) Procedimientos administrativos: mejora de las medidas de aplicación adoptadas por los organismos administrativos, imposición de sanciones administrativas máximas y aumento del límite superior de esas sanciones; c) Procedimientos judiciales: revisión de las disposiciones sobre compensación de pérdidas para facilitar el recurso a la vía judicial; d) Mejora de los reglamentos y leyes sobre exportación y de la eficacia de las medidas de control destinadas a impedir la exportación de mercancías infractoras; e) Mayor cooperación entre los diferentes organismos de ejecución; f) Eliminación del proteccionismo local: es necesario que el Gobierno de China actúe con firmeza para impedir que los gobiernos regionales y los organismos administrativos favorezcan a las ramas de producción locales; g) Destrucción de las mercancías infractoras: el Japón pide a las autoridades que destruyan por completo las mercancías infractoras confiscadas, a fin de impedir la reincidencia en delitos de falsificación, y que esa destrucción no esté sujeta al pago de tasas por los titulares de los derechos.

39. En cuanto a los procedimientos de examen de patentes, señala que valora el empeño de China por acabar con los retrasos en tales procedimientos, pero sigue preocupado por la posibilidad de que esos retrasos puedan menoscabar los objetivos del párrafo 2 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC.

40. En lo que respecta a la protección de las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas, el representante expresa su preocupación porque esas marcas no reciben el mismo trato que las marcas de fábrica o de comercio chinas, y pide que se aclare cómo se tratará en el nuevo Reglamento de aplicación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio la vigente lista de marcas notoriamente conocidas, prevista en la antigua ley, y si se establecerá una nueva lista en el marco de ese nuevo Reglamento. Pide a China que confirme que, en virtud del nuevo régimen jurídico, la existencia de la lista de marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas con arreglo a la antigua ley no hará que las marcas notoriamente conocidas extranjeras sean objeto de un trato menos favorable que el dispensado a las marcas notoriamente conocidas nacionales en lo que respecta a su protección, incluidas las medidas penales en relación con la observancia.

41. En cuanto a la reglamentación de las licencias de patente y tecnología, dice que a su delegación le preocupa que algunas disposiciones sobre licencias, incluido el artículo 24 del Reglamento sobre el control de la importación y la exportación de tecnología, impongan a los cedentes de licencias extranjeros más cargas que a los nacionales, por lo que pide que ese problema se trate adecuadamente.

42. En cuanto al sistema por el que se requiere que los solicitantes de patentes extranjeros utilicen oficinas de representación designadas como las de los solicitantes extranjeros, el representante señala que, con arreglo al artículo 19 de la Ley de Patentes y al artículo 18 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, los solicitantes extranjeros están obligados a realizar los trámites de obtención de derechos de patente o de marca de fábrica o de comercio en China por conducto de oficinas de representación designadas al efecto por el Gobierno de China. Esa situación puede poner en desventaja a los solicitantes extranjeros. El representante pide que el problema se aborde adecuadamente.

43. En conclusión, el representante del Japón manifiesta su reconocimiento a China por los esfuerzos que ha realizado estos últimos años para mejorar su régimen de propiedad intelectual. Aunque la protección de los derechos de propiedad intelectual se ha reforzado ya de diversos modos, quedan pendientes muchos aspectos a los que el Gobierno de China podría dar solución. Su delegación tiene grandes esperanzas en que China seguirá reforzando la protección de esos derechos en su territorio. Por último, expresa su deseo de que sus comentarios se incluyan en el informe que el Consejo de los ADPIC presente al Consejo General en relación con el mecanismo de examen transitorio, habida cuenta de la posibilidad de que el Consejo General formule una recomendación con arreglo al párrafo 18.2 del Protocolo de Adhesión de China.

44. El representante de los Estados Unidos reconoce y aprecia el arduo trabajo que han llevado a cabo los legisladores, funcionarios administrativos y judiciales y otro personal de China para la revisión, promulgación y elaboración de las nuevas leyes y reglamentos sobre propiedad intelectual, como parte de los compromisos contraídos por China en la OMC, y para el fortalecimiento de su ordenamiento jurídico en el ámbito de la protección y observancia de la propiedad intelectual. La delegación estadounidense reconoce que, además de la revisión de leyes fundamentales, tales como las relativas a patentes, marcas de fábrica o de comercio y derecho de autor, efectuada en los dos últimos años, China ha tenido que promulgar, revisar o anular gran número de leyes, reglamentos y otras medidas de la administración central, así como disposiciones relacionadas con la propiedad intelectual en niveles inferiores al central.

45. Acoge complacido la exposición de la delegación china y el considerable esfuerzo que ha realizado para responder a las preguntas de los Estados Unidos de forma tan cabal. Añade que los comentarios y las preguntas de su delegación han tenido como base, además de las obligaciones enunciadas en el Acuerdo sobre los ADPIC, el informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China (documento WT/MIN(01)/3), que destinan a formar parte del mecanismo de examen transitorio.

46. Los Estados Unidos consideran que un aspecto fundamental de los compromisos de China con la OMC es la transparencia en la elaboración de leyes, reglamentos, normas y otras medidas, incluida la oportunidad de realizar comentarios sobre tales disposiciones, según se hace constar en el párrafo 2 C) de la sección 2 del Protocolo de Adhesión de China y en los párrafos 324 a 336 del informe del Grupo de Trabajo. En particular, el representante dice que China se ha comprometido a publicar sus leyes, reglamentos y otras medidas en un diario oficial y a establecer un plazo prudencial para la presentación de comentarios a las autoridades competentes antes de que se apliquen esas medidas. Además, China ha accedido a poner esas leyes, reglamentos y demás medidas a disposición de los Miembros de la OMC que lo soliciten antes de su aplicación o entrada en vigor. La Ley sobre la Legislación faculta a los funcionarios a permitir la formulación de observaciones, en tanto que exige la publicación de leyes, reglamentos y demás medidas. Los Estados Unidos instan firmemente a China a que dé esa oportunidad en todos los casos. Asimismo, los Estados Unidos se felicitan por la oportunidad de colaborar con China en la elaboración de sus leyes y reglamentos.

47. El representante afirma que los Estados Unidos comparten las preocupaciones expresadas por otros Miembros respecto de los altos niveles de piratería y falsificación existentes en China, a la que

exhorta a adoptar nuevas medidas para reducir significativamente los índices generales de infracción. Añade que los Estados Unidos tienen gran interés en proseguir la cooperación bilateral que ha mantenido con China durante algún tiempo con miras a ultimar la revisión de sus reglamentos de aplicación de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio y derecho de autor, así como ayudar a China a poner sus leyes en conformidad con los nuevos tratados a los que desee adherirse, tales como el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor o la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, de la OMPI.

48. Por último, señala que su delegación ha tenido muy poco tiempo para examinar las respuestas de China a sus preguntas, pero, como resultado de ese breve examen, desea formular unas cuantas preguntas complementarias sobre varios temas fundamentales, y tal vez plantee otras nuevas más adelante.

49. El representante de Suiza agradece a la delegación de China la exposición y el resumen de su nueva legislación sobre propiedad intelectual, y la felicita por su compromiso y considerables esfuerzos para poner su marco legislativo en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. La efectiva protección legal de los derechos de propiedad intelectual y, en particular, la aplicación coherente de esa legislación cumplen una función decisiva para el desarrollo económico y la integración en la comunidad comercial internacional y la OMC. Añade que su delegación ha recibido las respuestas de China a las preguntas que ha formulado y que, en el curso de la semana, presentará varias preguntas complementarias a la delegación china.

50. El representante de Australia agradece a China la información que ha facilitado durante la reunión del Consejo y las respuestas a las preguntas de su delegación, y reconoce los logros de China en la elaboración de sus leyes sobre propiedad intelectual y la sensibilización de los funcionarios y empresarios chinos respecto de la importancia de la protección y la observancia eficaces de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, toma nota de las preocupaciones expresadas por algunas delegaciones sobre la forma en que China cumple las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Por otra parte, se congratula por la disposición de China a persistir en su empeño de mejorar la aplicación del Acuerdo y por la oportunidad de colaborar con China en ese empeño en la OMC, en un foro regional como el APEC y a nivel bilateral, donde han establecido un diálogo eficaz sobre varias cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual.

51. El representante del Pakistán agradece a la delegación de China su concisa y exhaustiva exposición y felicita a China por cumplir las obligaciones establecidas en su Protocolo de Adhesión. Se trata de una actuación digna de elogio, dados los numerosos trabajos de modificación de las principales leyes y reglamentos por las que se rige la protección de los derechos de propiedad intelectual. Añade que los Miembros de la OMC deberían reconocer también la prontitud con que China ha respondido a sus obligaciones, así como a las preguntas formuladas por otros Miembros. Tal prontitud es testimonio más que suficiente del nivel de seriedad con que el Gobierno de China se adhiere a la OMC. Sus obligaciones no deberían ser más gravosas que las asumidas por el resto de los Miembros. Por último, el representante del Pakistán garantiza a China la plena cooperación de su delegación en la forma y el momento en que sea necesaria.

52. La representante del Canadá felicita a China por el enorme progreso realizado en un plazo muy breve y le da las gracias por su exhaustiva descripción y las respuestas a las preguntas de su delegación. Está claro que China no escatima esfuerzos para introducir amplias modificaciones que den cumplimiento al Acuerdo sobre los ADPIC. En particular, la representante valora positivamente los comentarios de la delegación china sobre las medidas de aplicación puestas ya en vigor por ese país, e insta a China a seguir trabajando en ese importantísimo aspecto de los derechos de propiedad intelectual. Su delegación está analizando las respuestas que ha recibido y tal vez formule algunas preguntas complementarias.

53. El representante de China dice que su delegación acoge con gran satisfacción los comentarios y las preguntas de varias delegaciones, a las que agradece su activa participación y su colaboración en este examen. Por otra parte, desea comentar algunas cuestiones que parecen ser motivo común de preocupación para otros Miembros.

54. Respecto del derecho de autor, el representante dice que, una vez que entre en vigor el reglamento de aplicación revisado, cada departamento administrativo local competente en materia de derecho de autor podrá investigar y combatir todas las infracciones (incluidas las que afecten a titulares de derechos extranjeros) que tengan lugar en su propia demarcación administrativa, sin necesidad de la autorización del departamento administrativo de derecho de autor dependiente del Consejo de Estado. En consecuencia, en lo que respecta a las sanciones administrativas, no existen procedimientos distintos aplicables a los casos nacionales que afecten a empresas extranjeras. El artículo 21 del Reglamento de aplicación de la Ley de Derecho de Autor establece que la utilización con arreglo a la Ley de Derecho de Autor de una obra publicada, sin la autorización del titular de los derechos de autor, no atentará contra la explotación normal de la obra ni causará un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de ese titular. Tal disposición está en conformidad con el conocido modelo de examen en tres fases, previsto en el Convenio de Berna y en el Acuerdo sobre los ADPIC. En la ejecución de la Ley de Derecho de Autor, los criterios de "explotación razonable" o "licencia legal legítima" no deberán aplicarse si violan la disposición mencionada.

55. En relación con las patentes, el representante señala que el proceso de consulta previsto en el artículo 57 de la Ley de Patentes de la República Popular China es opcional. No es obligatorio ni constituye un requisito previo para incoar un proceso judicial. A juicio del representante, las consultas anteriores a la adopción de medidas judiciales o los esfuerzos para resolver la controversia fuera del tribunal son una práctica corriente para la solución de las diferencias jurídicas en la mayoría de los países. El artículo 10 de la Ley de Patentes de la República Popular China dispone que toda cesión del derecho a solicitar una patente, o del derecho de patente, efectuada por entidades o particulares chinos a un extranjero, deberá ser aprobada por el departamento competente del Consejo de Estado. Esta restricción no se aplica a los extranjeros que cedan su derecho a solicitar una patente o su derecho de patente a entidades o particulares chinos, o a otros extranjeros. En consecuencia, el artículo 10 de la Ley de Patentes de China no está en conflicto con el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

56. En relación con las marcas de fábrica o de comercio, el representante señala que el requisito exigido a los extranjeros de utilizar una agencia de marcas de fábrica designada es una práctica internacional, más que algo peculiar de China, y tal práctica se ajusta cabalmente a lo dispuesto en el párrafo 3) del artículo 2 del Convenio de París y en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. El problema de que las empresas extranjeras solamente pueden utilizar determinados agentes de marcas ya no existe. Desde el 1º de enero de 2001, todas las agencias de marcas de fábrica o de comercio legalmente establecidas están facultadas para tramitar asuntos relativos a marcas de fábrica o de comercio que los extranjeros les encomienden. Además, los extranjeros obligados a utilizar los servicios de un agente son los que no estén domiciliados ni tengan un establecimiento industrial o comercial en China. Según la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y su Reglamento de aplicación, la protección de las marcas notoriamente conocidas se aplica por igual tanto a los titulares de derechos nacionales como a los extranjeros. China ha otorgado un nivel de protección muy alto a marcas extranjeras notoriamente conocidas, tales como IBM, Adidas o Nike, por mencionar sólo algunas. La información que figura en la lista de marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas y en el sitio Web mencionado en las preguntas no es exacta. Para aclarar dos cuestiones al respecto, el representante dice que, en primer lugar, la lista es simplemente un registro de casos tramitados en la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio, lo que no significa que las marcas que no figuren en la lista no se protejan como marcas notoriamente conocidas. En segundo lugar, la protección de ese tipo de marcas está expresamente prevista en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y en su Reglamento de aplicación. Se están revisando las normas específicas de

procedimiento para la determinación de las marcas notoriamente conocidas. Cuando surge una diferencia, el titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida puede recurrir a las autoridades administrativas o judiciales para que determinen si su marca es o no notoriamente conocida. Una vez determinada de ese modo la condición de una marca, se rechazará la solicitud de registro de la otra parte. El registro impugnado se anulará, y se prohibirá el uso de la marca impugnada.

57. En cuanto a los esquemas de trazado de los circuitos integrados, afirma que las disposiciones del Reglamento sobre la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados están en plena conformidad con las disposiciones de la sección 6 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. Si los elementos discretos cumplen las disposiciones de los artículos 2 y 4 del Reglamento, pueden gozar de protección mediante la solicitud de registro del esquema de trazado con arreglo al Reglamento. Cuando los elementos discretos no cumplan los requisitos del Reglamento y, por tanto, no puedan gozar de la protección del registro de los esquemas de trazado, aún es posible protegerlos como secretos comerciales de conformidad con la Ley de represión de la competencia desleal. Además, si la tecnología comprendida en los elementos discretos reúne los requisitos para solicitar una patente de conformidad con la Ley de Patentes, se podrá recabar la protección de una patente mediante la pertinente solicitud.

58. Respecto de las indicaciones geográficas, el representante dice que tales indicaciones gozan sobre todo de protección con arreglo al sistema de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y su Reglamento de aplicación. Los artículos 3, 16, 52 y 53 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y las disposiciones pertinentes del Reglamento de aplicación revisado prescriben la adecuada protección de las indicaciones geográficas que exige el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, la Ley de represión de la competencia desleal también prevé protección de las indicaciones geográficas.

59. Con respecto a la observancia, el representante indica que las autoridades administrativas de China tienen facultades para imponer sanciones adecuadas a fin de impedir o frenar la comisión de nuevas infracciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Derecho de Autor, el departamento de administración del derecho de autor puede imponer sanciones administrativas a un infractor que atente también contra los intereses públicos. Esas sanciones comprenden: la orden de que cesen las infracciones; el decomiso de los ingresos ilícitos; la confiscación o destrucción de las copias infractoras; la imposición de una multa, y la incautación del material, las herramientas y los instrumentos utilizados principalmente para producir las copias fraudulentas. En caso de infracciones graves, las disposiciones constituyen una base jurídica suficiente para impedir o frenar la comisión de nuevas infracciones mediante procedimientos judiciales. En los casos de infracción de marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor, el infractor será condenado a una pena de que no exceda de tres años de privación de libertad, y, simultánea o independientemente, al pago de una multa. Si la suma obtenida mediante la venta es elevada, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años y no más de siete y, simultáneamente, al pago de una multa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Derecho de Autor de la República Popular China, el infractor tiene que satisfacer una indemnización por daños y perjuicios proporcional a la pérdida real sufrida por el titular del derecho o los ingresos ilícitos del infractor. Cuando no se pueda determinar la pérdida real sufrida por el titular del derecho o los ingresos ilícitos del infractor, el tribunal podrá fijar una indemnización que no exceda de 500.000 yuan RMB. En general, se aplica un límite máximo de 500.000 yuan RMB por proceso. En caso de infracción de una patente, el infractor será condenado a pena de prisión que no exceda de tres años o a detención penal y, simultánea o independientemente, al pago de una multa. El representante dice que la protección de la propiedad intelectual por China está en plena conformidad con las prescripciones del artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de procedimiento y sanciones penales. Las sanciones penales de China figuran entre las más severas del mundo.

60. El representante explica que lo expuesto son comentarios y respuestas iniciales a algunas de las preguntas planteadas en la reunión. En lo que respecta a las demás preguntas, su delegación ya dio respuestas por escrito antes de la reunión o las facilitará lo antes posible después.

61. Por último, el representante expresa su firme creencia en que este examen ha sido de gran ayuda a China para reforzar su régimen de protección de la propiedad intelectual. A China no le faltan razones para proporcionar un alto nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual, ya que cuenta con un número creciente de invenciones locales y marcas de fábrica o de comercio famosas que requieren protección. Además, la capacidad de China para atraer más inversiones extranjeras a su territorio y el interés de las empresas extranjeras en introducir nuevas tecnologías en China dependerán en gran medida del nivel de su protección de los derechos de propiedad intelectual. Aunque éste es su primer año de adhesión a la OMC, China ha observado ya un rápido aumento de las inversiones extranjeras en el país, lo que pone de manifiesto la gran determinación del Gobierno a proteger los derechos de propiedad intelectual y los progresos realizados hasta ahora en ese terreno.

62. El Presidente propone que el Consejo conceda a la delegación de China la oportunidad de responder, más adelante en la reunión, a cualquier pregunta inicial o complementaria a la que no haya contestado aún. En caso de que haya preguntas y respuestas escritas que no puedan presentarse antes de que termine la reunión, se dará oportunidad a las delegaciones que deseen formular preguntas para que lo hagan después de la reunión, de conformidad con el procedimiento ordinario de este Consejo.

63. El Consejo así lo acuerda.¹

Taipei Chino

64. El Presidente recuerda que, en su reunión de marzo de 2002, el Consejo decidió examinar la legislación del Taipei Chino en la presente reunión. La Secretaría ha recibido del Taipei Chino la notificación de las leyes y reglamentos de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, así como sus respuestas a la Lista de cuestiones sobre la observancia. La notificación del Taipei Chino se ha distribuido en el documento IP/N/1/TPKM/1, y los textos de sus principales leyes y reglamentos en los correspondientes documentos de la serie de leyes. Las respuestas a la Lista de cuestiones sobre la observancia figuran en el documento IP/N/6/TPKM/1. El Taipei Chino ha recibido preguntas de Australia, el Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, el Japón, Corea, los Estados Unidos y Suiza (documentos IP/C/W/364, 366, 367, 362, 380, 379 y 372, respectivamente). Las respuestas a las preguntas del Japón se distribuyeron antes de la reunión en el documento IP/C/W/373. La Secretaría ha recibido recientemente copia de las respuestas facilitadas a Austria, el Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, Corea, los Estados Unidos y Suiza (distribuidas posteriormente en el documento IP/C/W/373/Add.1). Además, el Japón acaba de presentar preguntas adicionales y complementarias (distribuidas posteriormente en el documento IP/C/W/362/Add.1).

65. 65. El representante del Taipei Chino dice que, desde que su país pasó a ser Miembro de la OMC el 1º de enero de 2002, su delegación ha presentado un total de 26 notificaciones sobre leyes y reglamentos del Taipei Chino relacionados con la propiedad intelectual. En los dos últimos años, los miembros del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del Taipei Chino a la OMC han hecho un gran esfuerzo para revisar todas las leyes y los reglamentos pertinentes y asegurar su conformidad con las normas de la OMC. En particular, la legislación del Taipei Chino sobre propiedad intelectual es una de las materias respecto de las cuales los miembros del Grupo de Trabajo han expresado su satisfacción. Sin embargo, el Gobierno de su país no se contentará con los logros conseguidos, ya que, a su entender, las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual evolucionan al ritmo de

¹ En relación con el debate ulterior, véanse los párrafos 84 a 96 *infra*.

una sociedad en constante expansión, y la legislación debería tener capacidad de respuesta frente a los rápidos progresos de la tecnología moderna.

66. Con objeto de dar solución a esos problemas, varios proyectos de modificación de la legislación sobre derecho de autor, marcas de fábrica o de comercio, patentes y semillas están siendo objeto de revisión administrativa o legislativa. Cuando esas modificaciones estén ultimadas, su delegación lo notificará al Consejo. El representante se muestra satisfecho de que el Consejo estudie esas cuestiones y disponga su examen en el momento oportuno. De hecho, algunos Miembros han mostrado ya su interés por ellas al formular preguntas concretas sobre los proyectos de modificación mencionados. En aras de la transparencia, su delegación hará todo lo posible por responder a esas preguntas, a pesar de que las propuestas de modificación aún no estén listas para su examen. El Gobierno de su país da gran importancia a este ejercicio de examen, y ha organizado un gran equipo con personal de los organismos interesados para responder a las preguntas ya formuladas y a las posibles preguntas complementarias, a ser posible ya en la presente reunión. El representante expresa su gratitud a los Miembros que han formulado preguntas que demuestran su gran interés por la legislación sobre propiedad intelectual del Taipei Chino.

67. El representante indica que la mejora constante de la protección de los derechos de propiedad intelectual ha sido siempre tema de gran prioridad en el programa sobre comercio del Gobierno de su país. El Taipei Chino cree firmemente que la innovación tecnológica y la transferencia y divulgación de la tecnología sólo pueden fomentarse mediante una protección suficiente y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, y que esa protección desempeña una importante función en el desarrollo comercial sostenible que permitirá mejorar su bienestar social y económico. Reconoce además que es importante poner su régimen de propiedad intelectual en conformidad con las normas internacionales. En relación con su adhesión a la OMC, el Gobierno del Taipei Chino ha revisado y aplicado leyes y normas sobre propiedad intelectual para poner su régimen de propiedad intelectual no sólo en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, sino también con otros convenios internacionales pertinentes. El representante señala que el Gobierno de su país sigue modificando según corresponde sus leyes y reglamentaciones relacionadas con la propiedad intelectual para adaptarlas a las normas internacionales. Tras observar que los Miembros han formulado preguntas relativas a los regímenes de derecho de autor, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, obtenciones vegetales, esquemas de trazado de circuitos integrados, información no divulgada y observancia, el representante expone algunos importantes aspectos del ordenamiento jurídico en lo que respecta a los distintos ámbitos de la propiedad intelectual, con objeto de que los Miembros puedan comprender esas cuestiones dentro de una perspectiva más amplia y con referencia al sistema legislativo sobre propiedad intelectual del Taipei Chino.

68. La vigente Ley de Derecho de Autor, que entró en vigor el 14 de noviembre de 2001, fue formulada de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC en conjunción con el Convenio de Berna. Todos los nacionales de países Miembros de la OMC tienen derecho a recibir el mismo nivel de protección del derecho de autor que los nacionales del Taipei Chino. La Ley de Derecho de Autor prevé, con carácter retroactivo desde la fecha de adhesión del Taipei Chino a la OMC, un plazo de protección del derecho de autor cuya duración comprende la vida del autor más 50 años, o 50 años desde la fecha de primera publicación.

69. La vigente Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio se modificó en 1997 y entró en vigor el 1º de noviembre de 1998. Las combinaciones de colores pueden ser objeto de protección. Además, el titular de los derechos ya puede solicitar la destrucción o necesaria eliminación de otro tipo de las mercancías infractoras o los materiales o accesorios utilizados para cometer la infracción. Para ampliar la protección de las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas o las marcas de servicios, el Taipei Chino ha recurrido a la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, adoptada por la asamblea de la Unión de París

para la Protección de la Propiedad Industrial y por la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 1999. Los Criterios básicos para determinar la condición de marca notoriamente conocida y marca de servicios de 2000 se establecieron de conformidad con la Recomendación conjunta mencionada. Las indicaciones geográficas se protegen con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC. Entre las leyes y normas relacionadas con esa protección figuran la Ley de Comercio Leal y la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio. Además, el 19 de abril de 2000 se promulgó la Ley que regula el consumo de tabaco y alcohol, en cuyo marco entró en vigor, el 30 de diciembre de 2000, el Reglamento relativo al etiquetado de bebidas alcohólicas. En virtud de esas disposiciones se dispensa protección adicional a las bebidas alcohólicas.

70. Las patentes de invención, de modelos de utilidad y de dibujos y modelos industriales se protegerían con arreglo a la Ley de Patentes del Taipei Chino. La modificación más reciente de la Ley de Patentes, relacionada con la adhesión del Taipei Chino a la OMC, entró en vigor el 1º de enero de 2002. Sus disposiciones, por ejemplo sobre trato nacional de las reivindicaciones de prioridad, materia patentable, duración de la protección, derechos conferidos y excepciones a esos derechos, y otros usos sin autorización del titular de los derechos, están en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. La Ley de Protección de los Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados, entró en vigor el 11 de febrero de 1996, está en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y con el Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados (adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989). Esa Ley fue modificada parcialmente y se promulgó el 12 de junio de 2002. En un principio, la protección de los secretos comerciales se basaba en las normas del Código Civil, el Código Penal y la Ley de Comercio Leal. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Gobierno promulgó en 1996 la Ley de Secretos Comerciales para aclarar las disposiciones relativas a la correspondiente definición, la propiedad, las infracciones y las compensaciones civiles. Desde 1993 se mantiene en vigor el sistema de vigilancia posterior a la comercialización aplicable a los nuevos medicamentos. Todos los datos sobre ensayos presentados para obtener la aprobación de la autoridad competente se benefician de la mencionada protección provisional. El representante cree que ese sistema está en conformidad con el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.

71. La observancia de los derechos de propiedad intelectual es de gran importancia para la protección de la propiedad intelectual. El Taipei Chino ha adoptado estrictas medidas de observancia para combatir la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería del derecho de autor. En el mecanismo de observancia de los derechos de propiedad intelectual intervienen los organismos oficiales a diversos niveles, incluidos los tribunales, las fiscalías, la policía, la administración de aduanas, la Oficina de Propiedad Intelectual y el Comité Antifalsificación del Ministerio de Asuntos Económicos. Además, se ha puesto en vigor el Reglamento relativo a la suspensión por las autoridades aduaneras del despacho de mercancías que infrinjan derechos de autor o derechos de plancha de impresión, a fin de prohibir la importación y exportación de mercancías que vulneren las leyes de derecho de autor. Para combatir las actividades de falsificación y piratería, en particular la piratería de discos ópticos, se ha promulgado la Ley sobre Discos Ópticos, en vigor desde el 16 de noviembre de 2001. Además, se ha establecido un Grupo de Trabajo Conjunto para la Observancia respecto de los Discos Ópticos -equipo dedicado a combatir la falsificación y la piratería- para integrar el personal y los recursos de los organismos pertinentes y reducir eficazmente, con ayuda de la fuerza policial, las actividades de falsificación y piratería. Las entidades comerciales no pueden fabricar discos ópticos a menos que obtengan previamente autorización para depositar el código de identificación del origen de los discos ópticos. A fin de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, el Gobierno ha declarado el año 2002 como "Año de acción para la protección de los derechos de propiedad intelectual". Coincidiendo con esa declaración, desde el 30 de enero de 2002 se han llevado a cabo en toda la isla numerosas campañas contra la falsificación y la piratería. Se prevé que se lograrán más y mejores resultados.

72. El Taipei Chino da gran importancia a la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y considera que la protección de esos derechos forma parte indispensable de la vida diaria. Como Miembro de la OMC, el Gobierno participará activamente en las negociaciones comerciales multilaterales que se llevan a cabo en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC. El Taipei Chino está dispuesto a poner sus leyes y reglamentos relacionados con la propiedad intelectual en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y otros convenios internacionales pertinentes.

73. En conclusión, el representante del Taipei Chino dice que la época de la tecnología de la información ha tenido enormes repercusiones en el alcance y la estructura del régimen de protección de la propiedad intelectual. Para hacer frente a ese desafío sin precedente, los Miembros de la OMC han revisado debida y oportunamente sus disciplinas sobre propiedad intelectual. El Taipei Chino no es una excepción. Para mantener su régimen de propiedad intelectual debidamente actualizado, paralelamente a su evolución en la OMC y en otros convenios internacionales, el Taipei Chino cree que necesita asistencia técnica que le permita acceder a la información de interés sobre propiedad intelectual y participar en actividades relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, así como cumplir sus obligaciones de notificación en interés de la transparencia, con arreglo a lo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC.

74. El representante del Japón expresa su agradecimiento al Taipei Chino por su exhaustiva exposición y por las respuestas a las preguntas de su delegación. Añade que, el 12 de septiembre de 2002, el foro establecido por la Asociación Industrial presentó al Gobierno del Japón un conjunto de preguntas urgentes sobre la aplicación del régimen de propiedad intelectual por el Taipei Chino. En su opinión, esas preguntas reflejan el profundo interés del Gobierno del Japón y del sector privado por la protección de los derechos de propiedad intelectual en el Taipei Chino.

75. El representante de Corea felicita al Taipei Chino por su exhaustiva exposición y por la notificación de sus leyes y reglamentos de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. Asimismo, expresa su reconocimiento al Taipei Chino por su labor para poner su régimen de propiedad intelectual en plena conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, y manifiesta su interés por colaborar estrechamente con el Taipei Chino en el ámbito de la propiedad intelectual, ya que es uno de los principales interlocutores comerciales de Corea en la región. Por último, agradece la prontitud de las respuestas del Taipei Chino a las preguntas formuladas por su delegación.

76. El representante de los Estados Unidos da las gracias a la delegación del Taipei Chino por su exposición, sus respuestas a las preguntas de los Estados Unidos y su intensa labor para poner el régimen de propiedad intelectual del Taipei Chino en conformidad con las obligaciones contraídas en la OMC. Los Estados Unidos, que han disfrutado de una larga relación con el Taipei Chino en materia de propiedad intelectual, reconocen los progresos realizados, pero insisten en que la situación de la propiedad intelectual en el Taipei Chino sigue siendo sumamente grave. Manifiesta especial preocupación respecto de la necesidad de culminar el proceso de modificación de la legislación sobre derecho de autor del Taipei Chino para ponerla en plena conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y respecto de la situación en materia de represión de la piratería del derecho de autor. En particular, señala a la atención de los Miembros la pregunta 12, formulada por los Estados Unidos en relación con la cuestión de la observancia. En esa pregunta, los Estados Unidos destacan el hecho de que el nivel de piratería de discos ópticos en el Taipei Chino sigue siendo elevado a pesar de la reciente promulgación de la legislación sobre discos ópticos. Según se ha informado, las pérdidas en el sector del derecho de autor de los Estados Unidos superaron los 300 millones en 2001 como resultado de la piratería. También se ha indicado que en el Taipei Chino existen, como mínimo, 61 fábricas conocidas de discos ópticos y nueve o más fábricas clandestinas con más de 1.100 líneas de reproducción, incluidas 93 líneas de DVD, más de 200 líneas de discos compactos de vídeo y un número superior a 800 líneas de CDR. Todas esas líneas se dedican a la fabricación de medios ópticos acabados, incluidos CD, CD-ROM, VCD, DVD y CDR, así como medios en blanco. La capacidad de producción potencial total de esas fábricas, excluida la capacidad de producción de

CDR, es superior a 1.000 millones de unidades, cifra muy superior a la demanda interna legítima de 40 millones de unidades. Para terminar, el representante expresa su satisfacción por el hecho de que el Taipei Chino haya declarado el presente año como año especial de la observancia. Añade que el Gobierno de su país está decidido a colaborar con el Taipei Chino para modificar y reducir significativamente el nivel de piratería del derecho de autor, en particular la piratería de discos ópticos, en este año de observancia. Por último, espera que el Gobierno de su país pueda constatar la existencia de mejoras espectaculares de la situación en un futuro no demasiado lejano.

77. El representante de Suiza expresa su reconocimiento al Taipei Chino por su exhaustiva exposición y dice que la elección del año 2002 como año de la protección de la propiedad intelectual es un símbolo de su compromiso con esa protección. Espera que las medidas y las iniciativas adicionales adoptadas por el Taipei Chino durante el presente año sean eficaces y sostenibles, en particular en materia de observancia. Asimismo, manifiesta su interés por cooperar con el Taipei Chino en el ámbito de la propiedad intelectual. Añade que su delegación ha recibido, en el curso de su procedimiento de examen, las respuestas del Taipei Chino a sus preguntas, ha analizado esas respuestas y, de momento, no formulará preguntas complementarias, aunque se reserva el derecho a plantear nuevas preguntas durante el procedimiento, si fuese necesario.

78. La representante del Canadá se suma a los demás Miembros en su expresión de reconocimiento al Taipei Chino por su labor para cumplir sus obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y por su exhaustivo informe. Aunque está claro que el Taipei Chino está adoptando muchas e importantes medidas para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC y las obligaciones que establece, la representante coincide en que aún queda trabajo por hacer. Además, agradece las respuestas a las preguntas del Canadá.

79. El representante de Australia agradece al Taipei Chino su exposición y las respuestas a las preguntas de su delegación. Australia y el Taipei Chino mantienen una positiva relación comercial bilateral en el ámbito de la propiedad intelectual y, por consiguiente, cooperan estrechamente en otros foros, tales como el APEC. Australia felicita al Taipei Chino por los esfuerzos realizados para poner su legislación en conformidad con las normas establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Asimismo, toma nota de las preocupaciones manifestadas por otras delegaciones y valora positivamente la disposición del Taipei Chino a seguir colaborando con los demás Miembros en relación con estas cuestiones.

80. El representante de las Comunidades Europeas agradece al Taipei Chino la información facilitada y reconoce que, en los últimos años, ese país ha mejorado considerablemente la protección de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, en respuesta a las continuas quejas acerca de las insuficientes medidas de observancia, el Taipei Chino debería trabajar con premura en la elaboración de una estructura adecuada para imponer esa observancia, comenzando por el ordenamiento jurídico y la formación idónea de los jueces que entienden en litigios relacionados con la propiedad intelectual. Las empresas de las CE han mostrado especial preocupación por la insuficiencia de las medidas de observancia adoptadas para combatir la persistente fabricación y exportación de soporte lógico, videojuegos y otros medios ópticos pirata, en particular discos compactos objeto de piratería. Otro motivo de preocupación es la falta de protección adecuada para el envasado y la presentación de las mercancías (el "atuendo comercial"). En el Taipei Chino, el problema de las imitaciones es particularmente grave en lo que respecta a los bienes de consumo y las bebidas espirituosas. La copia de combinaciones de colores, formas y materiales con la apariencia de marcas europeas notoriamente conocidas es una práctica generalizada. El problema del falso etiquetado y de las "imitaciones" entre productos se reduciría, probablemente, si el Taipei Chino introdujese una protección adecuada para las indicaciones geográficas, como debería hacer con arreglo al artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, el representante insta al Taipei Chino a dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud del cual debe concederse protección adicional a los vinos y las bebidas espirituosas, no sólo para impedir que

terceros registren una marca de fábrica o de comercio que contenga una indicación geográfica, sino también para impedir que terceros utilicen un signo de ese tipo en el comercio.

81. El representante del Taipei Chino expresa su agradecimiento a todas las delegaciones que han contribuido con preguntas y observaciones, así como con palabras de elogio a las iniciativas legislativas y las medidas de observancia del Taiwán Chino en materia de propiedad intelectual. Añade que el Gobierno de su país está dispuesto a cumplir plenamente el Acuerdo sobre los ADPIC y las normas de la OMC sobre legislación y práctica relativas a los derechos de propiedad intelectual, e invita a los Miembros a formular preguntas complementarias durante la reunión del Consejo o después. Asimismo, facilita verbalmente respuestas iniciales a las preguntas adicionales y complementarias formuladas por el Japón (las posteriores respuestas por escrito pueden consultarse en el documento IP/C/W/373/Add.1). Para terminar, expresa su agradecimiento a todas las delegaciones que han colaborado con su delegación mediante la aportación de información y preguntas y la constante comunicación con el Taipei Chino. También reitera la disposición del Gobierno de su país a cumplir plenamente el Acuerdo sobre los ADPIC y las normas de la OMC.

82. El Presidente sugiere que el Consejo dé a la delegación del Taipei Chino la oportunidad de responder a cualquier pregunta inicial o complementaria a la que aún no haya respondido durante la reunión.

83. El Consejo así lo acuerda.

Deliberaciones ulteriores

84. Volviendo sobre el examen de este punto del orden del día, el Presidente recuerda que el Consejo acordó dar a las delegaciones de China y del Taipei Chino la oportunidad de responder a las preguntas iniciales o complementarias a las que aún no hubiesen tenido ocasión de contestar. Añade que China ha facilitado ya sus respuestas a algunas de las preguntas recibidas de Corea, pero no ha podido responder aún a todas las preguntas. China ha recibido algunas preguntas adicionales del Japón y preguntas complementarias de los Estados Unidos.

85. El representante de China dice que, tras finalizar el ejercicio del mecanismo de examen transitorio de su país dos días antes, el Japón y los Estados Unidos formularon algunas preguntas complementarias a China. Su delegación ha facilitado ya las respuestas escritas respectivas, de las que ha entregado copia a la Secretaría (distribuidas posteriormente en el documento IP/C/W374/Add.2). Si el Japón o los Estados Unidos desean formular nuevas preguntas, China se complacerá en examinarlas con esos países y con los demás Miembros de la OMC en el marco del examen ordinario de la legislación, a nivel bilateral o a través de los servicios de información sobre asuntos relacionados con la OMC establecidos en el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC). En cuanto a las preguntas pendientes formuladas por Corea, el representante dice que su delegación facilitará cuanto antes las respuestas por escrito.

86. El Presidente recuerda que el Taipei Chino ha facilitado ya respuestas verbales a algunas de las preguntas formuladas por el Japón y ha recibido preguntas complementarias de los Estados Unidos.

87. El representante del Taipei Chino dice que, tras la reunión del martes, su delegación recibió, además de las preguntas complementarias del Japón, las de los Estados Unidos. Tras responder verbalmente a algunas de ellas, el representante indica que las respuestas por escrito se facilitarán en breve (distribuidas posteriormente en el documento IP/C/W/373/Add.2). Por último, dice que su delegación espera con impaciencia la pronta terminación del examen de la legislación y que pondrá su máximo empeño en responder oportunamente a todas las preguntas complementarias.

88. El representante del Japón agradece a China sus rápidas respuestas por escrito a las nuevas preguntas de su delegación, que aún está analizando las respuestas escritas a sus preguntas iniciales. Además de esas respuestas, su delegación desea examinar los documentos adicionales presentados dos días antes por China. Además, tal vez desee formular nuevas preguntas y observaciones en el proceso del mecanismo de examen transitorio del presente año.

89. El representante de los Estados Unidos expresa su agradecimiento al Taipei Chino y a China por los esfuerzos desplegados en la presente reunión para responder a las preguntas complementarias de su delegación, así como su reconocimiento por el interés y las oportunidades dedicados a aclarar determinadas cuestiones. Añade que su delegación tiene previsto examinar la respuestas con más detenimiento y, tal vez, formular algunas preguntas adicionales como parte del mecanismo de examen transitorio

90. El representante de China dice que su país está dispuesto a examinar las preguntas complementarias con los demás Miembros de la OMC, en el marco del examen de la legislación, a nivel bilateral o a través del servicio de información de China para asuntos relacionados con la OMC. El ejercicio del mecanismo de examen transitorio ha de llevarse a cabo sobre la base del artículo 18 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC. China no está obligada a compartir responsabilidades que no estén previstas en esa disposición.

91. El Presidente dice que, de conformidad con el procedimiento ordinario, el Consejo deberá adoptar un calendario para las posibles nuevas preguntas complementarias y sus correspondientes respuestas. A ese respecto, sugiere que el Consejo dedique el plazo que media hasta el 11 de octubre para enviar por escrito posibles preguntas complementarias, con copia a la Secretaría, y hasta el 8 de noviembre para dar respuestas por escrito, igualmente con entrega de copia a la Secretaría.

92. En lo que respecta a China, el Presidente señala que el Consejo deberá adoptar también una decisión sobre el informe que ha de presentar al Consejo General con arreglo al mecanismo de examen transitorio, y propone que se pida a la Secretaría que prepare un informe fáctico en que se describan las actividades realizadas y se haga referencia a la documentación presentada, incluidas las partes pertinentes de las actas del Consejo.

93. El representante del Japón dice que, a su entender, el informe se presentará para que el Consejo General lo examine y formule una posible recomendación con arreglo al párrafo 2 de la sección 18 del Protocolo de Adhesión de China. Al Consejo General incumbe decidir si debe o no formular una recomendación, pero es necesario que el Consejo de los ADPIC facilite la información necesaria para el examen y la decisión del Consejo General. Por consiguiente, es preciso que el informe sea fiel reflejo del ejercicio del mecanismo de examen transitorio llevado a cabo en el Consejo de los ADPIC, con inclusión de las preocupaciones concretas manifestadas por el Japón.

94. El representante de China dice que, según la sección 18 del Protocolo sobre la Adhesión de China a la OMC, "[l]a consideración de una cuestión de conformidad con esta sección no redundará en perjuicio de los derechos y obligaciones que correspondan a los Miembros, incluida China, en virtud del Acuerdo sobre la OMC o cualquier Acuerdo Comercial Plurilateral", lo que significa que el proceso del mecanismo de examen transitorio no deberá imponer cargas excesivas a los Miembros de la OMC, incluida China. El objetivo último del mecanismo de examen transitorio es facilitar y mejorar la aplicación por China de los acuerdos de la OMC y de sus compromisos en el marco del Protocolo.

95. El Presidente recuerda que el Consejo acordó que su examen normal de la aplicación por China del Acuerdo sobre los ADPIC y el examen en el marco del mecanismo de examen transitorio se realizarían conjuntamente, y que el examen normal se llevaría a cabo con arreglo a los procedimientos habituales del Consejo.

96. El Consejo toma nota de las intervenciones realizadas y acuerda proceder como ha sugerido el Presidente.

D. CUESTIONES RELATIVAS A LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 23 A PRODUCTOS DISTINTOS DE LOS VINOS Y LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS

97. El Presidente recuerda que, según se expone en el párrafo 18 de la Declaración Ministerial de Doha, la Conferencia Ministerial tomó nota de que "las cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas prevista en el artículo 23 a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas se abordarán en el Consejo de los ADPIC de conformidad con el párrafo 12 de la presente Declaración". Desde su última reunión, el Consejo ha recibido una comunicación de Australia, el Canadá, los Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Nueva Zelandia y el Paraguay sobre las implicaciones de la ampliación del ámbito del artículo 23 (documento IP/C/W/360). Además, el Consejo acaba de recibir una nueva comunicación de la Argentina, Australia, el Canadá, Chile, El Salvador, los Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Nueva Zelandia, el Paraguay, la República Dominicana y el Taipei Chino sobre la misma cuestión (distribuida posteriormente en el documento IP/C/W/386).

98. Según lo acordado por el Consejo en su última reunión, el Presidente ha distribuido una Lista recapitulativa de cuestiones (documento JOB(02)/117) con objeto de mantener un debate más sistemático sobre este tema en la presente reunión. En su preparación, el Presidente ha tenido en cuenta no sólo los debates de la reunión de junio y las reuniones anteriores del Consejo, sino también las comunicaciones posteriores de las delegaciones y las cuestiones planteadas en consultas informales. El Presidente destaca que la finalidad de la Lista recapitulativa no es limitar los debates, sino más bien facilitarlos de forma más organizada y sistemática. En consecuencia, insiste en que el debate debe estar abierto a todas las cuestiones de especial interés para las delegaciones y que cualquier lista recapitulativa tendrá, necesariamente, un carácter no exhaustivo. En cuanto a la relación entre la labor llevada a cabo en el marco de este punto del orden del día y la realizada con arreglo a otros puntos de ese orden del día y en otros foros, el Presidente dice que el Consejo no puede excluir cuestiones que algunas delegaciones consideran importantes para el mandato del Consejo. A ese respecto, el Consejo habrá de asegurarse de que, cuando analice cuestiones que se estén examinando también en otros foros, aproveche la labor realizada en ellos, en lugar de duplicarla. En cuanto al calendario, recuerda que se ha pedido al Consejo que informe sobre esta materia al CNC no más tarde del final del año. Por consiguiente, es necesario que el Consejo planifique el examen de los puntos de la Lista recapitulativa, a fin de que su examen se haya llevado a cabo para esa fecha. En la práctica, eso significa que el Consejo dispone de la presente reunión y de las reuniones de noviembre para realizar esa labor. Si los Miembros lo desean y el programa de reuniones lo permite, podrá organizarse también otra reunión informal.

99. El Presidente señala que ha agrupado las cuestiones planteadas en tres categorías. La primera se refiere a las cuestiones jurídicas relativas a las diferencias entre la protección general de las indicaciones geográficas prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC y la protección adicional de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. La segunda guarda relación con cuestiones de política más generales, tales como las repercusiones para los productores y consumidores de cualquier extensión de la protección. La tercera trata de las consecuencias para los gobiernos, en particular los costos administrativos y las cargas de los procedimientos relacionados con la posible extensión de la protección. El Presidente sugiere que el Consejo dedique la presente reunión a las cuestiones jurídicas de la primera categoría, ya que, según cabe esperar, los Miembros están en condiciones de abordarlas en un plazo de preparación muy breve, porque la claridad respecto de esas cuestiones jurídicas debería contribuir a un mayor y mejor entendimiento de las posibles consecuencias de la extensión de la protección y de los aspectos de procedimiento, cuyo examen tendría lugar en una segunda fase en la reunión de noviembre. La Lista recapitulativa también hace

referencia a varios temas que podrían examinarse en la segunda y tercera tandas de cuestiones en noviembre.

100. El representante de Guatemala presenta la nueva comunicación de varios países desarrollados y en desarrollo Miembros (posteriormente distribuida en el documento IP/C/W/386) y señala que la ampliación del ámbito del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC para que abarque las indicaciones geográficas de todos los productos se propuso afirmando que sería beneficiosa para los Miembros de la OMC, y que sorprendentemente, se ha promovido también como una solución para lo que algunos consideran un trato especial injustificado de las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas. Si ambas afirmaciones fueran verdaderas, los países desarrollados y en desarrollo Miembros tendrían mucho que ganar con esas supuestas ventajas. Por ese motivo, su delegación ha examinado las propuestas encaminadas a ampliar el ámbito de aplicación del artículo 23 a las indicaciones geográficas de productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas, con miras a obtener esos beneficios para las empresa y los consumidores de su país. Sin embargo, ese examen le ha llevado a concluir que la extensión no reportará beneficios significativos, sino que, por el contrario, creará más problemas y dificultades para el comercio. No todos los Miembros de la OMC son productores o consumidores de vino. Dada la naturaleza de los trabajos y de los debates que se llevan a cabo en el Consejo, el hecho de que algunos Miembros de la OMC tengan muchos productos con indicaciones geográficas para las que piden protección adicional, mientras que otros Miembros tienen sólo unas pocas indicaciones geográficas, o ninguna, a las que se aplicaría esa protección adicional, reviste gran importancia para el debate sobre la extensión, aunque, a primera vista, parecería beneficioso solicitar la ampliación del ámbito del artículo 23 a las indicaciones geográficas de productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas. Es posible que un Miembro tenga sólo unas pocas indicaciones geográficas de productos nacionales en los que esté interesado, pero se verá obligado a proporcionar los medios necesarios para proteger centenares o miles de indicaciones geográficas de Miembros que quieren sistemas formales para tales indicaciones. Los Miembros deben sopesar, por una parte, las verdaderas oportunidades comerciales que les ofrecería la ampliación del ámbito del artículo 23 y, por otra, la protección que tendrían que otorgar. El problema de acceso de los productos de Guatemala no proviene necesariamente de dificultades debidas a sus indicaciones geográficas, sino de otros factores. Gran número de países en desarrollo se beneficiarían mucho más de un mayor acceso a los mercados y del desmantelamiento del proteccionismo que de la extensión objeto de debate.

101. Los Miembros de la OMC que buscan la ampliación del ámbito del artículo 23 para proteger denominaciones específicas en el territorio de otros Miembros podrían encontrarse con que esos términos no reciben protección debido a que otros Miembros han llegado a la conclusión de que tales denominaciones no se ajustan a la definición de "indicación geográfica". El representante no está seguro de que todos los Miembros consideren que los nombres de países son susceptibles de protección como indicaciones geográficas. Por eso es poco probable que con la extensión de la protección prevista en el artículo 23 a otros productos se otorgue la protección prometida a todas las denominaciones en todos los Miembros de la OMC. Las indicaciones geográficas a las que no se aplican las excepciones previstas en el artículo 24 reciben ya suficiente protección en virtud del párrafo 2 del artículo 22, cuyas disposiciones se aplican a todas las indicaciones geográficas de todos los productos de todos los Miembros de la OMC y constituyen el delicado equilibrio entre las necesidades y aspiraciones de los productores, de los consumidores y de las políticas públicas. El artículo 22 ofrece protección contra los usos de las indicaciones geográficas que induzcan a error. Las normas del artículo 22 pueden garantizar que las indicaciones geográficas no se conviertan en genéricas, salvo que ya lo hayan hecho en virtud del uso perfectamente lícito hasta ahora.

102. Los beneficios prometidos de la ampliación del ámbito del artículo 23 no serían tan generales como pretenden algunos. Es probable que no se consigan esos beneficios porque las denominaciones para las que se pide protección no se pueden aceptar como indicaciones geográficas según el artículo 22, porque inducen a error al consumidor o por que no quedarían abarcadas por la ampliación

del ámbito del artículo 23, debido a que ya están comprendidas en una de las excepciones establecidas en el artículo 24. Algunas delegaciones han señalado ciertas denominaciones para las que quisieran conseguir el nivel de protección previsto en el artículo 23. Sin embargo, muchos de esos términos son ya genéricos en otros países. La ampliación del ámbito del artículo 23 no concedería protección a esos términos porque quedan comprendidos en el ámbito de la excepción establecida en el párrafo 6 del artículo 24 respecto de los términos de uso habitual, y los Miembros no estarían obligados a protegerlos. Cada Miembro establece en su propio territorio las excepciones previstas en el párrafo 6 del artículo 24. Una denominación genérica en un Miembro de la OMC puede ser una indicación geográfica protegida en el territorio de otro Miembro. El representante observa con preocupación que, a causa de un acuerdo bilateral, los productores de un Miembro en que una denominación es genérica pueden verse en dificultades para exportar ese producto con el término genérico a otros mercados.

103. El representante indica que en la nueva comunicación se enumeran términos que se han citado en el Consejo de los ADPIC como ejemplos de denominaciones que merecen el mismo nivel de protección que los vinos o las bebidas espirituosas y sólo recibirían esa protección si se ampliara el ámbito del artículo 23. Muchas de esas denominaciones cuentan con suficiente protección en virtud de la norma del artículo 22 sin ninguna confusión, o no reuniría los requisitos para la protección si se ampliase el ámbito del artículo 23. Aunque en el documento presentado se ofrecen varios ejemplos, habrá muchos más, sobre todo de países en desarrollo que no tienen experiencia en sistemas de protección de las indicaciones geográficas.

104. La aplicación del artículo 23 en su forma ampliada podría representar costos elevados para los gobiernos, los fabricantes y los consumidores, debido a la necesidad de establecer nuevos mecanismos administrativos para aplicar las normas ampliadas y de modificar las etiquetas y los envases, además de los costos relacionados con la confusión que ese cambio causaría en los consumidores, que no lograrían encontrar los productos que estaban acostumbrados a comprar.

105. En conclusión, el representante de Guatemala dice que la ampliación del ámbito del artículo 23 a todos los productos no sería la panacea que muchos Miembros creen. Los beneficios de tal ampliación recaerían sobre los Miembros de la OMC que tienen muchas indicaciones geográficas protegidas por sistemas formales de registro supervisados y administrados por el gobierno. La carga recaería en los Miembros con pocas indicaciones geográficas o carentes de ellas, los que protegen las indicaciones geográficas mediante regímenes relacionados con las marcas de fábrica o de comercio y con la competencia desleal, y los que tienen industrias alimentarias nacionales que, durante muchos años, han utilizado, en la comercialización interna y externa de sus productos, términos geográficos originarios de países de los que los fundadores de esas industrias emigraron en busca de nuevas oportunidades.

106. En cuanto a la Lista recapitulativa, el Presidente dice que la primera de las cuestiones jurídicas que cabría examinar se refiere a aspectos relacionados con la materia que puede ser objeto de protección. Si bien algunas delegaciones han expresado la opinión de que, en este contexto, no es preciso debatir acerca de esa materia teniendo en cuenta que no se prevé ningún cambio de la definición que figura en el párrafo 1 del artículo 22, otras delegaciones han indicado que, habida cuenta de las diversas repercusiones de la protección ampliada, es difícil hablar de esta cuestión antes de aclarar más la naturaleza y el número de términos que pueden ser objeto de protección, incluso en lo que se refiere a aspectos tales como la función relativa del país de origen y del país en que se busca la protección para determinar los criterios para poder beneficiarse de la protección, los nombres de países, los nombres que no sean de lugares y las llamadas "expresiones tradicionales", etc. La segunda cuestión se refiere a aspectos relativos a la protección que ha de concederse, con inclusión de la diferencia del nivel de protección teniendo en cuenta las excepciones previstas en el artículo 24, la diferencia en el tratamiento de la relación entre marcas de fábrica o de comercio e indicaciones

geográficas; y la diferencia en el tratamiento de las indicaciones geográficas homónimas. El Presidente añade que se trata sólo de sugerencias sobre la forma de organizar el debate.

107. La representante del Brasil dice que su delegación no es demandante en esta materia, pero que, habida cuenta de su compromiso de examinar las cuestiones relativas a la aplicación, desea hacer comentarios sobre el debate que se está celebrando en el Consejo de los ADPIC respecto de las indicaciones geográficas. El examen de la aplicación realizado por la Secretaría de la OMC ofrece información exhaustiva sobre las indicaciones geográficas, tanto desde el punto de vista jurídico como administrativo. Según ese documento, las indicaciones geográficas se protegen de diversas formas en los distintos países, y son diversos los recursos jurídicos utilizados para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, desde leyes sobre marcas de fábrica o de comercio hasta legislación *sui generis*. Aunque la información contenida en la nota es útil para entender cómo funcionan los sistemas de protección de las indicaciones geográficas, aún quedan muchos aspectos por tratar. Puesto que los aspectos económicos de la extensión no se han estudiado suficientemente, un análisis económico y estadístico de las indicaciones geográficas actualmente protegidas sería, sin duda, un instrumento útil para entender las consecuencias reales de tal protección. Hasta la fecha, no se han facilitado datos económicos o información sobre las ganancias, los beneficios y las cuotas de mercado de grupos tales como los productores, los distribuidores y los consumidores, entre otros. El valor económico de las indicaciones geográficas protegidas no se ha cuantificado o estimado adecuadamente. Además, no existen pruebas de las supuestas pérdidas económicas causadas por un menor nivel de protección. Otro aspecto que merece un análisis más a fondo es el costo del mantenimiento de un sistema de protección de las indicaciones geográficas. A ese respecto, los Miembros favorables a la extensión deberían facilitar más información sobre los costos, en particular administrativos y judiciales, así como sobre los gastos de inversión resultantes para los titulares de indicaciones geográficas protegidas.

108. Otra cuestión de particular interés para países que, como el Brasil, se han beneficiado históricamente de la afluencia de inmigrantes, es el impacto de la extensión en las prácticas culturales de sus poblaciones. Dado que la extensión podría causar distorsión del comercio e incluso el cierre de mercados, la representante se pregunta si sería lícito privar a esas poblaciones de prácticas estrechamente relacionadas con su identidad cultural.

109. El representante de la República Checa señala que la extensión no tendría ninguna repercusión en la definición del párrafo 1 del artículo 22. El objetivo de la República Checa es asegurar la aplicación del mismo nivel de protección para todas las indicaciones geográficas comprendidas en esa definición del párrafo 1 del artículo 22, que se aplica tanto a la protección prevista en el artículo 22 como en el artículo 23. Para aclarar sus afirmaciones, la representante propone que se mantengan sin modificaciones el párrafo 1 del artículo 22 y se modifique el artículo 23 del modo siguiente:

"Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique productos cuando tales productos no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como 'clase', 'tipo', 'estilo', 'imitación' u otras análogas."

110. El representante de Australia felicita al Presidente por su iniciativa de presentar una lista de cuestiones destinada a facilitar un debate más sistemático y coincide en que la lista no pretende ser exhaustiva. Al examinar la Lista recapitulativa, podría sacarse la impresión de que este ejercicio consiste esencialmente en aclarar los aspectos jurídicos, las repercusiones en los productores y consumidores y los costos administrativos de una posible protección adicional. En su opinión, los

temas tratados rebasan con mucho el ámbito descrito en la Lista y afectan al núcleo de cuestiones de política comercial y a las consecuencias para los gobiernos.

111. Una semana antes de la reunión, la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual (CIPR), encargada de estudiar las ventajas potenciales y los peligros de los derechos de propiedad intelectual para los países en desarrollo, publicó un importante informe.² Su mensaje fundamental, según quedó reflejado en los medios de comunicación, es que los países en desarrollo deberían evitar la adquisición de compromisos respecto de los regímenes de protección de la propiedad intelectual del mundo rico, a menos que tales regímenes sean útiles para atender sus necesidades. Según el informe, tampoco los países ricos deberían presionar para instaurar procedimientos más enérgicos. Es interesante observar que cuando en el informe, que es, en general, crítico con el Acuerdo y los costos de establecer sistemas de propiedad intelectual, se hace referencia a las indicaciones geográficas, se señala que "en nuestra opinión, no está claro en absoluto que esos países, es decir, los países en desarrollo, puedan obtener beneficios significativos de la aplicación de las indicaciones geográficas". Se sugiere además que son necesarias nuevas investigaciones antes de que los países en desarrollo se planteen la posibilidad de adquirir nuevos compromisos, y ése enfoque, tal como lo entiende el representante, es el adoptado por el Brasil. En su opinión, no ha habido un análisis a fondo de las importantes repercusiones normativas de la protección adicional. Según han sostenido algunas delegaciones, la equidad exige que, si se otorga una protección adicional para los vinos y las bebidas espirituosas, debe aplicarse una protección similar a los demás productos. Ese planteamiento pasa completamente por alto el hecho de que la mayoría de los Miembros no hacen distinción, en sus mercados nacionales, entre la protección prevista en el artículo 22 y la establecida en el artículo 23. Igualmente, omite el dato de que el artículo 23 protege a un considerable grupo de países productores de vino en detrimento de los nuevos competidores. ¿Por qué los demás países productores de vino han expresado serias preocupaciones respecto del nuevo reglamento del vino introducido por un Miembro, al amparo parcial del Acuerdo sobre los ADPIC, si están satisfechos con la forma en que se ha aplicado la denominada protección adicional? La protección adicional significa simplemente que los países que aplican protección en frontera ahora desean aplicarla a nivel extraterritorial.

112. El representante de Australia dice que la utilización, en la Lista recapitulativa de cuestiones, de la frase "nuevos usos no autorizados de las indicaciones geográficas" es inexacta. La decisión de determinar si una indicación geográfica está o no autorizada deberá ser adoptada por los distintos Miembros en el mercado de que se trate. Al igual que en las demás formas de protección de los derechos de propiedad intelectual, como las patentes y el derecho de autor, la decisión de permitir o no una denominación incumbe a los gobiernos nacionales, y no a una organización internacional. Si un Miembro desea ejercer sus derechos en el marco del ESD, puede hacerlo, pero, según entiende el representante, no ha habido un solo caso en que el Órgano de Apelación haya declarado que una indicación geográfica no está autorizada con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC. Recuerda asimismo que la delegación argentina pidió en la última reunión que los solicitantes que solían usar el verbo "usurpar" no deberían hacerlo, y el mismo criterio debería aplicarse a cualquier documento de la Secretaría que hiciese referencia al uso no autorizado de indicaciones geográficas. Esta observación nos lleva a la cuestión más general de la formulación de algunas cuestiones en el documento y la caracterización de las posiciones respectivas. No está claro que las diferencias entre los niveles general y adicional de protección se hayan "debatido bastante" o que se haya deliberado mucho sobre la idoneidad de una protección basada en el artículo 22. Para terminar, señala que Australia está dispuesta a tratar las cuestiones identificadas en la Lista recapitulativa, en el claro entendimiento de que volverá a referirse a ellas más adelante en la reunión.

² *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*. Informe de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual. Londres, septiembre de 2002.

113. El representante de Bulgaria dice que todos los argumentos en que se fundamenta el documento presentado por Guatemala son erróneos. En el documento se afirma que "[a]parentemente, la denominación 'yogur búlgaro' se utiliza como término genérico en Francia". En respuesta a esa aseveración, el representante señala que la denominación "yogur búlgaro" no es genérica, sino sólo famosa. Recuerda el mandato del párrafo 12 de la Declaración Ministerial de Doha, en que se indica que los Ministros están resueltos "a hallar soluciones apropiadas" para las cuestiones relativas a la aplicación, una de las cuales es ésta, y se hace referencia a la presentación del informe al CNC no más tarde del final de 2002 "con miras a una acción apropiada". La situación en lo que respecta a la extensión no es distinta de la relativa a los ADPIC y la salud pública. Por consiguiente, Bulgaria cree que los trabajos sobre la extensión deberían acelerarse para que el Consejo pudiese hallar una solución apropiada para recomendarla al CNC no más tarde del final del presente año. Asimismo, apoya la propuesta del Presidente de celebrar otra reunión sobre las cuestiones relativas a la extensión.

114. Los promotores de la extensión ya han dado respuesta en varias comunicaciones a las cuestiones contenidas en la Lista recapitulativa. A ese respecto, el representante disiente de la afirmación del representante de Australia de que el Consejo no ha debatido esas cuestiones suficientemente; al contrario, ha habido debates de fondo sobre todas ellas. Respecto del primer apartado de las cuestiones jurídicas, es decir, las diferencias entre la protección general establecida en el artículo 22 y la protección adicional prevista en el artículo 23, el representante afirma que ese apartado se ha considerado como punto de partida del debate sobre la extensión. La causa de ello es comprensible, ya que quienes se oponen a la extensión desean que se celebre un amplio debate sobre cuestiones de política. El representante no tiene inconveniente en que se examine nuevamente ese apartado, a pesar de que el Consejo ya lo ha hecho en otra ocasión, pero a condición de que tal examen no limite los debates y, en particular, no impida a los Miembros centrarse en las cuestiones sustantivas relativas a la extensión. Asimismo, el representante recuerda que, desde un punto de vista cronológico, las diferencias mencionadas en la Lista recapitulativa nunca han sido el punto de partida del debate. En cambio, las diferencias fundamentales son las existentes entre el trato dispensado a los vinos y las bebidas espirituosas, por una parte, y a los demás productos, por otra. Por consiguiente, los Miembros deberían centrar sus debates, más que en las diferencias antiguas, en las más recientes.

115. Es difícil entender por qué los vinos y las bebidas espirituosas deberían tratarse de modo diferente que otros productos. ¿Por qué el robo de naranjas debería castigarse de forma distinta que el de manzanas? ¿Por qué la piratería de música de piano debería tratarse de modo distinto que la de música de violín? Esa diferencia no se ha justificado de manera convincente. El representante observa que el artículo 22 prohíbe falsear el origen de los productos, mientras que el artículo 23 prohíbe el uso indebido de una reputación que pertenece a otros. ¿Por qué los autores de las propuestas desean la extensión de la protección adicional? O como argumentan los que se oponen a la extensión, ¿por qué es insuficiente la clase de protección prevista en el artículo 22? Porque los autores de las propuestas desean impedir no sólo la falsedad respecto al origen de los productos, sino también el uso indebido de la reputación adquirida por otros, y también porque las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC no garantizan esa protección, contrariamente a lo que se afirma en el documento conjunto IP/C/W/360. Por ejemplo, es perfectamente legal, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, vender yogur de sabor similar al del yogur búlgaro o, por mencionar otro producto búlgaro, vender queso feta de tipo búlgaro. El representante insiste en que se trata de prácticas perfectamente legales y en que la aplicación del artículo 22 para prohibir la utilización de esas expresiones en relación con tales productos resultará totalmente ineficaz. El argumento de los que se oponen a la extensión es que algunos países poseen muchas indicaciones geográficas, mientras que otros tienen tan sólo unas pocas. El representante cree que ese argumento es contrario a la propia naturaleza de la protección de los derechos de propiedad, en general, y de los derechos de propiedad intelectual, en particular. Y se pregunta si la intención de los que se oponen a la extensión es proponer una modificación de la naturaleza del Acuerdo sobre los ADPIC para pasar de un nivel mínimo de protección al intercambio de concesiones y la reciprocidad, como es el caso del GATT y

del AGCS. ¿Desean los Estados Unidos, Australia y los demás países contrarios a la extensión aplicar ese mismo criterio de reciprocidad a las marcas de fábrica o de comercio, las patentes y los derechos de autor? Por ejemplo, los Estados Unidos tienen registradas, según parece, varios millones de marcas de fábrica o de comercio y patentes. ¿Estarían de acuerdo los Estados Unidos en que otros países protegiesen únicamente un número de patentes estadounidenses igual al número de las patentes de esos países protegidas en los Estados Unidos?

116. En su opinión, la cuestión esencial no es el número de denominaciones existentes, sino los intereses de los distintos países y, desde ese punto de vista, la pregunta fundamental es si debería existir diferencia entre los vinos y las bebidas espirituosas (producidos por algunos países y no por otros), por una parte, y los demás productos (en los que otros países están especialmente interesados), por otra. En realidad, no existen razones convincentes que justifiquen esa diferencia. También es importante señalar que la propuesta de extender la protección adicional se orienta hacia el futuro, es decir, daría por resultado un incentivo para trabajar a favor de la reputación de determinados productos en lugares concretos y tratar de obtener nichos de mercado para tales productos. Por consiguiente, la extensión de la protección interesa a todos los países.

117. Los partidarios de la extensión no han recomendado la introducción de cambios en la definición prevista en el párrafo 1 del artículo 22. Sin embargo, el representante se pregunta si quienes se oponen a la extensión desean, por ejemplo, excluir los nombres de países o proponer alguna solución más concreta en relación con los nombres que no sean de lugares o expresiones tradicionales. Desde el punto de vista de la propuesta de extensión de su país y del mandato de Doha sobre la extensión, esas cuestiones, relacionadas con la naturaleza de la protección adicional, carecen de importancia y quedan fuera del alcance del mandato. Además, las expresiones tradicionales son ajenas al debate sobre la extensión, ya que constituyen un tipo completamente distinto de protección de los derechos de propiedad intelectual.

118. El representante de Bulgaria dice que su propuesta sobre la extensión es idéntica a la formulada por la representante de la República Checa, es decir, que se suprima la referencia a "los vinos y bebidas espirituosas" en el título del artículo 23 y que las expresiones "vinos para productos de ese género" y "bebidas espirituosas para productos de ese género", del párrafo 1 del mismo artículo, se sustituyan, respectivamente, por la expresión "productos para productos" y se supriman del texto. Las excepciones del artículo 24 deberían aplicarse a los productos abarcados por la extensión. En cuanto al segundo aspecto de debate, es decir, la diferencia de trato de la relación entre marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas, el representante dice que esa cuestión está comprendida en la propuesta conjunta presentada por Bulgaria y otros patrocinadores en junio de 2002 (documento IP/C/W/353) y, a ese respecto, se formula del modo siguiente: la primera referencia a "vinos" del párrafo 2 del artículo 23 ha de sustituirse por una referencia a "productos", y la segunda referencia a "vinos" por la expresión "tales productos". Además, la referencia a "bebidas espirituosas" habrá de suprimirse, y la tercera referencia a "vinos o bebidas espirituosas" habrá de sustituirse por una referencia a "productos". Por último, en lo que respecta al tercer elemento de discusión, el relativo a las indicaciones geográficas homónimas, propone que se introduzca un cambio en el párrafo 3 del artículo 23, consistente en suprimir la referencia a los "vinos" y sustituirla por las palabras "mismos productos".³

³ Con miras a aclarar gráficamente las modificaciones propuestas, el representante de Bulgaria facilita el texto siguiente para su inclusión en el acta de la reunión:

119. El representante de la República Kirguisa expresa su apoyo a la labor realizada sobre la extensión de la protección adicional de las indicaciones geográficas a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas. Todos buscan una solución adecuada y equilibrada a ese complejo problema, que afecta a numerosos aspectos de la vida, tales como el patrimonio histórico y la sostenibilidad económica. Para fomentar la competencia y las corrientes de inversión deben adaptarse prácticas comerciales más leales a nivel nacional, regional y, sobre todo, internacional. La utilización de la palabra "territorio" en la definición de indicaciones geográficas obliga a pensar en las aplicaciones futuras del término en un contexto más general, ya que podría, en definitiva, ser causa de malentendidos entre los Miembros. Por ejemplo, el "arroz uzgen" kirguís es un cereal excepcional debido a su color rojo y a su sabor. ¿Se trata de un producto originario de la República Kirguisa? Cabría responder afirmativamente a esa pregunta, pero ¿sería también posible decir que todos los productos kirguises son "arroz uzgen"? El representante cree que no es ése el caso. No obstante, opina que las indicaciones geográficas de varias pequeñas islas, o territorios interiores, podrían atribuirse a productos cuyas características especiales fuesen realmente distintas de los mismos productos. Por eso es necesario que los trabajos se desarrollen en función de cada caso. El representante insta al Consejo a aclarar la definición de indicaciones geográficas, para que éste pueda elaborar una solución común lo antes posible.

120. La representante del Canadá dice que a su delegación le complace patrocinar el documento presentado por Guatemala, cuyas observaciones suscribe sin reservas. Respecto de las propuestas de otros Miembros de insertar nuevos términos en el artículo 23, la representante señala que tales propuestas son más bien prematuras, ya que el Consejo está lejos de concluir siquiera que es necesario algún tipo de extensión. Además, agradece al Presidente la preparación de la Lista recapitulativa de cuestiones como medio de facilitar el presente debate. Aunque hay otras cuestiones que podrían añadirse a la Lista, la representante cree que será un instrumento útil, como ha ocurrido en el debate de otros temas. Añade que vale la pena reunir datos empíricos sobre la protección de las indicaciones geográficas, tal como ha propuesto el Brasil, y, a ese respecto, su delegación desea estudiar la forma de lograr ese objetivo, aunque sólo sea para obtener algunos datos empíricos.

Modificaciones propuestas del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC

Artículo 23

Protección adicional de las indicaciones geográficas ~~de los vinos y bebidas espirituosas~~

1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique ~~vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género~~ **productos para productos** que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.³

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para ~~vinos~~ **productos** que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique ~~vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas~~ **tales productos**, se denegará o invalidará para los ~~vinos o las bebidas espirituosas~~ **productos** que no tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los ~~vinos~~ **mismos productos**, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

121. Con respecto a las diferencias legales entre los niveles de protección otorgados por los artículos 22 y 23, la representante dice que el Canadá sigue convencido de que el nivel de protección previsto en el artículo 22 no sólo basta para todos los productos amparados por indicaciones geográficas, sino que es el mecanismo más idóneo. Lo que aún no está claro ni se ha demostrado es por qué la protección del artículo 22 no es suficiente. La representante invita de nuevo a las delegaciones a facilitar al Consejo ejemplos concretos de los problemas que hayan tenido, o que tengan actualmente, para obtener una protección satisfactoria con arreglo al artículo 22. La labor del Consejo resultaría mucho más fácil si se aportaran ejemplos.

122. Lo mismo cabría afirmar respecto del artículo 23, ya que, si bien los vinos y las bebidas espirituosas gozan *de jure* del nivel adicional de protección de sus indicaciones geográficas, no existen pruebas de que ocurra lo mismo *de facto*. Los debates del Consejo sobre los respectivos niveles de protección otorgados por los artículos 22 y 23 han puesto de manifiesto que sigue prevaleciendo un concepto erróneo de la extensión de la protección con arreglo al artículo 23. Según interpreta la representante, el artículo 23 confiere derechos exclusivos sobre una indicación geográfica determinada a un grupo de productores, privando efectivamente a otros del derecho a utilizar esa indicación. A diferencia del artículo 22, en que se afirma que los Miembros deben arbitrar los medios legales para impedir la utilización de indicaciones geográficas de modo que induzcan al público a error en cuanto al origen geográfico del producto o cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, el artículo 23 no establece ese requisito. Es indudable que la extensión de la protección del artículo 23 no tendrá ninguno de los efectos siguientes: el acceso a los mercados, un régimen de indicaciones geográficas equilibrado o la renegociación de las excepciones.

123. En cuanto al acceso a los mercados, la representante señala que ni la función de los derechos de propiedad intelectual ni la finalidad del artículo 23 es conceder ese acceso. Recuerda que durante la anterior reunión del Consejo se analizó brevemente la experiencia del Canadá con la aplicación del artículo 23, y añade que, como se indicó en esa ocasión, son muchos los requisitos técnicos que pueden impedir el acceso a determinado mercado, como los relativos a normas y control de calidad, envasado y etiquetado, sanidad e inocuidad y aditivos alimentarios de los productos. Los derechos de propiedad intelectual no pueden suprimir ninguno de esos requisitos. En el caso del vino, por ejemplo, las indicaciones geográficas no garantizarían el acceso a los mercados. De hecho, en el caso del Canadá, las indicaciones geográficas no han contribuido a mejorar el acceso de sus vinos a los mercados de la Unión Europea. Ese acceso ha sido obstaculizado por diversos factores, como las diferencias en las prácticas enológicas y las disposiciones sobre el etiquetado. Lo mismo cabría decir respecto de otros productos. Por ejemplo, el Canadá aplica reglamentos de productos a la fruta envasada, la fruta fresca y congelada, las legumbres y hortalizas frescas y congeladas, los zumos de fruta, la pasta de tomate, el ketchup, la salsa para espaguetis y la salsa para pizza, por nombrar sólo algunos productos. Un producto no podrá importarse en un país si no cumple sus prescripciones en materia de importación, con independencia de que la indicación geográfica relativa al producto esté o no registrada en ese país.

124. En cuanto a las cuestiones relativas al desequilibrio, la representante se refiere a la afirmación de algunos Miembros de que existe desequilibrio entre la protección otorgada por los artículos 22 y 23. Sin embargo, aunque tal afirmación puede ser cierta en teoría, no parece que lo sea en la práctica. En realidad, es más probable que el verdadero desequilibrio se produzca con la extensión del artículo 23. Como se ha dicho en anteriores reuniones, la mayoría de los Miembros tienen un número limitado de indicaciones para las que desearían protección. En el Canadá, por ejemplo, sólo se han registrado siete indicaciones geográficas para el vino. En cambio, en las negociaciones bilaterales, las Comunidades Europeas tratan de obtener protección para cerca de 10.000 indicaciones geográficas, el 95 por ciento de las cuales carecen de valor comercial en el Canadá. En consecuencia, el Canadá cree que la extensión de la protección a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas daría lugar a las mismas disparidades, y no a una situación de equilibrio.

125. Con respecto a las excepciones previstas en el artículo 24, se ha sugerido que la extensión de la protección del artículo 23 se acompañe de la derogación o anulación de algunas de esas excepciones. El Canadá no ve razón alguna para modificar el alcance de las excepciones en relación con otros productos. La representante observa también que, para el Canadá, la mayor parte de los ejemplos destacados que se han mencionado en el Consejo son denominaciones genéricas. Asimismo, se pregunta en qué consiste exactamente el beneficio que los Miembros piensan obtener con una extensión a la que no pueden acogerse directamente en virtud del artículo 22. Ésa es, aparentemente, la cuestión de fondo con la que el Consejo sigue porfiando. Por último, pide a los Miembros que analicen por qué todos los productores de vinos del Nuevo Mundo se oponen colectivamente a la extensión a otros productos de la protección prevista en el artículo 23. Aparentemente, existen aspectos sin dilucidar en esa postura.

126. La representante del Uruguay señala que el documento IP/C/W/360 contiene numerosos planteamientos que su delegación comparte y ha apoyado en anteriores reuniones. La representante está convencida de que la extensión, por sí misma, no constituye, para los países como el Uruguay, una garantía de acceso a los mercados o un incremento automático de las exportaciones. Si bien es cierto, por un lado, que sería posible tener derechos exclusivos sobre determinados productos, no lo es menos, por otro, que ello podría conllevar la imposibilidad de exportar productos bajo nombres surgidos como resultado de las corrientes migratorias hacia determinados países que han tenido lugar desde comienzos del siglo pasado. Los términos y nombres que se han utilizado para denominar algunos productos y cuyo uso se mantiene son consecuencia de la tradición cultural que trajo aparejada esa inmigración. Por consiguiente, lo que el Uruguay propone es un ejercicio de costo-beneficio, es decir, un ejercicio en el que el Consejo debe prestar especial atención al hecho de que una posible extensión puede también cerrar las puertas a industrias tradicionales y emergentes. A ese respecto, la representante recuerda a los Miembros que, según la definición contenida en el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, para que una indicación se considere indicación geográfica no basta con que el producto tenga un origen geográfico. Además, el producto identificado por tal indicación debe reunir algunas características relacionadas con la reputación y la calidad que sean imputables a su origen geográfico. Esas dos palabras, "reputación" y "calidad", son muy significativas. Y no representan características que puedan lograrse de la noche a la mañana. Por consiguiente, para obtener protección para las indicaciones geográficas, es necesario demostrar que determinado producto se ajusta a esa definición. Es difícil pensar que países que no tienen indicaciones geográficas puedan obtener protección en un corto plazo. Al contrario, las indicaciones geográficas no son soluciones instantáneas. El Uruguay no desea que las indicaciones geográficas se conviertan en un nuevo instrumento de protección que impida el acceso de sus productos a los mercados internacionales.

127. La delegación del Uruguay no desconoce que los artículos 22 y 23 confieren un nivel de protección para los vinos y las bebidas espirituosas diferente del otorgado a otros productos. Sin embargo, la representante no puede aceptar el argumento de que la protección prevista en el artículo 22 para productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas es inadecuada, y recuerda a los Miembros que el texto del artículo 23 es resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay, y que su país tuvo que aceptarlo como parte del paquete de negociación. En cuanto a los costos, la representante comparte la opinión, expresada en el documento IP/C/W/360, de que la extensión que se propone conllevaría costos desmedidos para países como el Uruguay, que cuentan con muy pocas o ninguna indicación geográfica y que, en cambio, se verían obligados a proteger de forma adicional las indicaciones geográficas de un grupo de países que poseen cientos o miles de ellas. Por consiguiente, su delegación no ve los beneficios de la extensión y considera que el Consejo debe seguir estudiando cada punto en profundidad antes de pasar a la etapa siguiente. Por último, en lo que respecta a las propuestas de las delegaciones búlgara y checa, la representante coincide con la delegación canadiense en que es aún prematuro examinar cualquier nueva redacción del artículo 23.

128. El representante de Suiza acoge satisfactoriamente y apoya la propuesta del presidente de estructurar el debate del punto D del orden del día con arreglo a una lista recapitulativa de cuestiones fundamentales y dice que esa lista es un medio para organizar los debates del Consejo sobre las distintas cuestiones, incluida la extensión, de forma más cabal, a fin de cumplir su función de presentar, no más tarde de final de año, una recomendación al CNC con miras a una acción apropiada. Sin embargo, esa recomendación sólo será posible si los Miembros se ciñen en sus intervenciones a cuestiones que guarden relación con la extensión. Habida cuenta del sobrecargado orden del día del Consejo de los ADPIC, el representante cree que ni el Presidente, ni las delegaciones ni la Secretaría tienen tiempo o recursos para duplicaciones del trabajo, si tal trabajo se lleva ya a cabo en el Consejo en relación con otros puntos del orden del día o en foros ajenos a la OMC, en particular, el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas.

129. El representante recuerda que, en la última reunión del Consejo, las delegaciones partidarias de la extensión, y entre ellas Suiza, presentaron una cuarta comunicación detallada sobre la extensión de la protección adicional de las indicaciones geográficas a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas (documento IP/C/W/353). En esa comunicación se examinan diversos aspectos de la extensión, especialmente la forma en que podría tener cabida en la sección 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, y se expone una propuesta para su inclusión en el informe del Consejo de los ADPIC al CNC. Por consiguiente, esa comunicación trata exactamente el tipo de cuestiones mencionadas por el Presidente en los tres apartados sobre cuestiones jurídicas, y debe ser el eje principal de los debates en curso en la presente reunión. En las cuatro comunicaciones presentadas por las delegaciones favorables a la extensión durante los dos últimos años pueden hallarse respuestas pormenorizadas a las cuestiones planteadas en la última reunión del Consejo, que se formularon de nuevo en el documento IP/C/W/360. Por ese motivo su delegación no desea repetir con todo detalle los argumentos ya expuestos en esos cuatro documentos (IP/C/W/204/Rev.1, IP/C/W/247/Rev.1, IP/C/W/308/Rev.1 e IP/C/W/353). El representante considera que el debate ha alcanzado una fase en la que es necesario lograr progresos sustantivos. Sin embargo, habida cuenta de algunos comentarios de los que se oponen a la extensión, cree que tal vez sea necesaria la "desmitificación" no sólo de las patentes, sino también de las indicaciones geográficas.

130. Los patrocinadores de la comunicación contenida en el documento IP/C/W/360 han llegado a la conclusión de que la extensión "no reportará beneficios significativos sino que, por el contrario, dará lugar a nuevas dificultades". Las delegaciones contrarias a la extensión alegan que existe un "desequilibrio" en cuanto al número de indicaciones geográficas que habrían de protegerse. Y están en lo cierto cuando coinciden en que algunos Miembros consideran propias más indicaciones geográficas que otros. Sin embargo, el mismo argumento es válido para las patentes y las marcas de fábrica o de comercio. Hasta donde él sabe, ninguna de las delegaciones contrarias a la extensión ha utilizado nunca ese argumento como base para alegar que una protección adecuada y eficaz de las patentes y las marcas de fábrica o de comercio da por resultado un desequilibrio de derechos y obligaciones. El hecho de que algunos Miembros tengan más indicaciones geográficas que otros se debe simplemente a que los primeros han reconocido antes que los segundos el valor de comercialización potencial que una indicación geográfica puede añadir a determinado producto. Por consiguiente han comenzado antes y de forma más sostenida a realizar inversiones en el desarrollo de sus indicaciones geográficas. Los Miembros con una mayor tradición en la protección de las indicaciones geográficas poseen también un mayor número de indicaciones geográficas reconocidas y protegidas que los que están empezando a descubrir las indicaciones geográficas como instrumento para la comercialización de sus propios productos en el mercado internacional. Esa situación ha sido y sigue siendo muy similar a la de otros derechos de propiedad intelectual. En este momento, también es fundamental que tanto los países en desarrollo como los países desarrollados Miembros que deseen para sus propios productos los beneficios previstos en las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relacionadas con las indicaciones geográficas obtengan protección efectiva para las indicaciones geográficas de esos productos, que, en modo alguno, se limitan a los vinos y las bebidas espirituosas.

De no ser así, se sentirán, con razón, poco dispuestos a hacer el esfuerzo de impulsar la protección de las indicaciones geográficas en sus países. Lo que cuenta a la hora de sopesar las ventajas e inconvenientes de una mejor protección no es tanto el número de indicaciones geográficas como el valor económico o el valor *potencial* de cada indicación geográfica debidamente protegida. Con frecuencia, se ha considerado más valiosa una indicación geográfica concreta que un centenar de ellas. Un ejemplo de indicación geográfica valiosa es "Tequila", correspondiente a una bebida espirituosa mexicana. Con la globalización, el interés de la protección eficaz de ese tipo de signos ha aumentado considerablemente a nivel internacional, como pone de manifiesto la longitud de la lista de delegaciones favorables a la extensión.

131. Tras mencionar el caso del queso suizo "Etivaz" como ejemplo reciente de la forma en que una indicación geográfica se hace "famosa" en poco tiempo, el representante de Suiza plantea la pregunta siguiente: ¿Quién habría tenido noticia hace algún tiempo de la existencia de tal indicación fuera de Suiza o, tal vez, de Europa? Actualmente, las cosas han cambiado hasta el punto de que incluso los patrocinadores de la comunicación IP/C/W/360 mencionan esa indicación geográfica. Por consiguiente, ese queso y su indicación geográfica son ya conocidos de 144 delegaciones de la OMC, como mínimo. Este ejemplo pone de manifiesto que, gracias a la globalización y al rápido intercambio de productos e información, el conocimiento por el público de una determinada indicación geográfica y un producto concreto puede desarrollarse ahora con gran rapidez, y tal tendencia se reforzará en el futuro. Por ese motivo, es importante que la OMC disponga de medios eficaces de protección de las indicaciones geográficas a nivel internacional, y la solución para lograr esa protección eficaz es la extensión.

132. En cuanto a los temores expresados por quienes se oponen a la extensión por las consecuencias que tendría en el futuro de sus tradiciones y en las excepciones previstas en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, el representante pide a esas delegaciones que lean de nuevo los párrafos 15 y 16 del documento IP/C/W/308/Rev.1 y los párrafos 35 a 39 del documento IP/C/W/353, en los que se propone que las excepciones actualmente vigentes para los vinos y las bebidas espirituosas se apliquen también a los productos a los que se haría extensiva la protección adicional.

133. En respuesta al argumento de los oponentes de que las denominaciones genéricas invalidarían las ventajas de la extensión respecto de determinadas indicaciones geográficas, el representante dice que el hecho de que una indicación geográfica se haya convertido en denominación genérica en un Miembro no significa que esa indicación haya perdido su valor económico en otros países. Como se señala en el documento IP/C/W/360, las excepciones se aplican Miembro por Miembro, lo que significa que la extensión brindará a los productores legítimos un instrumento jurídico eficaz para impedir la "degeneración" de su indicación geográfica en los nuevos mercados. El representante concluye diciendo que "comercio leal" es una expresión cada vez más utilizada en relación con la globalización y, en particular, respecto del comercio entre el mundo en desarrollo y el desarrollado. Está claro que la extensión no es la respuesta a todas las cuestiones relacionadas con el "comercio leal", pero es, sin duda, parte de ese cuadro general.

134. El representante de Kenya dice que la Lista recapitulativa de cuestiones del Presidente contribuye a facilitar un debate más sistemático. Recomienda al Consejo que examine la posibilidad de solicitar a la OMPI información sobre tres cuestiones concretas: la materia que puede ser objeto de protección, la relación entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas, y el trato de las indicaciones geográficas homónimas. Esa información permitiría al Consejo centrar su atención en otras cuestiones directamente relacionadas con la extensión, tales como los diferentes niveles de protección otorgados por los artículos 22 y 23 y las consecuencias de la extensión para los productores y los consumidores, así como para los gobiernos.

135. La representante de Jamaica se pregunta si los que se oponen a la extensión consideran que no es necesario establecer la relación entre un producto y su origen geográfico. De ser así, están tratando de negar la esencia misma de lo que constituye una indicación geográfica, tal como se define en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. En el documento IP/C/W/360, concretamente en su párrafo 5, relativo a la cuestión 2 sobre la "definición de 'indicaciones geográficas'", se señalan varias preocupaciones. Para la representante, no está claro por qué la definición de indicaciones geográficas se ha considerado un obstáculo y por qué persisten esos motivos de inquietud en relación con la definición. Como ha dicho el representante de Bulgaria, los países partidarios de la extensión ya han tratado esos aspectos. La representante señala a la atención de los Miembros la comunicación del documento IP/C/W/353, en cuyo párrafo 6 se afirma que la definición de indicaciones geográficas con arreglo al párrafo 1 del artículo 22 se aplica a cualquier indicación geográfica con independencia del producto de que se trate y de que se aplique el nivel de protección de los artículos 22 ó 23". Por consiguiente, la cuestión de la definición no es específica de la extensión, sino de alcance general en el contexto de la protección de las indicaciones geográficas. Sin embargo, si las delegaciones consideran necesario debatir más a fondo esa cuestión, pueden hacerlo en el marco del punto M del orden del día, sobre el examen automático previsto en el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

136. No obstante, la representante desea abordar tres cuestiones que han sido sistemáticamente planteadas por algunas delegaciones en el contexto de la definición de indicaciones geográficas. En su opinión, los nombres de países reúnen, en principio, las condiciones exigibles a las indicaciones geográficas, siempre que cumplan los requisitos del párrafo 1 del artículo 22, es decir, que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro, y que determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Ejemplos de tales nombres geográficos son "Luxembourg" (Luxemburgo) para los productos cárnicos o "Swiss" (suizo) para los relojes. En segundo lugar, la definición del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC no se refiere únicamente a los nombres geográficos, sino también a las denominadas "designaciones tradicionales" que, en la Lista recapitulativa de cuestiones se mencionan como "nombres que no sean de lugares". Las "designaciones tradicionales" son nombres que no corresponden a una denominación geográfica, pero que conllevan una referencia geográfica, ya que se utilizan únicamente de acuerdo con una práctica o una reglamentación respecto de productos que poseen un origen preciso al que deben determinada calidad, reputación u otra característica. Ejemplos de "designaciones tradicionales" son "Tête de Moine" para un queso tradicional suizo y "Basmati" para el arroz de la región subhimalaya del subcontinente indio. Tales "designaciones tradicionales", o nombres no correspondientes a lugares, han de distinguirse de las "expresiones tradicionales" o "métodos tradicionales", que no conllevan referencias geográficas y quedan, por lo tanto, excluidos de la definición del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. En tercer lugar, la representante recuerda que una indicación geográfica puede consistir también en un símbolo o un emblema, tales como el "Taj-Mahal" para designar productos indios de esa región, la "Torre Eiffel" para productos de la región de París o el "*mapa de Jamaica*" para designar el café o el azúcar originarios de ese país.

137. El Acuerdo sobre los ADPIC proporciona a los Miembros una orientación clara para la definición de indicaciones geográficas y, en consecuencia, puede contribuir a armonizar los conceptos y definiciones nacionales al respecto. Esa es exactamente la razón por la que las delegaciones favorables a la extensión propugnan que esta cuestión se examine en un marco general y por la que su importancia es fundamental para que el Acuerdo sobre los ADPIC proporcione una protección efectiva y equilibrada de las indicaciones geográficas. En ese contexto, la representante recuerda asimismo que el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo concede a los Miembros libertad para determinar la forma en que aplicarán sus disposiciones en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos, según el método que consideren adecuado. Por último, en lo que respecta a las modificaciones del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC propuestas por el representante de Bulgaria, la representante señala que su delegación está de acuerdo con ellas y las considera un avance en la dirección adecuada.

138. La representante de China, al tiempo que señala que es la primera vez que su país hace uso de la palabra en relación con la cuestión de las indicaciones geográficas, dice que su delegación apoya, en principio, la propuesta de varios Miembros sobre la extensión de la protección prevista en el artículo 23 del Acuerdo a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas. El motivo es que el sistema multilateral de comercio debe tener como razón de ser el beneficio de todos los Miembros y debe asimismo mantener el equilibrio de intereses entre los Miembros en función de los distintos productos. Si los productores de vinos y bebidas espirituosas pueden disfrutar el nivel de protección previsto en el artículo 23, ¿por qué los productores y comerciantes de otros productos no podrían también obtener protección en virtud de esa misma disposición? Ésa es la sencilla razón por la que China apoya la extensión. Sin embargo, a su delegación le preocupan también varios aspectos.

139. En primer lugar, de acuerdo con el artículo 23, el alcance de la protección tras la extensión comprendería las traducciones de indicaciones geográficas. Al principio, su delegación pensó que el idioma chino podría distinguirse fácilmente de otros idiomas, lo que haría poco probables los conflictos con nombres extranjeros. Sin embargo, un gran número de términos chinos quedarían excluidos de toda utilización ulterior en relación con productos y servicios por el simple hecho de que los términos equivalentes en inglés, español u otros idiomas se reconocerían como indicaciones geográficas. Tal situación crearía muchas dificultades en China. En segundo lugar, y de conformidad con el párrafo 6 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, si se determinase que una indicación geográfica es idéntica a un término genérico o habitual utilizado en el lenguaje corriente para designar bienes o servicios en el territorio de un Miembro, ese Miembro no estaría obligado a proteger tal indicación geográfica. Sin embargo, puesto que no existen normas sobre la forma de realizar tal determinación, la autoridad competente tendría dificultades para resolver el conflicto de derechos entre las indicaciones geográficas y los términos genéricos. En tercer lugar, si una indicación geográfica no se utilizase durante un período ininterrumpido, por ejemplo durante tres años, en el territorio de un Miembro, las autoridades competentes podrían anular ésa indicación de la misma forma prevista en las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio. En cuarto lugar, si una indicación geográfica fuese incompatible con una marca de fábrica o de comercio, con el nombre de una empresa o con cualquier otro nombre comercial, ¿cómo se aplicarían las normas a ese tipo de conflictos? ¿Se reconocería la excepción de "uso anterior"?

140. Es necesario tener en cuenta estos aspectos al examinar la cuestión de la extensión, ya que, de no hacerlo, la extensión podría acabar siendo una fuente de incertidumbre e imprevisibilidad para el sistema multilateral de comercio. Dado que China tiene una historia relativamente larga, muchas indicaciones geográficas locales se han desarrollado durante el proceso de formación de su cultura y civilización. Por ésa razón, China es parte interesada en la cuestión de las indicaciones geográficas, y su delegación desearía cooperar con todos los Miembros para lograr una solución equilibrada, económicamente viable y jurídicamente previsible para ese problema.

141. El representante de Corea dice que su delegación se complacería en participar en los debates en la forma propuesta en la Lista recapitulativa de cuestiones, y cree que es importante fomentar un entendimiento común de la definición establecida en el párrafo 1 del artículo 22. Las cuestiones planteadas por algunos Miembros, tales como las relativas a los nombres de países y los nombres que no son de lugares, ponen de manifiesto la necesidad de tal entendimiento. En comparación con los vinos, que se han protegido principalmente mediante indicaciones de procedencia o denominaciones de origen bajo el control de los respectivos gobiernos o comunidades en algunos países europeos, los productos distintos de los vinos se han protegido habitualmente mediante marcas de fábrica o de comercio y no se han beneficiado de un sistema de control colectivo. Por consiguiente, la interpretación de la definición y la forma de determinar qué indicaciones geográficas que identifiquen productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas tendrán derecho a protección no es tarea fácil y, según parece, causa por igual gran confusión a productores y a los consumidores. Una de las principales diferencias entre la protección general y la protección adicional es la existencia de condiciones en lo que respecta a la inducción del público a error. A menudo se ha alegado que el

nivel general de protección no sería suficiente, ya que impondría la carga de la prueba al titular de la indicación geográfica. Sin embargo, el representante desea oír más explicaciones sobre la insuficiencia de tal nivel general de protección. En la mayoría de los países, las marcas de fábrica o de comercio han de registrarse de acuerdo con las leyes y reglamentaciones nacionales con objeto de obtener protección en ese territorio. En cambio, no existen aún prácticas o principios de ese tipo, establecidos a nivel mundial, respecto de las indicaciones geográficas. Con arreglo al párrafo 2 del artículo 23, la extensión obligaría a los Miembros a reconsiderar la situación de sus marcas de fábrica o de comercio registradas.

142. El representante de las Comunidades Europeas apoya plenamente los esfuerzos del Presidente por lograr que todos los Miembros participen en un debate constructivo sobre este asunto. Algunas delegaciones han indicado que la Lista recapitulativa no les impedirá plantear otras cuestiones. En la comunicación presentada esta mañana se formulan más preguntas que respuestas, y probablemente preguntas que no son de gran utilidad para hallar una solución. Aparentemente, en esa comunicación tampoco se tiene en cuenta la información detallada ya presentada por numerosas delegaciones. El representante está dispuesto a proseguir el debate sobre todas las cuestiones pertinentes, pero el Consejo debería evitar la repetición de otros debates que están teniendo lugar en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC o en otros foros. A continuación, destaca los principales aspectos examinados en su declaración escrita, incluidos, entre otros, los relativos a la cuestión de la desigualdad numérica, los sistemas de registro y el trato nacional, la norma del país de origen y el principio de territorialidad, los nombres de países, los nombres no geográficos como indicaciones geográficas, y las expresiones tradicionales. Según lo solicitado por la delegación de las Comunidades Europeas, en un anexo a la presente acta se reproduce el texto íntegro de esa declaración escrita.

143. El representante de Chile recuerda que su delegación es patrocinadora del documento IP/C/W/360, y hace suya la declaración del representante de Australia respecto de los usos no autorizados. Como ha aducido el representante de Bulgaria y se afirma en el documento IP/C/W/353, "[n]o existe actualmente ninguna razón económica o sistémica para proteger las indicaciones geográficas de ciertos productos de manera diferente de las de otros". Chile está de acuerdo con esa aseveración. Sin embargo, su delegación lamenta que quienes hoy acompañan a Bulgaria en su propuesta no se hayan hecho la misma pregunta años atrás, cuando se negoció la protección adicional de los vinos y las bebidas espirituosas durante la Ronda Uruguay. En aquel momento, tampoco había razones para discriminar a favor de determinados productos en desmedro de otros. Sin embargo, esa discriminación se estableció en el artículo 23 y, actualmente, existen dos regímenes distintos para una misma categoría de propiedad intelectual. Aunque su delegación cree que no existen diferencias entre los vinos y bebidas espirituosas y los demás productos, no considera que la solución sea extender la protección adicional del artículo 23 a todo tipo de productos. La protección adicional no se consiguió a instancias de los países que ahora apoyan la propuesta de su delegación, sino a petición de quienes patrocinan la propuesta de extensión de la protección. Las verdaderas razones por las que se desea extender la protección a otros productos son las mismas que impulsaron a esos países a preconizar la protección adicional de los vinos y las bebidas espirituosas. Esas son las auténticas razones, y no las relativas al equilibrio entre países desarrollados y en desarrollo.

144. Del mismo modo que su delegación no es partidaria de que se establezca discriminación entre diferentes tipos de productos, tampoco está a favor de hacer distinción entre las distintas categorías de propiedad intelectual. El representante no ve motivos para eliminar los requisitos de protección general previstos en el artículo 22, es decir, la necesidad de probar que se ha inducido al público a error o se ha incurrido en actos de competencia desleal, y no hacer lo mismo, por ejemplo, en relación con las marcas de fábrica o de comercio. Su delegación no ha oído suficientes razones para conceder una protección tan fuerte a determinada categoría de propiedad intelectual y no otorgar una protección similar a otra categoría. Se ha argumentado que el requisito de probar que se ha inducido al público a error da lugar a incertidumbre jurídica y que los jueces podrían llegar a soluciones distintas en casos

similares. Con este argumento se podría llegar al absurdo de decir que debería eliminarse la excepción de uso leal en el ámbito del derecho de autor o la posibilidad de conceder licencias obligatorias en relación con las patentes, ya que producen incertidumbre jurídica en los titulares de derechos y debido a que los jueces podrían llegar a decisiones discrepantes cada vez que evaluaras tales casos.

145. El representante afirma que las excepciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC fueron muy bien pensadas en el momento de incluirlas, y que su eliminación produciría incertidumbre no sólo en los consumidores, sino también en quienes las han utilizado durante muchos años. Para Chile no está claro el modo en que se aplicarían las excepciones del artículo 24 en caso de aprobarse la propuesta de Bulgaria. El representante no está de acuerdo en hacer más estrictas las normas de protección de las indicaciones geográficas, debido a un problema que, probablemente, guarda más relación con la aplicación que con la falta de protección. También disiente de la afirmación de Bulgaria acerca de la necesidad de impedir que algunos se aprovechen de la reputación creada por otros. En su opinión, quienes se aprovecharían de la reputación creada por otros serían, con frecuencia, quienes pretenden que se renuncie a denominaciones utilizadas durante largo tiempo. Por esas razones y otras expuestas en el documento de su delegación, el representante no está a favor de la extensión. Tampoco su delegación está de acuerdo con la redacción de un texto alternativo a los términos actuales del Acuerdo. Por último, indica que no conoce la legislación a que ha hecho referencia el representante de las Comunidades Europeas. Hasta donde él sabe, Chile ha otorgado protección en las condiciones precisas establecidas por el Acuerdo sobre los ADPIC, y ha hecho diferencia entre los vinos y bebidas espirituosas y los demás productos.

146. El representante de Hungría dice que ha tenido la suerte de que los cuatro documentos presentados anteriormente por los partidarios de la extensión en relación con este tema, el más reciente de los cuales es el distribuido con la signatura IP/C/W/353, hayan tratado ya ampliamente las cuestiones jurídicas. En respuesta a los comentarios de determinadas delegaciones de países desarrollados de que la extensión no redundaría en interés de los países en desarrollo, el representante señala que el documento IP/C/W/353 está patrocinado por 35 Miembros de la OMC, incluido un significativo número de países no comprendidos en la categoría de países desarrollados, por lo que tal vez corresponda a los distintos Miembros decidir qué es lo que favorece o no sus intereses. Respecto de la cuestión de la materia objeto de protección, el representante indica que, como han señalado claramente por escrito los partidarios de la extensión, la última vez en el párrafo 8 del documento IP/C/W/353, la extensión no tendrá ninguna repercusión en la definición de indicaciones geográficas establecida en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los solicitantes no desean modificar la definición formulada en esa disposición; el debate trata simplemente sobre el aumento del nivel de protección actualmente previsto para los productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas hasta equipararlo al nivel del artículo 23. Puesto que no se preconizan cambios en la definición, que es igualmente aplicable a los productos que se benefician únicamente del nivel de protección del artículo 22 así como a los vinos y bebidas espirituosas, las cuestiones relacionadas con la definición no parecen tener interés para el debate sobre la extensión.

147. El representante dice que, a pesar de todo, y habida cuenta de las numerosas preguntas formuladas por algunos oponentes en el Consejo de los ADPIC, así como en la Sesión Extraordinaria, los solicitantes han dejado claro (por ejemplo, en el párrafo 7 del documento IP/C/W/353 o en sus intervenciones en la última Sesión Extraordinaria, reflejadas en los párrafos 26 a 64 del documento TN/IP/M/2), que los nombres de localidades, regiones e incluso países pueden ser indicaciones geográficas con arreglo al párrafo 1 del artículo 22, siempre que cumplan las condiciones en él establecidas, en particular las relativas a la existencia de una relación entre la calidad, la reputación u otras características de un producto y su origen geográfico. El representante aclara que cualquier nombre o signo que sugiera origen geográfico y se ajuste a la definición del párrafo 1 del artículo 22 puede beneficiarse de protección como indicación geográfica. Dada la necesidad de establecer la relación entre la calidad, la reputación y otras características y el origen geográfico de los productos,

sólo es posible determinar si los nombres cumplen los requisitos de la definición en función de cada caso y habida cuenta de todos los elementos específicos pertinentes de las distintas situaciones. A su entender, muchos malentendidos acerca de qué nombres o signos se ajustarían o no a la definición del párrafo 1 del artículo 22 podrían tener su origen en la poca atención prestada a la importancia de esa relación. El representante insiste en que no deben confundirse las normas de origen o indicaciones de procedencia con las indicaciones geográficas, y que las primeras, es decir, las normas de origen e indicaciones de procedencia, no hacen referencia a ninguna calidad, reputación u otra característica y tienen una finalidad completamente distinta.

148. Según el representante, en el documento IP/C/W/360 se sostiene que existe un desequilibrio numérico: algunos Miembros tienen indicaciones geográficas para muchos productos, mientras que otros tienen solamente unas pocas. La conclusión que ese documento parece sugerir es que la simple desigualdad numérica es, en sí misma, una indicación suficientemente clara de quienes serían los beneficiarios de la extensión. El representante coincide con las Comunidades Europeas en que el número de indicaciones geográficas protegidas a nivel interno, por ejemplo mediante un registro, y el número de casos en que los titulares de derechos acuden a países extranjeros para utilizar los recursos legales que los Miembros de la OMC están obligados a arbitrar con arreglo a los artículos 22 y 23 son cuestiones completamente independientes. El enfoque adoptado en el documento IP/C/W/360 pierde de vista el hecho de que el valor económico de las distintas indicaciones geográficas puede variar sensiblemente. El valor económico de una indicación de notoriedad mundial utilizada, por ejemplo, en relación con un producto alimenticio de calidad, especialmente si su zona de producción es muy extensa, puede superar con mucho el valor total de un gran número de indicaciones utilizadas en relación con productos conocidos únicamente en su propio país de origen. El representante aclara que tal evaluación sólo podría llevarse a cabo país por país, teniendo en cuenta las distintas situaciones de mercado y pautas de consumo. En otras palabras, la evaluación del impacto económico potencial de la extensión es quizás una cuestión más compleja de lo que parece sugerir el documento IP/C/W/360. En respuesta a anteriores comentarios del Brasil, el representante afirma que, por esos motivos, parece muy difícil, sino imposible, cifrar el valor de determinada indicación geográfica. En particular, sería muy difícil cuantificar la diferencia entre los dos niveles de protección en lo que respecta al valor económico.

149. El representante no oculta cierta sorpresa ante la argumentación numérica de algunos patrocinadores del documento IP/C/W/360 que, en general, son solicitantes en materia de propiedad intelectual y que, hasta donde puede recordar su delegación, no formularon objeciones similares, por ejemplo, cuando se debatió la introducción de la protección mediante patente para los productos farmacéuticos en las negociaciones de la Ronda Uruguay. A ese respecto, cita el siguiente pasaje de un reciente documento de la OMC preparado para el Grupo de Trabajo sobre la Relación entre Comercio e Inversiones (documento WT/WGTI/W/136, en particular sus párrafos 5 y 6): "Si bien éstos [los países en desarrollo] y los países de Europa Central y Oriental aumentaron su proporción de patentes registradas en los Estados Unidos del 1,5 por ciento en el período 1977-1982 al 3 por ciento en el período 1990-1996, el grueso de esa proporción del 3 por ciento correspondió a Corea y el Taipei Chino". Para poner esas cifras en la perspectiva adecuada, el representante cita también otro pasaje del mismo documento, en que se afirma que los diez países desarrollados con mayor gasto en investigación y desarrollo (equivalente, en 1993, al 84 por ciento del total mundial) absorbieron cerca del 92 por ciento de todas las patentes de los Estados Unidos en el período de 1995-1998. Insiste en que no está atacando la protección mediante patente, sino simplemente pidiendo las delegaciones que se muestren coherentes en sus argumentos.

150. El representante observa que las excepciones previstas en el artículo 24 (relativas al uso previo, la utilización de buena fe y la anterioridad en la solicitud y adquisición de derechos respecto de marcas de fábrica o de comercio, y a las expresiones genéricas) son igualmente aplicables a los niveles de protección de los artículos 22 y 23. En el apartado b) del párrafo 41 del documento IP/C/W/353, los solicitantes han confirmado que las excepciones contenidas en el artículo 24 serán

aplicables *mutatis mutandis*, lo que demuestra que la extensión es esencialmente una medida para el futuro y debería reducir los temores de los que aún no están seguros de su conveniencia. La excepción de anterioridad tiene particular interés en lo que respecta a una importante preocupación no comercial del ámbito agrícola, a saber, la preservación de la identidad cultural, mencionada verbalmente y por escrito en el documento IP/C/W/360 por un considerable número de países exportadores de productos agrícolas. El representante no entiende por qué la constante disponibilidad de todas las excepciones, incluida la de anterioridad, no ha de dar respuesta adecuada a esa preocupación, a menos que los países interesados prevean nuevas corrientes inmigratorias a gran escala, especialmente de regiones cuyos inmigrantes ya no son bien recibidos.

151. En relación con las indicaciones geográficas homónimas, examinadas en los párrafos 21 a 29 del documento IP/C/W/353, el representante afirma que el párrafo 3 del artículo 23 abarca concretamente el caso de las indicaciones geográficas homónimas de vinos cuya utilización no dé al público la idea de que el producto es originario de otro territorio, según lo previsto en el párrafo 4 del artículo 22. En tales casos, ambas indicaciones han de protegerse, y los Miembros de la OMC interesados han de establecer las condiciones necesarias para diferenciar las indicaciones homónimas de los vinos. Al hacerlo, han de asegurar que no se induzca a error a los consumidores y que se trate equitativamente a los productores interesados. ¿Cuáles son las consecuencias de esas medidas? A juicio del representante, los Miembros de la OMC habrán de mantener abiertos sus respectivos mercados en los casos de indicaciones geográficas homónimas, lo que requiere una solución *ad hoc* para asegurar la coexistencia de los productos identificados por esas indicaciones geográficas. Esa disposición del párrafo 3 del artículo 23 está formulada especialmente para regular los efectos de la colonización histórica o las corrientes inmigratorias en lo que respecta a los nombres de ciudades, regiones y localidades resultantes que sean idénticos a los utilizados en los países de origen de los inmigrantes. El representante cree que esa disposición constituye una prueba más de que la extensión no es incompatible con la idea de dar respuesta adecuada a las genuinas preocupaciones relativas a la preservación de la diversidad cultural. No obstante, el representante insiste en que mantener abierta la posibilidad de que los fabricantes nacionales empiecen a vender productos cuyos nombres se aprovechen gratuitamente de las indicaciones geográficas de otros no parece una hipótesis que figure entre esas preocupaciones legítimas.

152. En respuesta a la delegación de Jamaica, el representante de Australia dice que el Consejo ha convenido en que la definición de indicación geográfica comprende, sin lugar a dudas, los nombres de países. Pero al representante le sorprende la afirmación, inequívocamente segura y acompañada de algunos ejemplos, del representante de las Comunidades Europeas en la presente reunión, según la cual los nombres de países tienen cabida en la definición de indicaciones geográficas. El representante siente perplejidad al constatar la diferencia entre la teoría preconizada por las Comunidades Europeas y la realidad de sus prácticas, puesta de manifiesto por el Reglamento (CE) N° 2081/92, relativo a las indicaciones geográficas de un país "en circunstancias excepcionales". Por otra parte, una reciente normativa de las CE sobre vinos (Reglamento (CE) N° 753/2002) establece que, en lo que respecta a las indicaciones de vinos importados "que excepcionalmente sirven para identificar a un vino como originario de un tercer país en su totalidad, podrán figurar en la etiqueta de un vino importado las enumeradas en el anexo IV del presente Reglamento". Sin embargo, el anexo IV es una página en blanco en la que no figura ningún país. A ese respecto, el representante plantea las preguntas siguientes: en la práctica, y habida cuenta de los deseos de las Comunidades Europeas y otros solicitantes de la extensión y de un registro internacional, ¿se permitiría el registro de términos del tipo "yogur búlgaro", "arroz japonés", "té chino", "café keniano", "salami húngaro" o "ron jamaicano" como indicaciones geográficas de países? En la práctica, ¿se aceptarían las reclamaciones de protección de Tailandia, China o cualquier otro nombre de país con independencia del producto al que el Miembro deseara vincular ese nombre? ¿O sólo se aceptarían en los casos más excepcionales? Y, de ser así, ¿cuáles serían esos casos? El representante recuerda también que, en el caso del vino, ninguno de los países que mantienen con las Comunidades Europeas acuerdos bilaterales más amplios que el Acuerdo sobre los ADPIC ha sido autorizado a utilizar el nombre de su

país como nombre para vino. En otras palabras, no se permitiría utilizar en la etiqueta la denominación "Chardonnay australiano", por ejemplo.

153. El representante de Australia recuerda que el representante de Bulgaria ha destacado de nuevo la reputación de su "yogur" y su "feta", reputación que él corrobora, y dice que, si los solicitantes de la extensión logran lo que desean, aún no habrá garantías de que Bulgaria, o cualquier otro nombre de país como Bulgaria, se acepten como indicaciones geográficas. En realidad, si Bulgaria se incorpora a las Comunidades Europeas, no se le permitirá utilizar el término "feta" en los productos que exporte al mercado comunitario. Por otra parte, si los solicitantes lograsen su propósito, con independencia de que Bulgaria se incorpore o no a las CE, Australia se vería obligada a prohibir las importaciones de "feta" búlgaro, ya que la expresión existiría en las Comunidades Europeas como término griego protegido y, por consiguiente, figuraría en el registro. Y por figurar en ese registro, Australia no tendría obligación de aceptarlo y protegerlo, a menos que deseara entablar largos procedimientos de solución de diferencias.

154. El representante recuerda que Suiza y Bulgaria han explicado que la extensión del régimen de las indicaciones geográficas sólo se aplicaría a las indicaciones geográficas nuevas. ¿Significa eso, entonces, que no quedarían cubiertas expresiones tales como "té de Ceilán" y "arroz indio basmati"? Se trata de una cuestión importante, ya que, en su opinión, los países en desarrollo que han apoyado la idea de la extensión lo han hecho en la creencia de que los nombres de países y sus productos se aceptarían en ese registro internacional que los solicitantes desean establecer.

155. En cuanto a los "términos tradicionales", el representante recuerda la afirmación de las CE según la cual los "nombres no geográficos" están, indudablemente, excluidos de la definición de indicación geográfica. Siendo así, ¿por qué las Comunidades Europeas, al referirse a algunas "expresiones tradicionales" en su comunicado de prensa sobre las indicaciones geográficas relativas al vino, dan a entender muy claramente que esas expresiones quedan comprendidas en la definición de indicaciones geográficas establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC? Sin embargo, una cosa o la otra. No se puede, por una parte, asegurar que todas las medidas que se apliquen a las "expresiones tradicionales" se adoptarán al margen del Acuerdo sobre los ADPIC y, por otra, emitir un comunicado de prensa oficial en que se afirma que esas mismas "expresiones tradicionales", que no son más que adjetivos corrientes de la lengua inglesa, quedarán cubiertas como indicaciones geográficas. Por consiguiente, ¿cuál sería exactamente, por ejemplo, la situación de los productos de calidad tradicionales de las Comunidades Europeas? ¿Cómo se vincularían con determinados países? No está claro, por lo tanto, que la extensión carezca necesariamente de repercusiones respecto del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, como sostienen los solicitantes. En su opinión, esa es una cuestión que todos los Miembros deberán decidir. Lo que está claro para el representante es que la forma en que se estructure e interprete el párrafo 1 del artículo 22 tendrá notables repercusiones para todos los Miembros, incluidos los que tienen intereses concretos respecto de determinados productos y los que tendrán que adoptar medidas de puesta en práctica y observancia respecto de una gran diversidad de productos en beneficio de los demás Miembros.

156. Por último, el representante de Australia recuerda también la anterior afirmación del representante de las CE según la cual algunos países, por el mero hecho de establecer en su legislación interna disposiciones, medidas o concesiones que exceden de las obligaciones oficialmente adquiridas en la OMC, han de apoyar *ipso facto* la extensión en foros como esta Organización. En su opinión, nada justifica tal planteamiento. No hay motivos para pensar que, precisamente porque un país adopte medidas en su propio interés nacional tenga, por ello, que estar dispuesto a comprometerse en la OMC con una iniciativa de mucho más alcance que las medidas adoptadas a nivel nacional. En realidad, el aspecto fundamental del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que respecta a las indicaciones geográficas es el principio de "aplicación territorial", es decir, que cada Miembro decidirá si una expresión constituye o no una indicación geográfica. Sin embargo, con arreglo a la propuesta de los solicitantes, ese derecho se suprimirá y se sustituirá por un complicado proceso de

registro internacional, impugnaciones, diferencias y arbitrajes llevado a cabo por personas que no serán funcionarios de los Estados Miembros. En consecuencia, por su propia definición, la protección adicional que los solicitantes reclaman para los productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas sobrepasaría con mucho los actuales derechos y obligaciones previstos en el artículo 23.

157. El representante de Malta, comenta los argumentos sobre la supuesta desigualdad numérica esgrimidos por los que se oponen a la extensión y dice que, tanto en materia de indicaciones geográficas como de otros derechos de propiedad intelectual, los números no son esenciales para analizar las repercusiones económicas y comerciales de las indicaciones geográficas. Lo que cuenta es la calidad de esas indicaciones, no su cantidad. Por otra parte, opina que el artículo 22 debe mantenerse intacto, mientras que apoya plenamente las propuestas de modificación del párrafo 1 del artículo 23, es decir, la supresión de toda mención de los vinos y las bebidas espirituosas tanto en el título como en el texto y su sustitución por la expresión "todos los productos". El representante señala que en el documento IP/C/W/353, que su delegación ha patrocinado, se exponen con detalle las razones que justifican esos cambios.

158. El representante de la India recuerda que las opiniones de su delegación figuran en el documento IP/C/W/353, al que ha hecho referencia el representante de la República Checa. La propuesta de la India sobre la extensión no tiene efectos en la definición del párrafo 1 del artículo 22. Las partes interesadas deberían hallar medios para impedir el uso de indicaciones geográficas sin tener que demostrar que se ha inducido al público a error o se ha incurrido en competencia desleal.

159. Las cuestiones planteadas en el documento IP/C/W/360 no parecen reflejar la situación jurídica establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC. El representante no entiende el argumento de que una expresión como "*arroz basmati*" no pueda considerarse indicación geográfica simplemente porque no nombra el verdadero lugar de origen. Y pregunta en qué parte del artículo 22 se afirma que sólo los nombres geográficos pueden ser indicaciones geográficas. Tal argumentación equivaldría a inventar una nueva definición de indicaciones geográficas. En la India se reconoce el "*arroz basmati*" como un tipo de arroz que posee determinadas características concretas y procede de determinada región del país. El ordenamiento jurídico así lo reconoce, aunque, por ahora, no está registrado formalmente. Pero se trata de una situación temporal que no impide a la India proteger esa expresión como indicación geográfica. De modo similar, ninguna disposición del párrafo 1 del artículo 22 impediría el reconocimiento de indicaciones geográficas procedentes de dos países. El representante observa que el representante de las Comunidades Europeas ha profundizado en el principio de territorialidad, aplicado al Acuerdo sobre los ADPIC.

160. El representante de la Argentina comparte muchas de las observaciones de Australia. Señala que algunas delegaciones han formulado propuestas específicas para modificar el Acuerdo sobre los ADPIC y dice que no está dispuesto a aceptarlas. Su delegación presentó una comunicación dos días antes de hacerse pública la Declaración de Doha y, en concreto, entiende que el párrafo 18 de esa Declaración, como mucho, permite al Consejo examinar la posibilidad de plantear la cuestión de la extensión. En modo alguno podría el Consejo entender el mandato en el sentido de que puede revisar el Acuerdo sobre los ADPIC para extender la protección a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas.

161. Sin duda, se trata de una cuestión con ramificaciones muy complejas y delicadas. El representante felicita a las delegaciones de países en desarrollo que están dispuestas y preparadas para avanzar con decisión y compromiso, ya que ello demuestra que han recopilado estudios y analizado estas cuestiones y que tales análisis han demostrado que elaborar un modelo de esas características favorecerá sus intereses nacionales. Su delegación no ha sido capaz de hacerlo y no está en condiciones de evaluar la situación en su totalidad, razón por la que ha adoptado su presente actitud. La definición contenida en el artículo 22 se aplica a todas las indicaciones geográficas, incluidas las mencionadas en el artículo 23. Según esa definición, para que las indicaciones geográficas tengan

derecho a protección han de cumplir las condiciones siguientes: que el producto exista, que el producto tenga una determinada calidad, reputación u otras características imputables a su origen geográfico, y que sea originario de la región, etc. Hasta ahora, su campo de aplicación ha sido muy amplio. Sin embargo, en lo sucesivo sólo la legislación nacional de cada país podrá delimitar con mayor precisión el alcance, la amplitud y la naturaleza del campo de aplicación del párrafo 1 del artículo 22. Se trata de un derecho de los Miembros previsto en el Acuerdo, que les permite aplicar el sistema en su propio marco legal y según su propio ordenamiento jurídico. Los derechos de propiedad intelectual son derechos privados que se aplican a nivel territorial y, en consecuencia, los Miembros tienen la opción de decidir su grado de protección y las condiciones a que están sujetos, así como su validez.

162. La representante de Nueva Zelandia dice que su delegación, aunque considera útil la Lista recapitulativa para ayudar a estructurar los debates del Consejo, hace suyos los reparos de Australia respecto del documento, en particular porque no se trata de una lista exhaustiva de cuestiones y porque el debate no puede discurrir al margen de las preocupaciones de política comercial y desarrollo. La representante toma nota del deseo del Presidente y de otros Miembros de evitar la duplicación con otros puntos del orden del día y otros foros, e indica que su delegación no tiene nada que objetar al respecto. Sin embargo, observa, en relación con este punto del orden del día, que la obligación del Consejo de presentar su informe dimana del párrafo 12 de la Declaración de Doha, que establece el contexto para una parte de la labor del Consejo, es decir, la evaluación de la aplicación actual del Acuerdo sobre los ADPIC en esa materia, incluido cualquier problema y las consiguientes perspectivas de comercio y desarrollo de los Miembros. Debido a la existencia de tal elemento en su mandato sobre la extensión, el Consejo ha de prestar la debida atención a esas cuestiones. Por consiguiente, aunque valora positivamente el hecho de que el punto del orden del día sobre el examen de la aplicación de las disposiciones de la sección relativa a las indicaciones geográficas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 sea un punto independiente del orden del día, el tema de la aplicación tiene mucho que ver con ambos puntos de ese orden del día.

163. En cuanto a la cuestión de la definición, la representante señala que, según le ha enseñado la propia experiencia de su delegación, muchos países pueden tener una visión distinta de lo que está o no comprendido en la definición del artículo 22 y, en la práctica, del tipo de protección realmente otorgada. Ésa es la razón por la que su delegación ha sido partidaria de mantener un debate sobre este tema, al considerar realistas las expectativas de posibles beneficios. Por ese motivo es oportuno un debate sobre la definición, contrariamente a lo manifestado por algunas delegaciones en el Consejo. Según consta en las actas de la última reunión del Consejo, la India, al presentar un documento en nombre de varias delegaciones, señaló que, en virtud de esa propuesta, los productores de té chino, cerámica francesa y alfombras turcas dispondrían, con la extensión, de un eficaz instrumento de protección. Ese comentario interesa mucho a su delegación, ya que no ha sido esa su experiencia con respecto a la protección adicional de los vinos. A su delegación se le ha dicho, por ejemplo, que la expresión "Chardonnay de Nueva Zelandia" no podría recibir protección con arreglo al sistema de las Comunidades Europeas debido a que representa una zona geográfica demasiado extensa para cumplir la segunda parte de la definición del artículo 22, es decir, que "determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico". En consecuencia, la representante se pregunta si alguien ha mirado recientemente el mapa y comparado la superficie de Nueva Zelandia con la de China, Turquía o Francia, por ejemplo. Si Nueva Zelandia es demasiado extensa para cumplir el criterio del carácter distintivo en las Comunidades Europeas, ¿cómo se supone que lo cumplirán otros países? ¿O hay algún detalle que se le escapa a Nueva Zelandia? ¿Existe tal vez algún planteamiento según el cual los métodos de producción utilizados para el vino pueden evaluarse de modo distinto a los métodos utilizados, por ejemplo, para cultivar té, y puede extraerse de ese hecho algún tipo de fundamento para adoptar un enfoque discriminatorio respecto al reconocimiento de la indicación geográfica de un país?

164. Según entiende la representante, los solicitantes han expresado su preocupación porque la prueba de inducción a error al consumidor con arreglo al actual nivel de protección del artículo 22 es subjetiva y se presta a una gran variación entre los distintos países. Como ha señalado anteriormente, éste es un concepto sobre el que tal vez haya que reflexionar en relación con la definición del artículo 22: ¿son los criterios objetivos que, según parece, aplican algunos países para determinar si ciertas indicaciones geográficas cumplen la definición de tal tipo que justificarían que alguno adujera la necesidad de modificar la definición del artículo 22? La principal diferencia entre los niveles de protección de los artículos 22 y 23 consiste en que el artículo 23 prevé la protección absoluta para un titular de derechos. Ese derecho absoluto de protección es muy superior al nivel de protección aplicado a los demás instrumentos de propiedad intelectual en el Acuerdo sobre los ADPIC. En cambio, el nivel de protección del artículo 22 prevé expresamente los objetivos de impedir la competencia desleal, si bien manteniendo un equilibrio de intereses entre los distintos productores y entre consumidores y productores. El artículo 22 permite que esos objetivos se cumplan mediante la aplicación de una "prueba de inducción a error a los consumidores". Se trata de una prueba respetada y de largo arraigo, usada tradicionalmente en un gran número de sistemas jurídicos y contextos legales. En cambio, el artículo 23 no deja lugar para ese importante principio. La representante espera que quienes han planteado la cuestión de la desigualdad numérica comprendan que su delegación está realmente preocupada por los costos que resultarían de esa desigualdad. Sin embargo, al finalizar la jornada, su delegación considera que la cuestión decisiva en lo que respecta a las ventajas y los inconvenientes económicos de una posible extensión es la naturaleza de la protección. Por consiguiente, el artículo 22 es más coherente con los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, establecidos en el artículo 7, que afirma que la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán ejercerse de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. De forma similar, en el artículo 8 del Acuerdo se reprueba la utilización de los derechos de propiedad intelectual para limitar de manera injustificable el comercio.

165. Las excepciones previstas en el artículo 24 podrían hacer más llevadera la transición comercial en un posible supuesto de extensión. Pero se han puesto excesivas esperanzas en esas excepciones como medio para facilitar una transición gradual en el mercado hacia un mayor nivel de protección. La representante no tiene claro hasta qué punto se puede confiar en la eficacia de esas excepciones, especialmente cuando, en la propuesta presentada en la última reunión, los solicitantes han defendido indirectamente la necesidad de ajustar el párrafo 6 del artículo 24, que prevé la principal excepción sobre nombres genéricos. El nivel de protección del artículo 23 y la consiguiente supresión de las pruebas de inducción a error de los consumidores y prácticas anticompetitivas reducen drásticamente la capacidad de los productores ubicados fuera de la zona geográfica de recurrir a los tribunales para demostrar objetivamente si los nombres reúnen los requisitos para la protección o han pasado realmente a ser genéricos. Con ello disminuye la capacidad de los productores para acogerse a la excepción prevista en el párrafo 6 del artículo 24. Por ese motivo, la representante no está segura de que algunas de las excepciones, en su estado actual, bastasen para evitar graves distorsiones del comercio en caso de una posible extensión.

166. Para terminar, la representante responde a dos de las cuestiones planteadas por las Comunidades Europeas. En un momento de su intervención, el representante de las Comunidades Europeas ha hecho referencia al escaso número de registros extranjeros en algunos países que aplican ya el nivel de protección previsto en el artículo 23. Su delegación cree que el hecho mencionado por las Comunidades Europeas tiene, en realidad, el efecto de reforzar el argumento de que no existe problema en la aplicación del artículo 22 y que los productores consideran que tienen ya un nivel de protección suficiente. Las Comunidades Europeas han señalado también que algunos países han adoptado ya la extensión del nivel de protección del artículo 23 a pesar de que se oponen a ese cambio en el Consejo. La representante señala que, según ha podido constatar en general su delegación, no hay nada como la experiencia nacional para comprender plenamente las verdaderas desventajas de cualquier medida.

167. El representante del Pakistán señala que uno de los argumentos esgrimidos en el documento IP/C/W/360 es que la protección de las indicaciones geográficas con arreglo al artículo 22 resulta suficiente y que, sencillamente, se trata de un mecanismo que no se ha utilizado. Asimismo, recuerda que las delegaciones favorables a la extensión, incluida la suya propia, han explicado ya detenidamente, en los párrafos 9 a 14 de su comunicación (documento IP/C/W/247/Rev.1) por qué la protección otorgada por el artículo 22 es insuficiente, en comparación con la que ofrece el artículo 23. En el mismo documento, las delegaciones contrarias a la extensión consideran que el hecho de que los productores autorizados para utilizar la indicación geográfica "suizo" respecto del chocolate hayan tomado medidas, con arreglo al artículo 22, contra el uso indebido de su indicación geográfica es prueba de que la protección otorgada por esa disposición es suficiente. Sin embargo, la verdadera causa radica en que el artículo 22 es la única protección disponible, aun cuando sea insuficiente. Análogamente, en el caso de la denominación "American Limoges" para vajillas de porcelana, mencionado también en el documento IP/C/W/360 como ejemplo ilustrativo de que el nivel de protección del artículo 22 es suficiente, tal protección se aceptó únicamente porque pasó la "prueba de inducción a error". Sin embargo, la extensión habría hecho innecesaria esa prueba compleja y jurídicamente poco segura. El término "Limoges", al ser una indicación aplicable a porcelanas francesas de calidad, no podría haberse utilizado en relación con porcelanas estadounidenses según el nivel de protección más eficaz del artículo 23. En comparación con el artículo 23, la protección del artículo 22 se basa en criterios subjetivos, es decir, en las expectativas del público de un mercado concreto respecto de determinado producto y su indicación geográfica, y en el conocimiento de esa indicación geográfica. En cambio, el nivel de protección del artículo 24 se basa en un simple criterio objetivo, a saber, si el producto es realmente originario del lugar indicado por esa indicación geográfica en particular. Los pequeños productores y las asociaciones no tendrán, sencillamente, los medios necesarios para impedir el uso indebido de sus indicaciones geográficas en un país extranjero si la protección de esas indicaciones sigue sujeta a la difícil y compleja prueba de que el público ha sido inducido a error o de que se ha incurrido en competencia desleal. En cambio, si se les ofrece la protección menos costosa y jurídicamente segura del artículo 23 para sus indicaciones geográficas, no sólo se animarán a impedir el uso indebido de sus indicaciones, sino que además se evitará que las inversiones que han realizado en el desarrollo y la comercialización de sus productos corran peligro.

168. La representante de Sri Lanka se adhiere a las declaraciones de Suiza, la India y todos los partidarios de la extensión y hace referencia a la confusión que parece existir entre indicaciones geográficas y expresiones tales como indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. A solicitud de la delegación de Sri Lanka, su declaración escrita se reproduce íntegramente en el anexo a la presente acta.

169. La representante de la República Checa dice que su delegación y los demás partidarios de la extensión han afirmado claramente en varias ocasiones que la propuesta de extensión está concebida de modo que sólo surta efecto en el futuro y no repercuta en los usos actuales de nombres que coincidan con indicaciones geográficas protegidas, en la medida en que estén en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y se ajusten a lo dispuesto en el artículo 24. Le complace observar que esa opinión es compartida en el párrafo 10 del documento IP/C/W/360. Sin embargo, todo parece indicar que los argumentos de ese párrafo 10, relativos a los términos genéricos y al uso habitual, se han utilizado únicamente para convencer a los Miembros de la inutilidad de la extensión, ya que los términos genéricos están comprendidos en las excepciones del artículo 24. Esos argumentos no son coherentes con el párrafo 25 del mismo documento, que insiste en el temor de los productores a perder el derecho a utilizar determinados términos genéricos o habituales.

170. En cuanto al término "pilsner", utilizado como ejemplo en el párrafo 25 del documento IP/C/W/360, la representante insiste en que la extensión sólo tendrá efectos para el futuro y, en ningún caso, anulará el *statu quo* en la utilización de esa indicación geográfica originaria de Bohemia. La República Checa nunca ha relacionado la extensión de la protección de las indicaciones geográficas con el término "pilsner", sino sólo con la cerveza checa como ejemplo de un tipo de producto. Por

otra parte, la República Checa no ha intentado en ningún momento proteger el término "pilsner" a nivel mundial a través de la OMC. No hay motivos para temer la pérdida del término "pilsner", que se ha utilizado como término genérico o como indicación relativa a un tipo de cerveza. Por ejemplo, en un Estado miembro de las CE se han utilizado desde el siglo XIX diversas variaciones del término "pilsner", y el 60 por ciento de la cerveza total consumida se ha vendido al amparo de una de las denominaciones "pilsner", y los productores de ese país no están en absoluto preocupados por la pérdida de esos términos a causa de la extensión. El hecho de que las Comunidades Europeas pertenezcan al grupo de solicitantes corrobora esa afirmación. La representante expone también otro argumento dirigido a los Miembros que aún no han tomado una decisión claramente favorable a la extensión debido a la utilización generalizada del término "pilsner" en sus países respectivos. La industria cervecera de la ciudad de Pilsen, en la República Checa, ha empezado recientemente a conceder licencias para la producción de Pilsner Urquell en el extranjero. Si la República Checa hubiese tenido interés en proteger la indicación geográfica "pilsner" con arreglo a la protección adicional del artículo 23, la producción bajo licencia de Pilsner Urquell nunca habría tenido lugar.

171. Aunque la República Checa no tiene interés en proteger el término "pilsner" como indicación geográfica con arreglo a la protección adicional del artículo 23, el caso de esa denominación puede ser un buen ejemplo de los efectos negativos de la protección suficiente de las indicaciones geográficas. La cerveza pilsen se fabricó por primera vez en la localidad de Pilsen en 1842, y se exportó al extranjero con el nombre alemán de "Pilsen Bier". El alemán era entonces el idioma oficial del territorio de Bohemia. La cerveza, basada en un nuevo método de producción (fermentación baja) se hizo muy popular y famosa debido a su calidad, su sabor, su aroma de lúpulo y su color dorado. La celebridad de la cerveza resultó fatal para su denominación. Otros cerveceros de todo el mundo empezaron a fabricar cerveza utilizando la misma técnica y, en la mayoría de los países, empezó a ser habitual la venta de cerveza de ese tipo particular con la denominación "pilsner" o variaciones de ella. En lo que respecta a la terminología utilizada hasta hoy cabe decir que los cerveceros extranjeros se han aprovechado de la reputación y el crédito de la cerveza Pilsner. La infracción está tan generalizada, y el término "pilsner" se utiliza con tal frecuencia, que, a pesar de los numerosos intentos realizados, el titular legítimo de la indicación geográfica se ve en la imposibilidad de impedir la falsificación y la utilización del término con carácter genérico. En el ejemplo de la indicación "pilsner", la ineficacia se ha debido a varias razones. Una de las más importantes es la falta de una legislación efectiva sobre la protección de las indicaciones geográficas, tanto a nivel multilateral como nacional. Existe poca experiencia en lo que respecta a procedimientos para combatir el uso ilegal de denominaciones de productos y las medidas que dan lugar a situaciones en que los términos pasan a ser genéricos. La situación se complica aún más a causa de la distancia de algunos territorios en que se utiliza el término en ausencia del productor. Es ya una constatación histórica que la denominación "pilsner" se consideró en la mayoría de los países, y entre los consumidores, como término para designar determinado tipo de cerveza, con independencia del país o lugar de origen. La industria cervecera original de Pilsen perdió mercados en esos países y sus exportaciones resultaron seriamente perjudicadas. La evaluación de ese tipo de pérdidas podría expresarse fácilmente en cifras. En conclusión, la representante señala que ahora existe la oportunidad de impedir tales desastres para todas las indicaciones geográficas, que son una propiedad y un patrimonio valiosos para sus titulares y países y que aún no se han convertido en términos genéricos. El Consejo debería aprovechar esta oportunidad en beneficio de todos los Miembros de la OMC.

172. El representante del Taipei Chino dice que el Gobierno de su país, aunque tiene gran interés en la extensión, ha proporcionado un alto nivel de protección a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, con arreglo al artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Acuerdo no tiene por finalidad obligar a los Miembros a proporcionar protección adicional a los productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas, ya que ello supondría una carga suplementaria para los Miembros que, habida cuenta de sus contrapartidas, no tienen interés en la extensión. A este respecto recuerda que el equilibrio de intereses es uno de los principios fundamentales de la OMC. Su delegación comparte la opinión, defendida anteriormente por el Canadá, Corea y otros muchos países, de que el

artículo 22 proporciona ya protección suficiente de las indicaciones geográficas. El actual sistema de derechos de propiedad intelectual, entre cuyos recursos figuran las marcas colectivas y las marcas de certificación, requiere sólo pequeños ajustes para dar cabida a la protección de las indicaciones geográficas de productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas. Por consiguiente, no es necesario establecer un nuevo sistema completo que resultaría costoso y oneroso, como sería el caso si se llevase a cabo la extensión. Por último, expresa su apoyo al documento IP/C/W/360.

173. El representante de Suiza afirma que el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC ofrece un nivel básico de protección de las indicaciones geográficas que identifiquen productos de cualquier tipo. Por su parte, el artículo 23 proporciona una protección adicional que, sin embargo, se limita a las indicaciones geográficas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas cuando se utilicen en los vinos y bebidas espirituosas, respectivamente, es decir, cuando se utilicen dentro de la misma categoría de productos. A título de ejemplo, menciona el término "Bordeaux", que identifica un famoso vino francés y que sólo podría beneficiarse de la protección prevista en el artículo 23 si se utilizase indebidamente en un vino no originario de Francia. Pero si la indicación geográfica "Bordeaux" se aplicase, por ejemplo, a galletas o a prendas de vestir producidas fuera de Francia, es decir, si se utilizase para identificar un producto fuera de la misma categoría de productos, se aplicaría la protección del artículo 22, ya que esos productos distintos del vino no son productos identificados normalmente por la denominación de origen "Bordeaux". En consecuencia, la principal diferencia es que, si bien el artículo 22 limita la protección a los casos en que la utilización de una indicación geográfica induzca al público a error respecto del verdadero origen geográfico del producto o en que tal uso constituya un acto de competencia desleal, el artículo 23 otorga protección a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas si la indicación geográfica correspondiente se utiliza en relación con esas categorías de productos. En el segundo caso, no sería necesario probar que se ha inducido al público a error o se ha incurrido en competencia desleal. Además, la protección que otorga el artículo 23 difiere de la prevista en el artículo 22 en que prohíbe el uso indebido de indicaciones geográficas acompañadas de expresiones tales como "estilo", "tipo", "clase" o "imitación". Por último, y a diferencia del artículo 22, el artículo 23 proporciona protección en los casos en que una indicación geográfica se utilice en forma traducida. En resumen, según el artículo 22, la protección depende de dos criterios que hacen recaer la difícil carga de la prueba sobre los usuarios legítimos de una indicación geográfica que deseen impedir su uso indebido. Además, la prueba de inducción a error introduce un elemento subjetivo que, una vez más, hace que la protección sea más complicada y jurídicamente poco segura.

174. Las excepciones previstas en el artículo 24 se aplican por igual a los niveles de protección de los artículos 22 y 23 y, por consiguiente, se aplicarían también en el marco de la extensión. Tales excepciones tienen debidamente en cuenta los reglamentos y prácticas nacionales existentes en los países Miembros antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC y la necesidad de equilibrar las ventajas resultantes para las diversas partes interesadas en la utilización y protección de indicaciones geográficas. Las delegaciones partidarias de la extensión no desean alterar ese equilibrio.

175. Por último, dice que podría seguir hablando sobre muchas otras cuestiones relacionadas con el debate del Consejo pero que, por falta de tiempo, se abstendrá de hacerlo. Sin embargo, añade que es preciso hallar una solución a esa falta de tiempo, a fin de que los Miembros puedan llevar a cabo la tarea que les aguarda, particularmente en lo que respecta a las cuestiones jurídicas, de las que dependen las restantes cuestiones. Una posibilidad sería programar una reunión intermedia del Consejo antes de la reunión ordinaria de noviembre.

176. El representante de Malta dice que apoya plenamente la propuesta de la delegación suiza de celebrar, antes de la reunión de noviembre, una reunión adicional del Consejo de los ADPIC dedicada a la cuestión de la extensión. Ello permitiría que los debates se reflejasen en el informe del Consejo al

CNC que los Miembros adoptarán en la reunión de noviembre. El representante considera que no existen limitaciones de procedimiento que impidan la organización de tal reunión.

177. El representante de los Estados Unidos da las gracias a Guatemala por su presentación del documento IP/C/W/360, que su delegación se complace en patrocinar con otros varios Miembros de la OMC, tanto países desarrollados como en desarrollo. Los conceptos expresados en ese documento siguen gozando de un amplio y creciente apoyo. El representante hace suyos varios comentarios del Canadá, Nueva Zelandia y otros patrocinadores del documento.

178. En relación con las cuestiones jurídicas, los Estados Unidos han observado que algunos Miembros que figuran entre los solicitantes en esta materia no proporcionan protección a los nacionales de otros países miembros de la OMC en régimen de trato nacional. Por lo tanto, ha sido interesante oír, en un momento anterior de la presente reunión, la peculiar definición de trato nacional de las indicaciones geográficas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC dada al Consejo por un Miembro. A ese respecto, procede preguntar si todos los Miembros han apreciado plena y exactamente el verdadero significado de la definición ofrecida por ese Miembro para el debate del Consejo. Se trata de una pregunta importante, ya que, al analizar el verdadero significado de tal definición, podría llegarse a la conclusión de que es mucho más importante para determinar si la extensión reportaría o no beneficios que para establecer si los nombres de países pueden considerarse indicaciones geográficas o aclarar algunas de las otras cuestiones examinadas por el Consejo. La definición de las Comunidades Europeas, al menos según la entiende el representante, afirma que, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, el trato nacional se dispensaría a los nacionales de otros Miembros de la OMC, pero no a los productos. Eso significa que un Miembro de la OMC tendría en las Comunidades Europeas la oportunidad de obtener protección si deseara registrar una indicación geográfica europea. Sin embargo, no cree que sean muchos los Miembros que tengan previsto basar una actividad comercial en el registro de indicaciones geográficas europeas. De hecho, siempre ha pensado que lo que cada Miembro ha negociado en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC es la protección de sus propias indicaciones geográficas. Por consiguiente, considera que esa interpretación es muy sorprendente, y cree que la interpretación correcta sería la que incorporase la idea de que todos los Miembros prevén que sus propias indicaciones geográficas puedan tener protección en régimen de trato nacional en los territorios de los demás Miembros de la OMC. Y si tal no fuese el caso, el representante sería incapaz de imaginar por qué alguien tendría interés en participar en la extensión de la protección con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC.

179. El representante del Brasil, en respuesta a la referencia de las Comunidades Europeas a la legislación de su país, dice que si las CE hubiesen tenido en cuenta la intervención de su delegación durante la anterior reunión del Consejo y la exposición de las leyes brasileñas durante el examen de su legislación sobre propiedad intelectual, no habrían necesitado recurrir a las autoridades nacionales brasileñas en materia de propiedad intelectual para obtener la misma información. El hecho de que sus leyes contengan disposiciones que excedan de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC no debería interpretarse como conformidad con una propuesta formulada en el Consejo para aumentar los niveles de protección previstos en el Acuerdo. A ese respecto, el representante comparte plenamente los argumentos de Australia y la Argentina. Otra importante cuestión planteada por las Comunidades Europeas es la relativa al equilibrio. Las Comunidades Europeas han señalado que, hasta ahora, el Brasil sólo tiene una indicación geográfica protegida, denominada "*Cachaça*", mientras que las Comunidades Europeas tienen un par de registros y solicitudes de indicaciones geográficas. En su opinión, eso no demuestra en modo alguno que la situación esté "equilibrada". El representante cree que una mejor forma de determinar si existe equilibrio entre los Miembros sería analizar el número de indicaciones geográficas actualmente protegidas en el propio país. Al tiempo que señala que el número actual de indicaciones geográficas brasileñas protegidas en el Brasil es exactamente una, expresa su deseo de conocer cuántas indicaciones geográficas protegen las Comunidades Europeas en sus Estados miembros, ya que ello le permitiría tener una idea más clara del equilibrio en lo que respecta al potencial interés de extender la protección de las indicaciones geográficas. Añade que el

equilibrio guarda también relación con el nivel de experiencia de los Miembros en la protección de sus indicaciones geográficas. En el caso del Brasil, la única indicación geográfica protegida hasta ahora no se registró hasta diciembre de 2001. Está fuera de duda que el gran número de indicaciones geográficas protegidas en los Estados miembros de las CE y en otros países con más experiencia se han beneficiado de un período de protección más largo. Por consiguiente, el Brasil cree que sería importante tener en cuenta la experiencia de los países en este ámbito.

180. En cuanto a la referencia de Hungría a la propuesta de su delegación de basar los debates del Consejo en datos empíricos, el representante cree que no debería ser difícil poner algunos ejemplos de experiencias nacionales que resultasen verdaderamente útiles a los partidarios de la extensión. En ese sentido, le ha sorprendido la reacción de uno de los proponentes respecto a la aportación de datos objetivos sobre las ventajas de la extensión. Hungría ha mencionado también la relación entre las patentes y las indicaciones geográficas y, si el representante ha entendido bien, su tesis es que no existen estudios empíricos sobre las ventajas de la protección de los productos farmacéuticos mediante patentes. Si así fuese, cuando el Brasil propone que se lleve a cabo un ejercicio basado en datos fácticos, éste es precisamente el tipo de desequilibrio que trata de evitar para que no se reproduzcan desequilibrios como los ya existentes en el ámbito de la protección mediante patentes. Por lo tanto, el Brasil cree que se ha criticado el Acuerdo sobre los ADPIC en gran medida debido a la falta de datos sobre los beneficios potenciales que todos los Miembros podrían obtener con la introducción de una protección mediante patentes o mediante indicaciones geográficas. Por consiguiente, el Brasil trata de evitar precisamente que se adopte una decisión de ese tipo sin conocimiento de causa, y su delegación no cree que sea difícil introducir datos empíricos en los debates del Consejo.

181. El representante de las Comunidades Europeas estima que el Consejo debería centrarse en las cuestiones de fondo relacionadas con su mandato y no en otros asuntos que no guardan relación con ese mandato. Coincide con las delegaciones que han propuesto que se celebre una reunión adicional antes de la próxima reunión formal del Consejo.

182. El representante del Paraguay dice que quizás el representante de las Comunidades Europeas debería ceñirse a las cuestiones de fondo y no referirse a la legislación de otros países, que no tiene nada que ver con el tema tratado. En el artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece que los Miembros podrán prever en su legislación una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo. Eso no significa que los Miembros estén obligados a adoptar a nivel internacional una protección mayor que la establecida en el Acuerdo, ni que hayan convenido en ampliar las obligaciones adquiridas en virtud del mismo. Coincide con el representante de la Argentina en que no existe mandato de negociar. Lo que existe es una indicación de la Conferencia Ministerial de Doha al Consejo para que delibere y, al final de 2002, su Presidente informe al CNC sobre los temas examinados y las conclusiones alcanzadas.

183. La naturaleza de los derechos de propiedad intelectual se basa en la protección de los conocimientos. Ese enfoque ha dado lugar, mediante negociaciones celebradas en otros marcos, tales como la OMPI, no sólo a la protección de los conocimientos, sino también a la atribución de una ubicación geográfica al lugar en que las personas aplican ese conocimiento a la obtención de un producto. Ésa es la razón por la que se ofrece una protección adicional: la protección mediante indicaciones geográficas. Lo que no significa que en este foro deban continuarse socavándose los conceptos básicos y la naturaleza de la protección de la propiedad intelectual. Como ha indicado otro Miembro, al final otorgarán protección al producto antes que a los conocimientos; la protección de la propiedad intelectual no consiste en eso. Su delegación, que es patrocinadora del documento IP/C/W/360, cree que la extensión de la protección adicional prevista en el artículo 23 a otros productos no es una opción válida. La capacidad para legislar y aplicar las leyes es una prerrogativa del Estado, y existe un marco territorial en el que un país puede aplicar esas leyes y reglamentos. A juicio de su delegación, algunos países tratan de extraterritorializar sus leyes y reglamentos. El

Paraguay aplica los suyos, así como los acuerdos internacionales que ha firmado y ratificado, dentro de sus fronteras. Gracias al hecho de que el Paraguay aplica cabalmente las normas que ha suscrito, su país no ha tenido aún casos de solución de diferencias.

184. El representante de México considera que la Lista recapitulativa es un medio creativo y útil para dar una nueva dinámica a un debate que, francamente, da vueltas sobre sí mismo. En general, México apoya el documento IP/C/W/360, presentado por Guatemala y otros países. Su delegación cree que es un documento útil e ilustrativo del debate que celebra el Consejo. En su opinión, el desequilibrio entre los Miembros en materia de indicaciones geográficas es muy acusado, tanto en términos de valor como de volumen o prestigio. Su delegación considera difícil determinar por qué es necesario modificar el Acuerdo sobre los ADPIC para extender la protección del artículo 23 y en qué consisten los beneficios potenciales de esa extensión, debido, entre otras razones, a la protección general que ofrece el artículo 22.

185. El representante de Bulgaria, en respuesta a las delegaciones que han afirmado que la presentación de propuestas a favor de la extensión es "ambiciosa" o "extremadamente ambiciosa", dice que el Consejo no habrá cumplido el mandato establecido en el párrafo 12 de la Declaración de Doha si no llega a una solución de fondo para esta cuestión, lo que repercutirá en la posición de Bulgaria sobre otros temas. Su delegación piensa que determinadas propuestas formuladas en otros ámbitos son extremadamente ambiciosas, por lo que no debe malinterpretarse su posición en otras esferas de estas negociaciones.

186. El representante de Túnez apoya la propuesta de organizar una reunión adicional con miras a lograr una solución mutuamente aceptable que permita al Consejo corregir el desequilibrio actual respecto de la protección de las indicaciones geográficas.

187. El representante de la Argentina dice que el párrafo 12 de la Declaración de Doha se refiere al cumplimiento de los compromisos formulados. Al no haberse formulado compromisos, no puede haber cumplimiento. Por consiguiente, en ningún documento dimanante de la reunión de Doha existe el compromiso de negociar la extensión de la materia que se está examinando.

188. El Presidente expresa su agradecimiento a los Miembros por haber hecho posible el fructífero debate del Consejo sobre este tema, que es suficientemente complejo para requerir mucho más tiempo. El Presidente sabe que algunas delegaciones habrían querido intervenir de nuevo, mientras que otras, aunque lo habrían deseado, aún no han podido hacer uso de la palabra. Por ello, agradece su comprensión y propone que el Consejo mantenga otra reunión informal abierta a todas las delegaciones. El principal objetivo de la reunión sería finalizar los debates de la primera sección sobre temas jurídicos y comenzar a debatir las secciones segunda y tercera. Asimismo, pide a la Secretaría que ayude al Consejo mediante la elaboración de una recopilación temática relativa a la primera sección y basada en los asuntos debatidos por el Consejo en la presente reunión, a fin de que todos los Miembros puedan tener información fáctica de los debates de la presente reunión sobre el primer tema. El objetivo sería poner a disposición del Consejo un documento con toda la información relativa a los debates de la presente reunión, organizada por temas y en que se resumiesen las posiciones adoptadas por las delegaciones durante el actual debate de los temas jurídicos.

189. El representante de Marruecos es partidario de celebrar otra reunión y está de acuerdo en que se prepare una recopilación de cuestiones. Tal documento debería comprender no sólo las intervenciones orales, sino también todos los textos y comunicaciones presentados en relación con esas cuestiones, en particular con las jurídicas. También sería importante hacer lo mismo en relación con las otras dos categorías de cuestiones de la Lista recapitulativa.

190. La representante del Canadá dice que el presente debate ha dejado muy claro que el Consejo tiene, sin duda, más trabajo que hacer. La representante piensa que el único tema común sobre el que

se ha hablado a lo largo del día es el relativo a la importancia que la labor de otros foros tiene para todo el proceso, y se pregunta si no convendría tal vez aplazar la reunión posterior a la reunión del Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, en caso de que el Consejo decida celebrarla, hasta que esa labor esté ultimada, ya que podría ser importante para los debates.

191. El representante de la Argentina considera que el Consejo podría esperar antes de tomar una decisión, particularmente en lo que respecta a una fecha concreta, hasta el final de la sesión. El representante de Suiza dice que es importante fijar la fecha, y apoya la propuesta de Marruecos de que, en la recopilación temática, se tengan también en cuenta las comunicaciones escritas. El representante de los Estados Unidos pide tiempo para examinar la propuesta. El representante de la República Checa dice que se congratula por ambas propuestas y apoya la sugerencia de Marruecos de incluir también en el resumen las propuestas escritas en que se reflejan ambas posiciones.

192. La representante de Sri Lanka está de acuerdo en pedir a la Secretaría que prepare una recopilación. Si el Consejo no tiene en cuenta las comunicaciones anteriores ni las intervenciones verbales realizadas, es posible que el documento no refleje la verdadera situación de las cuestiones examinadas. Por consiguiente, pide que en el documento que elabore la Secretaría tengan cabida tanto las comunicaciones verbales como las escritas.

193. Tras la celebración de consultas sobre el tema, el Presidente propone al Consejo que celebre una reunión informal el lunes 10 de noviembre para continuar el presente debate. También propone que se pida a la Secretaría que elabore, antes de la próxima reunión formal del Consejo, una recopilación de los elementos contenidos en las declaraciones verbales de la presente reunión y en las comunicaciones escritas preparadas para ella, incluidas las observaciones formuladas en la próxima reunión informal, en relación con el primer "grupo de cuestiones".

194. El Consejo así lo acuerda.

E. EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL APARTADO B) DEL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 27

195. El Presidente informa al Consejo de que, como se acordó en la reunión de junio de 2002, la Secretaría ya ha distribuido la información que figura en notas informales, JOB(02)59, 58 y 60 sobre el examen de las disposiciones del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27, la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore, como documentos de trabajo IP/C/W/369, IPC/W/368 e IPC/W/370, respectivamente. Recuerda que el Consejo ha invitado a la OMPI, la UNCTAD, la FAO, el Banco Mundial, el GICAI, el CDB, el PNUMA y la UPOV a que faciliten información actualizada sobre sus actividades con respecto a los puntos E, F y G del orden del día. Desde su reunión de junio, el Consejo ha recibido información del Banco Mundial (distribuida ulteriormente con la signature IP/C/W/347/Add.4), además de la información procedente de la FAO, el CDB, la UNCTAD y la UPOV, que ya se había recibido con anterioridad a la reunión de junio (documentos IP/C/W/347 y addenda 1 a 3, respectivamente). Además, el orador recuerda que en la reunión de marzo de 2002 se instó a los Miembros a facilitar para junio de 2002 respuestas al cuestionario sobre la aplicación del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27. También se pidió a la Secretaría que actualizara el documento IP/C/W/273 sobre la base de las respuestas que se recibieran de los Miembros. A este efecto, el 26 de marzo de 2002 la Secretaría distribuyó un recordatorio, que contiene el aerograma WTO/AIR/1756, para facilitar esta información. Desde entonces, la Secretaría ha recibido respuestas adicionales de Estonia, Hong Kong, China, Lituania y Tailandia, que figuran en los documentos IP/C/W/125/Add.20, 22, 23 y 21, respectivamente, y un suplemento de la República Checa, distribuido con la signature IP/C/W/125/Add.8/Suppl.1. La Secretaría actualizará el cuadro sinóptico en su nota resumida como se lo pidió el Consejo a la luz de estas nuevas comunicaciones. Además, el Presidente informa al Consejo de la comunicación que se acaba de recibir de las CE y sus Estados miembros sobre el examen del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27, la relación entre el Acuerdo

sobre los ADPIC y el CDB y la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore (distribuida seguidamente con la signatura IP/C/W/383).

196. El representante de las Comunidades Europeas dice que el documento IP/C/W/383 trata en una comunicación de los tres temas del orden del día, a saber, E, F y G, y que, al preparar el documento las CE han examinado el acta de la reunión del Consejo de los ADPIC y los documentos presentados durante estos últimos años. Las CE creen que con esta comunicación aportarán una contribución positiva y constructiva al mandato establecido en el párrafo 19 de la Declaración de Doha, que encomienda al Consejo de los ADPIC que continúe el examen del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 y que examine la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore y otros nuevos acontecimientos pertinentes. El orador cree que si todos los Miembros del Consejo de los ADPIC adoptan una posición flexible y no dogmática y se muestran francamente dispuestos a analizar medidas razonables, el Consejo podrá examinar con nuevos ojos todas estas cuestiones en un plazo relativamente breve. Dice estar convencido de que se pueden encontrar soluciones que reflejen genuinamente las preocupaciones de los países en desarrollo y que al mismo tiempo no afecten ni a la sustancia ni al equilibrio de derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. Es importante que los Miembros creen un entorno de la propiedad intelectual que sea favorable a la investigación en el campo de la biotecnología.

197. El representante de Zimbabwe recuerda la intervención de su delegación en la última reunión formal del Consejo de los ADPIC, celebrada en junio de 2002, y reitera que a su parecer hay muchos elementos comunes en el debate de la presente cuestión y cree que es posible que el Consejo de los ADPIC adopte una decisión que recoja aspectos donde hay acuerdo, de manera que los Miembros puedan concentrarse en otros donde no lo hay. Uno de éstos parece ser la necesidad misma de contar con definiciones para dar un significado preciso a determinados términos del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27, como los de microorganismo, procedimientos no biológicos y procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales. En su documento conceptual sobre esta cuestión, las CE han consagrado nueve o 10 párrafos a exponer razones por las que no creen que sea una buena idea embarcarse en la formulación de las definiciones. Entre las razones dadas en contra de buscar un entendimiento común de estos términos se encuentran las dificultades para hacer que todos los Miembros de la OMC se pongan de acuerdo sobre las definiciones; que el foro adecuado para ponerse de acuerdo sobre definiciones de cuestiones técnicas es la OMPI y no el Consejo de los ADPIC y que las definiciones pueden comprometer la flexibilidad de los Miembros para utilizar e interpretar los términos que el Consejo trata de definir. En su opinión, la dificultad de hacer que todos los Miembros de la OMC se pongan de acuerdo en las definiciones no debería disuadir al Consejo de embarcarse en el ejercicio de hallar definiciones precisas para determinados términos. Añade que es consciente de que los Miembros de la OMC parecen tener dificultades para ponerse de acuerdo en algunas cuestiones, y no sólo sobre las definiciones, pero en el pasado esto no ha impedido que los Miembros de la OMC afrontaran cuestiones difíciles, ni debería tampoco impedirselo ahora.

198. Continúa diciendo que, en aparente reconocimiento de la importancia de dar un significado preciso a los términos del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27, las CE han señalado en el párrafo 21 de su documento, en relación con los microorganismos, que la definición de su alcance en el plano nacional es importante, dado que los microorganismos se utilizan ampliamente en las industrias farmacéutica, química o biotecnológica, y son la única forma de organismo vivo respecto de la cual los Miembros de la OMC están obligados a otorgar protección mediante patente. Zimbabwe no está convencido de que, siendo necesario en el plano nacional dar un significado preciso al término "microorganismo", no lo sea en el plano internacional.

199. Zimbabwe tampoco está convencido de que la OMPI sea el foro idóneo para ponerse de acuerdo en definiciones de términos técnicos simplemente porque, como afirman las CE, la OMPI

disponga de más personal experto sobre esta cuestión técnica específica. Su delegación no ve razón alguna para que, si realmente ése es el caso, el Consejo de los ADPIC no pueda recurrir a los servicios de esos mismos expertos para que le ayuden a llegar a definiciones concretas. Se pregunta por qué las CE parecen pensar que sería más fácil ponerse de acuerdo sobre las definiciones en la OMPI cuando los propios Miembros de la OMC repiten más o menos su representación en la OMPI. Los Miembros que, como Zimbabwe, son partidarios de contar con definiciones precisas no tienen la intención de disminuir ni menoscabar las flexibilidades que los Miembros pudieran estimar que tienen con respecto a los significados que en la actualidad atribuyen a cualquiera de esos términos, temor éste que exponen las CE en su documento. El orador cree que se podría llegar a significados concretos y al mismo tiempo preservar flexibilidades razonables, y que definir los términos del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 es necesario y se puede hacer si todos los Miembros se emplean en reflexionar al respecto.

200. El representante de las Comunidades Europeas recalca que su delegación ha tratado de analizar de manera general todas las cuestiones que se han tocado en estos últimos años. En su opinión, es necesario cierto grado de realismo si los Miembros desean avanzar en algunas de las cuestiones en un plazo razonable. En su opinión, los Miembros deben actuar selectivamente al decidir las cuestiones en que deben concentrarse en el Consejo de los ADPIC. A la luz de la experiencia de la labor emprendida en muchas esferas en la OMPI, cree que esta Organización es el mejor foro para abordar el ejercicio relativo a las definiciones de términos muy técnicos y, por tanto, no está convencido de que el Consejo de los ADPIC pueda emprender con provecho tal ejercicio. Cree que todos los Miembros tienen algún interés por mantener su flexibilidad en esta y otras esferas del Acuerdo sobre los ADPIC. A cada país incumbe decidir si es necesario examinar la patentabilidad y poner en práctica las definiciones a las que las CE se han referido. Convendría tenerlo presente cuando los Miembros reflexionen acerca del tipo de seguimiento que desean dar a esta cuestión en particular.

201. La representante de China dice que su delegación entiende que el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC preserva los derechos de los Miembros a decidir si excluyen o no los vegetales y los animales de la patentabilidad a la luz de sus necesidades e intereses nacionales concretos. De conformidad con dicho apartado, se podrán excluir de la patentabilidad las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. No obstante, como no existe definición de los términos "microorganismo", "procedimiento no biológico" o "procedimientos microbiológicos" ni en el Acuerdo sobre los ADPIC ni en otros foros internacionales, es difícil que los Miembros alcancen un mayor consenso con respecto a la protección de invenciones relacionadas con la biotecnología. Además, con el rápido desarrollo de la industria de la biotecnología se ha debatido mucho con respecto a la patentabilidad de los genes de animales, plantas, seres humanos o materiales genéticos en general o a las razones para otorgarles protección de patentes, o con respecto a los motivos para otorgar patentes a especies de vegetales o animales transgénicos. Se han expresado preocupaciones particulares acerca de si el otorgamiento de patentes a tales invenciones es contrario al orden público o la moralidad. En lo que respecta a China, como en algunos casos el material biológico está constituido también por sustancias químicas, se pueden conceder patentes para la protección de microorganismos y genes, a condición de que esas invenciones reúnan los requisitos de patentabilidad previstos en la legislación china en materia de patentes, y siempre que su explotación comercial no sea contraria al orden público y la moralidad. En conclusión, como el Acuerdo sobre los ADPIC encomienda el examen del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 su delegación espera seguir cooperando en el Consejo de los ADPIC para impulsar las consultas y los debates en este campo particular, tomando en consideración las disposiciones pertinentes del CDB y la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore. China cumplirá su obligación a fin de contribuir a los esfuerzos del Consejo de los ADPIC encaminados a proporcionar una protección eficaz a las invenciones en el campo de las obtenciones vegetales y las razas animales y en general a las invenciones relacionadas con la biotecnología.

202. La representante de Malasia cree que no hay un conflicto inherente entre las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB. El primero es un acuerdo que promueve la protección de los derechos de propiedad intelectual, mientras que el CDB reconoce que los propietarios de los recursos genéticos también deberían beneficiarse de la utilización de estos recursos. Si acaso hay algún conflicto, se debe al hecho de que la mayoría de los recursos genéticos se encuentran en el mundo en desarrollo, mientras que la tecnologías para desarrollarlos no están dentro de su dominio. El Acuerdo sobre los ADPIC puede ofrecer el puente que salve esta separación proporcionando un medio multilateral que permita a los titulares de los derechos de los recursos genéticos acceder a la participación en los beneficios. No obstante, el propio Acuerdo sobre los ADPIC puede utilizarse para fomentar la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de la tecnología. Debe intensificarse la cooperación entre los propietarios de la tecnología y los de los recursos genéticos para que creen conjuntamente nuevos productos de manera que los beneficios de la propiedad de los recursos genéticos trasciendan la simple distribución de los beneficios. Análogamente la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore también fomenta la utilización de los recursos genéticos, lo que también debería aportar beneficios a sus propietarios. Algunos Miembros han creado sus propios modelos de protección mientras que otros están en vías de hacerlo, como se deduce de las experiencias de Australia, la India y el Perú que se han dado a conocer en el Consejo. Malasia se felicita de la aportación de más ideas acerca de la manera en que la legislación de los Miembros trata estas cuestiones en el plano nacional, pues ello será útil para las futuras deliberaciones en el Consejo. Éste puede necesitar algún tiempo para alcanzar un consenso acerca de la manera de proceder con respecto a las cuestiones que suscita el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27, la relación con el CDB y los conocimientos tradicionales y el folclore pero, mientras tanto, los Miembros de la OMC deberían seguir debatiendo el modo de que los Miembros comprendan mejor los vínculos entre el desarrollo, el Acuerdo sobre los ADPIC y la protección de los recursos genéticos, las definiciones y los criterios de patentabilidad y los instrumentos que podrían utilizarse para fomentar la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología y otros acontecimientos que puedan contribuir a la protección de los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y el folclore.

203. El representante de Egipto dice que su delegación conviene en que parece no haber conflicto entre los dos Acuerdos desde el punto de vista jurídico pero, a título preliminar, dice que los derechos de propiedad intelectual están relacionados con la aplicación de los objetivos del CDB y tienen consecuencias para esa aplicación. El CDB ratifica los derechos soberanos de las naciones sobre sus recursos nacionales y el derecho a determinar el acceso a estos recursos, con el fin de facilitar su utilización sostenible, sobre la base del consentimiento fundamentado previo y los términos mutuamente acordados que prevén la distribución justa y equitativa de beneficios. Conservar la biodiversidad y lograr estos objetivos del CDB no es completamente posible bajo un régimen de derechos de monopolio privado que se deriva del Acuerdo sobre los ADPIC porque los regímenes de propiedad privada socavarían las disposiciones del CDB en materia de acceso y de distribución de beneficios. Deben abordarse estas incongruencias con el fin de que los países signatarios puedan satisfacer los requisitos necesarios para cumplir ambos Acuerdos como se ha reconocido en la Declaración de Doha. Para lograr esta congruencia habrá que centrarse en cómo podría ser necesario modificar las normas de propiedad intelectual a fin de que aporten ayuda para acceder a los recursos genéticos y permitir la distribución de beneficios.

204. Recuerda que durante la última reunión del Consejo de los ADPIC un grupo de países en desarrollo presentó una comunicación en la que requerían que el solicitante de una patente divulgara el origen de los recursos genéticos y facilitara pruebas de consentimiento fundamentado previo. Su delegación cree que este requisito aumentará la transparencia y contribuirá a asegurar la eficacia de las disposiciones sobre distribución de beneficios. Dice que estos beneficios podrían adoptar diversas formas, incluida la transferencia de tecnología. A este respecto, el CDB trata de la importancia de los derechos de propiedad intelectual para los países desarrollados y exhorta a satisfacer las demandas de los países en desarrollo de facilitar el acceso a la tecnología. Esto último podría materializarse continuando la investigación científica basada en los recursos genéticos, con la plena participación de

los países que suministran su material genético y, al mismo tiempo, asegurando el acceso a las tecnologías en condiciones justas y favorables. La función cada vez mayor de la biotecnología en el desarrollo y su contribución a la mejora de la salud, la seguridad alimentaria y otros aspectos brindan una oportunidad para la coordinación entre los países que son ricos en recursos biológicos pero carecen de tecnología, por un lado, y los que poseen la tecnología para utilizar estos recursos, por otro, con el fin de colmar las necesidades de desarrollo sostenible.

205. El representante del Brasil recuerda el documento distribuido por un grupo de países en desarrollo sobre la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB y profundiza en la propuesta planteada para modificar el Acuerdo sobre los ADPIC con el fin de incorporar los requisitos de divulgación de la fuente del material genético utilizado en la invención. Dice que ésta va a ser una de las cuestiones prioritarias que el Consejo de los ADPIC incluirá en el informe del Presidente al Comité de Negociaciones Comerciales, e insta a que se inicien los procedimientos necesarios con el fin de preparar ese informe. Recuerda que la reciente Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo, publicó un plan de aplicación cuyo párrafo 42 afirma con claridad que han de contraerse compromisos para dar efecto a la distribución de beneficios con el consentimiento previo y la participación de las comunidades en posesión de los conocimientos tradicionales. El plan prevé negociaciones, en el marco del CDB, sobre un régimen internacional para promover y proteger la distribución justa y equitativa de beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos. El Brasil cree que es tanto más importante para el Consejo de los ADPIC incorporar los elementos sugeridos por los países en desarrollo al Acuerdo sobre los ADPIC, ya que, de otro modo, podría comprometer todo progreso en el CDB en materia de distribución de beneficios debido a los posibles conflictos derivados de su relación con el Acuerdo sobre los ADPIC. El orador conviene con otras muchas delegaciones, incluida la de Egipto, en que, en principio, el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB deberían apoyarse mutuamente y que el Consejo debería adoptar medidas apropiadas para impedir cualquier conflicto entre estos dos Acuerdos. Añade que cualquier fracaso en conseguir un mecanismo satisfactorio que asegure la complementariedad entre estos dos instrumentos irá en detrimento de ambos Acuerdos.

206. Con respecto al documento distribuido por las CE, pide que se le aclare si el requisito de demostrar la distribución de beneficios en la utilización de la invención y las pruebas de consentimiento fundamentado forman parte de los requisitos establecidos en los procedimientos relativos a patentes. Cree que la distribución de beneficios y el consentimiento fundamentado previo son elementos esenciales del CDB y que, si faltan esos dos requisitos, persistirá la diferencia principal entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB. También pregunta a las CE cuáles serían las consecuencias jurídicas del incumplimiento y pide que se aclaren más los aspectos que quedan fuera del ámbito del derecho de patentes.

207. En cuanto a los conocimientos tradicionales y a la función de la OMPI, dice que el Brasil ha participado activamente en el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore y no está de acuerdo con las CE en que el Consejo de los ADPIC no sea el lugar idóneo para negociar un régimen de protección para un nuevo asunto de la complejidad de los conocimientos tradicionales o el folclore. Este asunto debe debatirse tanto en la OMC como en la OMPI, en lo que corresponda al mandato de cada cual, así como en el CDB y en la FAO, en la medida que corresponda a la contribución que pueda aportar cada organización.

208. Con respecto a los sistemas eficaces *sui generis* para proteger las obtenciones vegetales, el Brasil conviene con las CE en que el Convenio de la UPOV satisface el criterio de eficacia del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 y que también otros modelos podrían ser eficaces, por lo que la UPOV no es el único modelo a seguir. El orador se felicita del enfoque flexible dado por las CE a los derechos del agricultor y las exenciones del agricultor y conviene en que éstos pueden justificarse en el marco del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 o en el del artículo 30 del Acuerdo sobre los

ADPIC. En su opinión, es importante hacer ver la amplitud del alcance del artículo 30. Por último, con respecto a la definición de microorganismos, el Brasil cree que un elemento importante a tener presente en este debate es que no deben ser patentables los microorganismos tal como se encuentran en la naturaleza. En otras palabras, la purificación o el aislamiento de microorganismos no debe equivaler a materia patentable.

209. El representante de los Estados Unidos dice que, como bien saben los Miembros del Consejo de los ADPIC, su delegación opina que el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 brinda una considerable flexibilidad a los Miembros de la OMC al permitir la excepción al mandato del párrafo 1 del artículo 27 de que puedan obtenerse patentes por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que se satisfagan los criterios de patentabilidad. Los distintos Miembros son libres de excluir de la patentabilidad las plantas y animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales. De igual modo, los Miembros son libres de otorgar protección mediante patente a tal materia, y así lo hacen los Estados Unidos, siempre que las invenciones sean nuevas, útiles y no evidentes. Los Estados Unidos acreditan ese nivel de protección con el consiguiente desarrollo de su sólida industria biotecnológica. El Miembro que opte por acogerse a la exención que permite el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 debe cerciorarse de que, obrar así, puede seguir obteniendo protección para los microorganismos y para los procedimientos no biológicos y microbiológicos que satisfagan los criterios de patentabilidad.

210. Los Estados Unidos convienen con la afirmación de las CE de que tratar de definir términos como el de microorganismos en el Consejo de los ADPIC no es la mejor manera de avanzar. En este campo, la tecnología adelanta tan rápidamente que, aun cuando los Miembros fueran capaces de ponerse de acuerdo sobre una definición, lo más probable es que pronto quedara desfasada. En la actualidad los expertos en patentes no llega a un consenso sobre una definición de microorganismo a los efectos de patente y, además, como éste es un tema sumamente técnico, si hubiera que trabajar para elaborar tal definición el foro más apropiado sería el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes de la OMPI. El apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 prescribe que todo Miembro que opte por no otorgar protección a las obtenciones vegetales en virtud de su legislación sobre patentes ofrezca un sistema eficaz *sui generis* para la protección de dichas obtenciones. No obstante, los Miembros son libres de hacer ambas cosas, al igual que los Estados Unidos, que creen que las normas que proporciona el UPOV de 1991 son apropiadas para un sistema eficaz *sui generis* de protección de nuevas obtenciones vegetales. La adhesión a tales normas contribuirá a dar al sistema internacional de protección de obtenciones vegetales en el mundo más uniformidad, la ausencia de la cual puede reducir el acceso de los pequeños fitogenetistas y de los botánicos a los mercados porque llevará más tiempo y costará más obtener y mantener la protección en otros mercados. Reitera que si pueden crearse otros sistemas que sean igualmente eficaces, los Estados Unidos animarán ciertamente a los Miembros a que estudien también la utilización de esos otros sistemas. Los Estados Unidos creen que la UPOV es un mecanismo existente que proporciona el tipo de uniformidad que facilitará el comercio en esta esfera.

211. Su delegación cree firmemente que los sistemas de patentes proporcionan un incentivo a los empresarios más aptos y más brillantes del mundo para invertir en investigación y desarrollo de productos y procedimientos que mejoran la vida. Como ha señalado su delegación en un documento anterior, los incentivos proporcionados durante los dos últimos decenios por el sistema de patentes han producido un sinnúmero de invenciones en biotecnología agrícola que han mejorado los rendimientos de los cultivos y reducido el grado de dependencia de pesticidas y herbicidas químicos, mejorando el nivel nutricional de los alimentos. Por el lado de la biotecnología farmacéutica, en los últimos años se han creado cientos de instrumentos precisos para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y otras afecciones físicas, y todavía hay más anunciados. Una búsqueda en la base de datos de patentes del tipo de las otorgadas y solicitadas en los Estados Unidos ha puesto de relieve que no son sólo los países desarrollados los que buscan proteger mediante patentes las invenciones biotecnológicas. Por

ejemplo, el 3 de septiembre de 2002 se otorgó una patente a una entidad del Brasil para el método de producir un virus recombinado de la anemia. El 15 de mayo de 2001 se otorgó una patente a un instituto de investigación de Egipto, junto con la Universidad de Wyoming, para una forma particular de bacteria. Análogamente, al Consejo de Investigación Científica e Industrial de la India le fue otorgada una patente para una bacteria que produce un inhibidor de la proteasa, y se podrían mencionar otros muchos ejemplos parecidos. El orador dice que impedir la protección mediante patente de plantas y animales y de microorganismos no redundará en interés de ningún Miembro y que los Estados Unidos ponen mucho celo en conservar siempre tales patentes en el marco de su legislación. Cree que estos ejemplos, y otros que podrían encontrarse, demuestran que en muchos países en desarrollo existe un notable potencial para un sólido sector de producción de la biotecnología. A este respecto, insta a todos los Miembros a que estudien a fondo los beneficios de la concesión de patentes en esta esfera.

212. El representante de las Comunidades Europeas dice que, de conformidad con el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27, los países Miembros tendrán que proceder a la protección de obtenciones vegetales mediante patentes, un eficaz sistema *sui generis* o una combinación de ambos procedimientos. Dice que esa disposición no da más orientación acerca de lo que ha de entenderse por un eficaz sistema *sui generis* y que la falta de una definición significa que los Miembros disponen de un grado considerable de flexibilidad para determinar cómo debe satisfacer su legislación el criterio de eficacia y para diseñar un régimen de protección que sea apropiado a sus situaciones nacionales específicas. Un creciente número de Miembros de la OMC ha firmado el Convenio de la UPOV, que en su opinión es un modelo eficaz, flexible y ampliamente reconocido para la protección de obtenciones vegetales, dado que lo han suscrito 50 países o más. Ahora bien, aun cuando debería considerarse que el UPOV de 1978 y de 1991 satisfacen el criterio de eficacia del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, estos convenios, como se afirma explícitamente en su comunicación, no tienen por qué ser los únicos sistemas eficaces *sui generis* válidos para la protección de obtenciones vegetales, ya que pueden existir otros modelos. No obstante, para ser eficaz, todo régimen de protección de obtenciones vegetales debe responder a un determinado número de criterios, como se ha afirmado en su comunicación.

213. Respecto de los "derechos del agricultor" y las "exenciones al agricultor", el orador aclara que los primeros son un conjunto de medidas que reconocen la función ancestral del agricultor en la creación de variedades de cultivos alimentarios y en la preservación de la biodiversidad, como se establece en el artículo 9 del nuevo Tratado internacional de la FAO sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y que las "exenciones al agricultor", por otro lado, son excepciones de los derechos o patentes de obtenciones vegetales que permiten a los agricultores conservar, utilizar para su ulterior multiplicación, intercambiar o vender semillas de variedades protegidas de plantas. Por ejemplo, tanto los reglamentos de las CE sobre la protección de las obtenciones vegetales como la Directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas contienen la cláusula del denominado "privilegio del agricultor" que se aplica a los principales cultivos alimentarios, que permiten a los pequeños agricultores utilizar libremente semillas protegidas para su ulterior multiplicación en sus propias fincas. Los agricultores con explotaciones pequeñas deben pagar una remuneración equitativa apreciablemente inferior que la que deben satisfacer los grandes agricultores, a los que se aplican condiciones normales. Su delegación considera que la exención al agricultor se puede justificar en el marco del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC como excepción a la protección del derecho sobre obtenciones vegetales, o en el marco del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, en tanto que excepción a la protección mediante patente de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, según el caso. No obstante, de la comunicación de las CE no debe deducirse que el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC permite amplias excepciones.

214. Por último, dice que, en muchos países menos adelantados o países en desarrollo, la totalidad o parte de la actividad agrícola se realiza en pequeñas explotaciones de subsistencia y que todas las

actividades comerciales de los agricultores son de un alcance geográfico limitado. En estas situaciones, su delegación opina que tales países Miembros en desarrollo bien podrían crear, en su legislación nacional, una exención al agricultor más amplia en beneficio de los agricultores de subsistencia o los pequeños agricultores que carecen de acceso a recursos financieros para adquirir nuevas semillas en cada temporada agrícola. Esto les permitiría conservar, replantar, intercambiar, compartir y revender semillas a otros pequeños agricultores, siempre que no utilicen la denominación de la obtención vegetal ni de la marca comercial conexas. No obstante, los agricultores que tengan intereses comerciales significativos deberían estar sujetos a las reglas normales.

215. El representante del Japón afirma que su delegación no ha modificado su posición acerca del examen del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 desde que presentó su documento de posición con la signatura IP/C/W/236. Dice que la posición del Japón también sigue siendo congruente y se mantiene inalterada con respecto a la relación entre el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC. El orador formula observaciones preliminares con respecto al inciso 95 de las cuestiones pendientes relativas a la aplicación, especialmente la cuestión relativa al reciente tratado internacional establecido en el marco de la FAO y declara que le parece prematuro comenzar el debate sobre esta cuestión en el Consejo de los ADPIC. En su opinión, convendría esperar a que el debate se desarrolle en la FAO o en otros foros, porque este tratado aún no ha entrado en vigor. Existen varios puntos que no están claros en relación con la interpretación del apartado d) del párrafo 3 del artículo 12 de ese tratado, que podrían aclararse de manera más apropiada mediante el debate sobre los acuerdos de transferencia de materiales en el marco de la FAO.

216. Con respecto a la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore, dice que esta cuestión se ha debatido ampliamente en el Comité Intergubernamental de la OMPI desde el punto de vista de los expertos en propiedad intelectual. Por tanto, su delegación será prudente y esperará antes de comenzar los debates en el Consejo de los ADPIC, puesto que es mejor esperar a los acontecimientos y resultados que se produzcan en aquel Comité. Pasando a la cuestión de la divulgación y el origen de los recursos genéticos y el consentimiento fundamentado previo, dice que desde el punto de vista puramente de los procedimientos de otorgamiento de patentes no se los puede considerar como requisitos para la divulgación necesaria a fin de llevar a efecto la invención de conformidad con el párrafo 1 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC. Cree que no deben imponerse obligaciones adicionales a las solicitudes de patentes relacionadas únicamente con invenciones biotecnológicas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Puesto que los requisitos de la divulgación del origen de los recursos genéticos y las pruebas de consentimiento fundamentado previo no son cuestiones relacionadas con la patentabilidad, sino más bien procedimientos o formalidades adicionales relacionadas con el otorgamiento de patentes, al orador le preocupa la coherencia con el párrafo 1 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC.

217. La representante del Perú conviene con las CE en que el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 contiene flexibilidades que han de mantenerse, especialmente con el fin de evitar la presión internacional para asumir mayores compromisos que los que contempla el Acuerdo. Su delegación tiene dudas acerca de si el Consejo de los ADPIC debe aclarar y estudiar la cuestión de los microorganismos, porque en el caso de una diferencia, estaría en manos de un órgano especial y del Órgano de Apelación, lo que no es deseable. No obstante, la oradora no cree que la OMPI sea el único foro donde estudiar este aspecto. En su opinión, la inclusión de la cuestión de los derechos del agricultor en el debate es pertinente porque el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 se refiere específicamente a la protección de obtenciones vegetales, y muchos Miembros han incluido en su legislación disposiciones relativas a los derechos del agricultor. También sugiere que se invite a la FAO a hacer una exposición oral con respecto al documento IP/C/W/347 en la próxima reunión del Consejo de los ADPIC.

218. El representante de Singapur considera que la cuestión que se está debatiendo es muy difícil, sobre todo porque todavía está evolucionando. Dice que durante el examen del apartado b) del

párrafo 3 del artículo 27 los Miembros deberían tener en cuenta la evolución en el campo de la biotecnología, porque la cuestión de la patentabilidad del material genético, además de las disposiciones del apartado b) del párrafo 3 del artículo 27, está regida por esa evolución. No obstante, en su opinión el Consejo de los ADPIC debería proceder lentamente al introducir cambios que afectaran al mundo incipiente de la biotecnología. Recuerda la cuestión planteada por cierto número de delegaciones con respecto a los debates que se están celebrando en otros foros, como la OMPI y la FAO, relacionados con esta cuestión y dice que sería útil que el Consejo de los ADPIC siguiera de cerca los acontecimientos en otros foros y abordara cuestiones generales pertinentes para su trabajo. Existiría el peligro de duplicar el trabajo y crear una controversia innecesaria en relación con aspectos que sería más útil que los expertos debatieran en otros foros.

219. Con respecto a la relación entre el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC, conviene reconocer la necesidad de examinar la cuestión de la complementariedad entre ambos acuerdos. Sería útil tener presente los principios de la interpretación de tratados, y que los acuerdos se deben examinar de manera que no creen conflicto al identificar esferas que puedan plantearlo, así como encontrar maneras de resolverlo. Con respecto a la patentabilidad de los materiales genéticos en el marco del CDB, dice que las patentes excesivamente amplias otorgadas en determinados países son una cuestión que otras delegaciones deberán transmitir a sus capitales, asegurándose de que tales actos se impidan en el proceso de aplicación de su legislación. En cuanto al consentimiento fundamentado previo y la distribución de beneficios, dice que se trata de cuestiones difíciles, puesto que una parte mantiene que estas cuestiones deberían ser tratadas en el plano multilateral mientras que la otra señala que al hacerlo así se sobrepasaría el límite de la propiedad intelectual y se entraría en un terreno que sería preferible tratarlo bilateralmente mediante contratos. Dice que el Consejo deberá seguir examinando esta cuestión y tomar nota de las actividades que se desarrollan en otros lugares, por ejemplo los trabajos del Comité de la OMPI.

220. El representante de la UPOV dice que la tarea de la UPOV consiste en facilitar y promover un sistema eficaz de protección de obtenciones vegetales destinado a estimular el desarrollo de nuevas obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad, ya sea en un país desarrollado o en desarrollo. La UPOV tiene 51 miembros, muchos de los cuales son países en desarrollo, que han experimentado efectos beneficiosos en materia de productividad, competitividad, ingresos y desarrollo, mediante la protección de obtenciones vegetales. Señala que el sistema de protección de obtenciones vegetales de la Unión Europea se basa en el Convenio de la UPOV, y que 13 de sus Estados miembros son partes contratantes en ese Convenio. Señala que la UPOV es el único sistema eficaz *sui generis* para la protección de nuevas obtenciones vegetales que está internacionalmente reconocido. Se refiere al párrafo 77 del documento conceptual de las CE (IP/C/W/383), donde se enumeran los criterios de un régimen eficaz para la protección de obtenciones vegetales, y dice que el sistema de protección de obtenciones vegetales establecido sobre la base del Convenio de la UPOV satisface todos esos criterios y por tanto es compatible con el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Convenio de la UPOV establece un sistema eficaz *sui generis* a nivel nacional así como un sistema de armonización internacional para la protección de obtenciones vegetales, de manera que todos los obtentores en todos los países miembros de la UPOV puedan disfrutar del mismo nivel de protección. Dice que elevar la armonización internacional es indispensable para la protección de nuevas obtenciones vegetales, para el comercio internacional y la transferencia de tecnología. Si un país adoptara su propio sistema de protección, los obtentores vegetales de ese país no disfrutarían de los beneficios derivados de la armonización internacional, lo que podría complicar y distorsionar el comercio internacional de semillas. En tal caso, los obtentores de los países miembros de la UPOV dudarían en enviar allí sus obtenciones, lo que significaría que los agricultores de ese país perderían la posibilidad de beneficiarse de la utilización de las mejores obtenciones desarrolladas. Además, la adopción de un sistema que no sea compatible con el sistema internacionalmente armonizado plantea cuestiones con respecto al espíritu del Acuerdo sobre los ADPIC.

221. Continúa diciendo que a nivel nacional el elemento más importante de la política agrícola es el desarrollo de la industria de las semillas y se considera que la protección de nuevas obtenciones vegetales es uno de los instrumentos más eficaces con ese fin. Todos los países quieren tener un sector de semillas competitivo compuesto de empresas de los sectores público y privado y, dado que ambos sectores necesitan recursos financieros para mantener un programa de obtención de nuevas variedades, podrían facilitarse recursos financieros adicionales mediante un sistema eficaz de protección de obtenciones vegetales. Dice que el Convenio de la UPOV prescribe, por razones de transparencia del mercado, la utilización de una determinada denominación de una variedad siempre que la semilla de una obtención protegida sea objeto de comercio. El orador se refiere al documento IP/C/W/383 y dice que describe la posibilidad de reducir el nivel de protección permitiendo la venta de semillas sin utilizar la denominación de la obtención. Esto conlleva el riesgo de crear confusión y socavar todo el sistema, puesto que hace difícil, si no imposible, que el obtentor recupere el costo de su programa de obtención. Recalca que las prácticas de los agricultores en relación con variedades y especies nacionales sin proteger no se verían de ningún modo afectadas por la adopción del sistema de protección de obtenciones vegetales de la UPOV, que está diseñado para fomentar el desarrollo de nuevas obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad, lo que redundaría en provecho tanto de los obtentores como de los agricultores. El sistema comprende exenciones para que el agricultor utilice obtenciones protegidas con fines privados y no comerciales, como la agricultura de subsistencia. Los agricultores podrían, por ejemplo, utilizar variedades protegidas con fines experimentales y para obtener otras variedades. Además, se podría permitir a los agricultores utilizar semillas de obtenciones protegidas que hubieran guardado, pero tal permiso debe tener lugar dentro de ciertos límites a fin de asegurar que no se menoscaben los incentivos para que los obtentores creen nuevas variedades. Los agricultores pueden crear y proteger también sus propias obtenciones al amparo del Convenio de la UPOV.

222. Además, dice que el sistema de la UPOV proporciona mayor flexibilidad a un centro público fitogenético al que se le han otorgado derechos de obtentor con respecto a las condiciones para permitir la explotación de la obtención protegida. El obtentor podría, por ejemplo, permitir a un agricultor que intercambie semillas con los vecinos o se las venda. Las instituciones públicas de investigación de muchos países en desarrollo desempeñan un papel muy importante en la obtención de alimentos vegetales básicos y tienen libertad para permitir que sus obtenciones protegidas se distribuyan a través de canales tradicionales de un agricultor a otro, al tiempo que impiden que las obtenciones sean utilizadas comercialmente por otras entidades competidoras. A este respecto, el sistema de la UPOV es compatible con la utilización de canales tradicionales cuando los obtentores, especialmente las instituciones públicas de investigación, deseen utilizarlos. Por tanto, la falta de la debida protección para las nuevas obtenciones en los países en desarrollo podría hacer que no se facilitara un incentivo esencial a las posibles inversiones para desarrollar la agricultura. En consecuencia, los países en desarrollo perderían una oportunidad de desarrollar sus sectores nacionales de la agricultura, la horticultura y la silvicultura y de mejorar su desarrollo económico general. Dice que la UPOV reconoce la importancia de la creación de la capacidad y cuenta con un programa en la materia que abarca a más de 90 países en África, Asia, la región del Pacífico, América Latina, el Caribe y países en transición.⁴

F. RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y EL CDB

223. El representante de la India recuerda la detallada respuesta que dio su delegación en la última reunión a las preocupaciones manifestadas por los Miembros acerca de las propuestas de la India sobre la divulgación y el consentimiento fundamentado previo, y añade que una de las inquietudes que se habían manifestado es que la distribución de beneficios debería alcanzarse a través de contratos celebrados bilateralmente y que la legislación nacional podía establecer una base jurídica para tales acuerdos contractuales. En su opinión, es evidente que los Miembros reconocen que los contratos se

⁴ Véanse las conclusiones en los párrafos 256 y 257.

pueden celebrar antes de la transferencia de recursos y conocimientos biológicos y que los elementos de esos contratos se pueden regular en la legislación nacional. En vista de lo cual, la oposición a la idea de que el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC debe hacer obligatoria la divulgación de que realmente se han celebrado tales contratos es sorprendente. Dice que su país y algunos otros no se han opuesto a los acuerdos bilaterales para lograr la distribución de beneficios. La posición de su país es que la legislación debe fijar las normas mínimas para el consentimiento fundamentado previo y la distribución de beneficios como se prescribe en el CDB, lo que puede facilitarse en mayor medida mediante formularios modelo de acuerdos de transferencia de los materiales y acuerdos de transferencia de información. Sin embargo, los acuerdos no pueden estar en conflicto con el marco básico del CDB para el acceso, el consentimiento fundamentado previo y la distribución de beneficios que se reconoce en las leyes adoptadas por varios países. El contrato que vaya contra los principios del CDB y contra la legislación nacional en aplicación del CDB sería, pues, anulado por infringir la normativa pública. Las normas de divulgación que prescriben la plena divulgación de la fuente, de si se celebraron contratos y de si se cumplió o no la legislación nacional en materia de acceso y de distribución de beneficios actuarían como elemento de disuasión contra el acceso y la utilización no autorizada por cualquier solicitante de patente. También actuaría como mecanismo de autovigilancia y autocomprobación conducente a casos menores de utilización no autorizada y recaería totalmente en el solicitante de la patente la carga de facilitar la información pertinente. Por tanto, es difícil ver cómo un requisito así puede incrementar los costos administrativos de los gobiernos. Además, es evidente que la legislación nacional que prescriba sólo acuerdos bilaterales no es suficiente, especialmente en el caso de los recursos genéticos y los conocimientos de los que es fácil apoderarse en casos en que países ricos en biodiversidad y conocimientos tradicionales no posean la capacidad de rastrear por sí solos las infracciones.

224. Otro grupo de preocupaciones manifestadas por algunos Miembros es que ampliar las normas de divulgación puede ser contrario a la no discriminación enunciada en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. Su delegación no llega a comprender cómo se puede considerar que tales normas sean contrarias al principio de no discriminación, dado que las mismas normas se aplicarían por igual a los solicitantes extranjeros y nacionales de patentes. También el argumento de la discriminación sobre la base del campo de la tecnología es infundado, porque cuando las invenciones en el campo de la tecnología implican la utilización de biorrecursos, las circunstancias especiales que rodean tales recursos y la información conexa exigen normas adicionales de divulgación. El orador dice que es un principio establecido de interpretación que tratar de manera diferente campos de la tecnología que no son similares no sería contrario al principio de la no discriminación. Señala que algunos Miembros han indicado que la propuesta de introducir en el artículo 29 condiciones adicionales para la divulgación iría más allá del CDB porque a cada parte contratante incumbe establecer su propio sistema para controlar el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios. No obstante, añade, que las partes contratantes en el CDB han reconocido que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del Convenio y han señalado que esos derechos deben apoyar los objetivos del Convenio y no ser contrarios a ellos. Por tanto, su delegación ha propuesto, en este marco, que no se disfruten los derechos de patente a expensas de infringir las disposiciones de los regímenes nacionales para el cumplimiento de los objetivos del CDB, por lo que no deberán otorgarse patentes contrarias a estos objetivos.

225. El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación es plenamente consciente de la necesidad de que el Consejo adopte decisiones sobre los tres puntos del orden del día de los que se ha ocupado su comunicación. Pasando a la relación entre el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC, dice que el Convenio, por un lado, reconoce claramente la necesidad de proteger de manera adecuada y eficaz los derechos de propiedad intelectual e insta a sus Miembros a velar por que esos derechos apoyen sus objetivos, el Acuerdo, por otro lado, no hace referencia a los principios del CDB sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios derivados de su utilización. Sin embargo, esto no significa que el Acuerdo sobre los ADPIC sea contrario al CDB. En su opinión, estos dos acuerdos no entran en conflicto desde una perspectiva jurídica ni hay nada en las

disposiciones de uno u otro que impida a un país cumplir sus obligaciones derivadas de ambos. Por ejemplo, el CDB no prohíbe las patentes sobre invenciones en la que se utilice material genético. Análogamente, el Acuerdo sobre los ADPIC no impide a los signatarios del CDB ejercer su derecho a reglamentar el acceso a sus recursos genéticos, a exigir el consentimiento fundamentado previo o a compartir los beneficios derivados de su utilización. Ahora bien, no sería correcto cerrar la puerta a todo debate basándose en que, al no haber incompatibilidad jurídica entre los dos acuerdos, no puede haber un problema a la hora de aplicarlos, porque existe una considerable interacción entre los derechos a que hace referencia el Acuerdo sobre los ADPIC y el temor del CDB.

226. En su aplicación, el Acuerdo sobre los ADPIC puede utilizarse en apoyo de los objetivos del CDB, por ejemplo la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos, pues existe margen para que confluyan los intereses de los proveedores y los usuarios de los derechos de propiedad intelectual. Además, estos últimos contribuyen a crear beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos en forma de rendimiento financiero o de acceso a la tecnología pertinente. Por este motivo, su delegación opina que todo examen del vínculo existente entre el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC debe centrarse en las formas de aplicar ambos instrumentos de manera que se apoyen mutuamente y en la creación de una interfaz entre los dos.

227. En el plano nacional, su delegación opina que los Miembros de la OMC y los signatarios del CDB tienen la obligación de cumplir sus compromisos. Dice que ambos acuerdos permiten un grado considerable de flexibilidad en cuanto a la aplicación nacional, lo que deja margen para un equilibrio en su aplicación. En el plano internacional se pueden crear nuevas sinergias en su aplicación. Por tanto, es importante que los gobiernos velen por la coherencia política al ocuparse de cuestiones pertinentes a la interacción entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, con el fin de conseguir un enfoque integrado entre las instituciones. En ese contexto, reitera que el otorgamiento al CDB de la condición de observador en el Consejo de los ADPIC desempeñaría una función crucial para crear una apreciación clara de los vínculos existentes entre los dos acuerdos. Añade que la relación directa entre la labor del CDB y la del Consejo de los ADPIC, como se expresa en el párrafo 19 de la Declaración Ministerial de Doha, hace indispensable tal condición de observador. También es importante subrayar que no conviene enfrentar los enfoques legislativo, administrativo y normativo, por una parte, y los enfoques contractuales, por otra. Dice que, en opinión de su delegación, las normas multilaterales, las medidas reglamentarias o normativas nacionales y los acuerdos contractuales son instrumentos que se complementan para garantizar los principios del CDB. Por tanto, las CE acogen favorablemente las Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios, que establecen formas prácticas de aplicar los principios esenciales del CDB.

228. En cuanto a los requisitos en materia de divulgación, uno de los capítulos clave en la comunicación de las CE, señala que algunos Miembros han expresado la opinión de que el Acuerdo sobre los ADPIC debe modificarse a fin de conciliarlo o armonizarlo con el CDB. Señala asimismo las propuestas de incorporar al Acuerdo sobre los ADPIC el requisito de que los solicitantes de patentes divulguen la fuente y el origen geográficos del material genético utilizado y presenten un certificado oficial o prueba de que se respeta la legislación nacional en materia de acceso y distribución de beneficios. Añade que su delegación está de acuerdo en que es necesario examinar y debatir la posible adopción de un sistema mundial, como el de los requisitos autónomos de divulgación, que permita a los Miembros seguir la pista de todas las solicitudes y de las patentes otorgadas por invenciones relacionadas con recursos genéticos. No obstante, el orador dice que la información que faciliten los solicitantes de patentes en el marco de tal sistema debe limitarse al origen geográfico de los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales utilizados en la invención, y que ese requisito de divulgación no debe convertirse en un nuevo criterio formal o sustancial de patentabilidad. El orador precisa que las consecuencias jurídicas de respetar tales requisitos deberían situarse fuera del ámbito del derecho de patentes. Refiriéndose a las preguntas formuladas por el delegado del Brasil sobre este asunto, dice que la propuesta de las CE consiste en

que cada país decida por sí mismo cómo establecerá las sanciones cuando haya infracciones de las obligaciones en materia de divulgación, pero que tales sanciones deben estar fuera de la legislación sobre patentes. En su opinión, ese sistema de divulgación respondería a las preocupaciones manifestadas por algunos Miembros de la OMC y además contribuiría a impedir la apropiación indebida de recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos al permitir que las oficinas de patentes establecieran con más precisión la novedad mediante búsquedas al efecto. Además, contribuiría a que los países proporcionen acceso a los recursos genéticos para vigilar y rastrear el cumplimiento de las normas en materia de acceso y de distribución de beneficios. Se refiere a la pregunta planteada por el representante del Brasil sobre el consentimiento fundamentado previo y la necesidad de demostrar la existencia de sistemas de distribución de beneficios y conviene en que los requisitos en materia de divulgación son la forma de hacer avanzar los debates en el Consejo sobre los ADPIC.

229. La representante de China dice que, como ha señalado el delegado del Brasil, su delegación no está segura de si los requisitos en materia de divulgación que figuran en el documento conceptual de las CE son los mismos que los propuestos por los países en desarrollo en el documento IP/C/W/356. Reitera que su delegación cree que, desde la perspectiva del desarrollo sostenible de la humanidad, el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB se apoyan mutuamente. El Acuerdo sobre los ADPIC se centra más en la protección y la diseminación de la tecnología, mientras que el CDB apunta hacia el desarrollo sostenible. Añade que la protección y la diseminación de la tecnología mejorará y facilitará el desarrollo sostenible, aunque ello no significa que los dos instrumentos internacionales puedan aplicarse automáticamente de manera que se apoyen mutuamente. Por ese motivo, su delegación cree que el Consejo de los ADPIC debería tratar a fondo las formas de asegurar que el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB se interpreten y apliquen de manera que se apoyen uno a otro. A este respecto, su delegación sugiere que se incorporen al Acuerdo sobre los ADPIC las normas básicas reconocidas por el CDB, como la de la soberanía nacional, el consentimiento fundamentado previo y la distribución equitativa de beneficios. Cree asimismo que es indispensable modificar el Acuerdo sobre los ADPIC para cumplir estos requisitos y sugiere que el Consejo de los ADPIC recomiende estas modificaciones al CNC para finales de 2002.

230. El representante de Colombia, hablando en nombre de los miembros de la Comunidad Andina, a saber, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, dice que, con respecto a la relación entre la propiedad intelectual y los objetivos del CDB, y a la luz del plan de aplicación de la reciente cumbre sobre desarrollo sostenible celebrada en Johannesburgo, la preocupante tendencia de la pérdida de biodiversidad global sólo puede frenarse si al menos 1) la población local de los países de origen de la biodiversidad se beneficia de la preservación y el uso sostenible de la biodiversidad; 2) los objetivos del CDB se integran en programas y políticas sectoriales e intersectoriales; y 3) hay acceso a los resultados y beneficios derivados de las innovaciones biotecnológicas basadas en recursos genéticos. Además, la Cumbre ha hecho un llamamiento a los países para que avancen hacia un régimen internacional de distribución de beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos, teniendo presente al mismo tiempo el hecho de que los derechos de propiedad intelectual no pueden verse como aislados de todo un conjunto de factores políticos, económicos, ecológicos, jurídicos y sociales. Por tanto, la comunidad internacional, a la luz de ello y en virtud del llamamiento de la Cumbre de Johannesburgo, tendría que considerar que la transferencia de tecnología protegida por derechos de propiedad intelectual constituye un medio de aplicar los requisitos de la distribución de los beneficios derivados del acceso a recursos genéticos y una contribución del Acuerdo sobre los ADPIC al objetivo del desarrollo sostenible.

231. Continúa diciendo que la Comunidad Andina considera que los Miembros deben disponer de mecanismos internacionales efectivos que aseguren la protección tanto defensiva como positiva de los derechos de los países de origen de los recursos genéticos y de los conocimientos, innovaciones y prácticas de sus comunidades indígenas y locales. El Acuerdo sobre los ADPIC puede generar un ambiente favorable para la investigación y el desarrollo biotecnológico al incorporar requisitos para la

divulgación del país de origen de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional utilizados en la invención, y la prueba de la distribución justa y equitativa de los beneficios y del consentimiento fundamentado previo. Dice que todos estos elementos forman parte de los criterios de las Directrices de Bonn acordadas durante la Sexta Conferencia de las Partes del CDB, celebrada recientemente en La Haya, y recalca la importancia del Acuerdo sobre los ADPIC para coadyuvar al logro de los objetivos del CDB, manteniendo el mutuo apoyo, las sinergias y la integridad de ambos instrumentos. A este respecto, reitera la importancia de otorgar al CDB la condición de observador en el Consejo de los ADPIC.

232. La representante del Canadá reitera la opinión de su delegación de que el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB pueden aplicarse de una manera coherente que suponga un apoyo mutuo y que ninguno de los dos está en conflicto con el otro desde una perspectiva jurídica. Recalca la importancia del Acuerdo sobre los ADPIC y la función de los derechos de propiedad intelectual para promover la innovación y difundir la tecnología resultante. Al mismo tiempo, reconoce la importancia de preservar la biodiversidad mundial con el fin de conseguir objetivos ambientales y un desarrollo sostenible. Su delegación toma en serio las preocupaciones de los países en desarrollo Miembros relativas a los recursos genéticos y la distribución de beneficios y reconoce la necesidad de la cooperación internacional para afrontar estas preocupaciones. Dice que su delegación está trabajando con ahínco en una diversidad de foros internacionales para conseguir este objetivo. Su propio país posee una considerable diversidad de recursos nacionales similar a muchos países del Consejo de los ADPIC y tiene gran interés en promover tanto la innovación biotecnológica como la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, la oradora no comparte la opinión de que alterar la flexibilidad inherente al apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 será ventajoso a ese respecto, ni apoya la idea de utilizar el régimen de la propiedad intelectual para hacer respetar las disposiciones de los acuerdos ambientales, ni por lo demás de ningún otro acuerdo, a menos que se pueda demostrar de manera concluyente que tal vínculo es necesario para conseguir los objetivos relacionados con la innovación que subyacen en los propios derechos de propiedad intelectual. Cree más bien que como mejor se solucionan las preocupaciones acerca de la aplicación de las disposiciones del CDB en materia de acceso y de distribución de beneficios es a través de la elaboración de leyes nacionales efectivas que prescriban que la celebración de acuerdos de transferencia de los materiales se haga en condiciones mutuamente convenidas. Tales acuerdos serán más eficaces que tratar de vigilar las condiciones de acceso en el momento en que se ha de otorgar una patente relativa a una innovación resultante. Por tanto, la oradora apoya a aquellos Miembros ricos en biodiversidad que elaboran sus propias leyes nacionales en materia de acceso de manera que asegure tanto la facilitación del acceso a los recursos genéticos para su uso continuado en valiosa investigación como la distribución justa y equitativa de los beneficios.

233. A la luz de la decisión de la Cumbre de negociar un régimen internacional sobre la distribución de beneficios, el Canadá prefiere seguir trabajando constructivamente, como lo llevaba haciendo algún tiempo en los grupos de trabajo pertinentes del CDB, para avanzar sobre la base de directrices voluntarias ideadas para ayudar a los países ricos en biodiversidad a establecer leyes nacionales eficaces en materia de acceso. La oradora añade que la reciente iniciativa del Comité Intergubernamental de la OMPI de crear una base de datos de muestras de condiciones contractuales contribuirá sin duda a estos esfuerzos y que los Miembros deberían dejar que ese trabajo agote su curso antes de comenzar la evaluación exhaustiva de la sustancia de las propuestas que tiene ante sí el Consejo de los ADPIC.

234. El representante de los Estados Unidos se refiere a un documento que su delegación presentó hace un año en el que se analizaba cada una de las disposiciones del CDB que podían guardar alguna relación con la propiedad intelectual. En el documento se describía detalladamente la forma en que un sistema contractual previsto en la legislación nacional sería una manera eficaz y efectiva de otorgar el acceso a los recursos genéticos y de asegurar la distribución de beneficios, incluida la transferencia de tecnología. Dice que le tranquiliza oír que hay más Miembros del Consejo de los ADPIC que

reconocen que realmente no hay conflictos entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, y que es consciente de que existe cierto interés por seguir explorando si podría darse alguna situación hipotética en que la aplicación de estos dos instrumentos entre en conflicto. Su opinión es que tal esfuerzo quizá no constituya el mejor uso que puede darse a los recursos del Consejo, puesto que los Miembros saben que la OMPI está llevando a cabo el ejercicio de reunir ejemplos de disposiciones en contratos de acceso y de distribución de beneficios relativas a la propiedad intelectual y a los recursos genéticos mediante un cuestionario distribuido recientemente. Este estudio, una vez completado y difundidos sus resultados entre los Miembros del Comité Intergubernamental, proporcionará una experiencia considerable en esta esfera y permitirá a los que tengan menos experiencia confiar en las disposiciones que ya han pasado la prueba del tiempo y de la legislación. Su delegación espera que tal intercambio de información reduzca en gran medida cualquier posible desigualdad en las reglas del juego en esta esfera, por lo que insta a los Miembros que pretenden regular el acceso a sus recursos genéticos a que se esmeren en seguir estudiando la aplicación cuidadosa de un régimen de acceso que establezca tal sistema contractual. Añade que dicho sistema se puede poner en vigor inmediatamente, sobre la base de la legislación contractual vigente, y por tanto no precisa que se espere al resultado de otros debates en el Consejo de los ADPIC o en otros órganos.

235. Reitera que un sistema contractual puede garantizar la distribución de beneficios derivados de la comercialización de los resultados de la investigación y el desarrollo basados en los materiales a los que se ha otorgado acceso, sean o no objeto de una patente estos resultados. Además, dice que los contratos pueden especificar cómo y en qué jurisdicción se tratarán los conflictos que puedan surgir en el marco de cualquier contrato. Recuerda que existen algunos acuerdos internacionales que se ocupan del reconocimiento y la observancia mutuos de los juicios en materia de contratos, y dice que a su delegación no le parece que vayan a derivarse beneficios de que la legislación sobre patentes prescriba divulgar la fuente de los recursos genéticos relacionados con la investigación y el desarrollo de una invención reivindicada en una patente. Por el contrario, su delegación estima que tal prescripción impondrá de manera innecesaria cargas a los solicitantes de patentes que estén utilizando material genético como base para la investigación y el desarrollo en la actualidad sin atender ni a la fuente de los materiales ni al significado de éstos con respecto a cualquier resultado final. La realidad es que incluso si se sanciona a una parte que no divulgue la información pertinente sobre la fuente de los recursos genéticos, en caso de ser identificada, declarando la patente nula o no ejecutable, el país de origen de esos recursos no obtendrá ningún beneficio compartido. No obstante, dice que las demandas por incumplimiento de contrato que llegan a buen fin pueden, de hecho, dar lugar a decisiones judiciales para que se proceda a determinada ejecución o indemnización por daños. Sugiere que tal vez los Miembros puedan explorar más detalladamente, en la próxima reunión, los beneficios prácticos exactos y lo que esperan los proponentes de los requisitos en materia de divulgación, incluso de los requisitos de divulgación que, como señalan las CE, no guarden ningún vínculo fáctico con la situación jurídica de la patente.

236. El representante del Brasil pide a los Miembros que tengan en cuenta elementos ya proporcionados en su anterior intervención bajo los anteriores puntos del orden del día, dado que su delegación entiende que hay elementos de los puntos del orden del día anteriores, actuales y siguientes que se solapan. A la luz de la intervención de los Estados Unidos con respecto a la participación del Brasil en el desarrollo de su propia industria de la biotecnología, dice que el año pasado su delegación ya destacó este punto. Dice que la situación del Brasil en tanto que país con una megabiodiversidad y un sector de la biotecnología en crecimiento no hace más que apoyar su posición, que no es contraria al desarrollo de la biotecnología. Por otro lado, la propuesta del Brasil estimulará el desarrollo de la rama de la biotecnología, teniendo en cuenta al mismo tiempo los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC de fomentar la innovación biotecnológica y la transferencia y diseminación de la tecnología en beneficio mutuo de los productores y los usuarios de los conocimientos tecnológicos. Cree que los objetivos del CDB son similares por lo que su delegación entiende que puede haber complementariedades entre el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC si los Miembros adoptan medidas apropiadas.

237. Continúa diciendo que la propuesta de los países en desarrollo concerniente a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB se sitúa en un trípode que incluye, como condición para adquirir derechos de patente, la divulgación de la fuente y el país de origen de los recursos biológicos y de los conocimientos tradicionales utilizados en la invención, pruebas de consentimiento fundamentado previo y pruebas de distribución justa y equitativa de beneficios en virtud del régimen nacional del país de origen. En su opinión, estos tres elementos son importantes para asegurar el apoyo mutuo entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, y por tanto no se los puede aislar uno de otro. Aunque los requisitos en materia de divulgación se estimulan sin duda como uno de los elementos que figuran en las Directrices de Bonn, su delegación cree que los Miembros no pueden estudiar sólo esos requisitos sin tener en cuenta las cuestiones centrales de la distribución de beneficios y del consentimiento fundamentado previo. Por tanto, insta a las CE y a otros Miembros a que velen por que los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC no vengán en contra de los del CDB. En su opinión, sería necesaria una modificación al Acuerdo sobre los ADPIC para hacer que los objetivos de ambos instrumentos sean complementarios.

238. En cuanto a los puntos suscitados por la India y los Estados Unidos, conviene en que en el Consejo de los ADPIC no existe oposición contra los acuerdos contractuales bilaterales ni contra el establecimiento de legislación nacional. No obstante, pone en duda que los nuevos contratos o la legislación nacional sean suficientes. Dice que determinados acuerdos contractuales pueden impedir que los titulares de los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales se beneficien de la explotación comercial de sus esfuerzos. Añade que la normativa nacional es sin duda un paso necesario para asegurar el acceso a la legislación, pero que también es necesaria la acción internacional. Además, dice que no hay límites que impidan a los países permitir la patentabilidad de recursos genéticos sin disponer que se utilicen esos recursos de forma sostenible. Pasando a la cuestión de otorgar la condición de observador al CDB, dice que la adopción de esa medida sería un importante paso adelante, pero no suficiente en sí mismo.

239. El representante de Kenya dice que parece haber acuerdo generalizado en que hace falta distribuir los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos para las invenciones en general, se otorgue o no una patente. Su delegación conviene con las CE en que el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB pueden aplicarse de manera que se apoyen mutuamente. También está de acuerdo con las puntualizaciones de la delegación de China de que la aplicación en apoyo mutuo de los dos instrumentos puede dar resultado si los Miembros inician una enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC que permita la incorporación de las disposiciones pertinentes del CDB, como ha sucedido con acuerdos tales como los Convenios de Berna y de París.

240. Además, su delegación está de acuerdo con la propuesta formulada por las CE de que los países vigilen la utilización de los recursos genéticos, independientemente de que tal uso desemboque o no en el otorgamiento de una patente, aunque este ejercicio podría resultar relativamente más caro y estar fuera del alcance de la mayoría de los países. Dice que su delegación preferiría que la divulgación se llevara a cabo con confianza y de buena fe. Apoya la propuesta de otorgar la condición de observador al CDB y dice que es importante hacerlo porque eso podría coadyuvar a que los Miembros encuentren soluciones a algunos de los problemas que en el futuro podrían afrontar en el Consejo de los ADPIC.⁵

G. PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL FOLCLORE

241. El representante de Bolivia dice que los conocimientos tradicionales son un recurso mundial tan importante que los Miembros deben apoyar activamente los esfuerzos internacionales encaminados a garantizar su protección. Su delegación está a favor de un sistema internacional que preserve y desarrolle los conocimientos generados por las poblaciones y comunidades indígenas. El

⁵ Véanse las conclusiones en los párrafos 256 y 257.

orador está preocupado por la utilización de los conocimientos tradicionales sin autorización de estas poblaciones y comunidades y la distribución justa y equitativa de beneficios a las mismas. En su opinión, no basta con las normas nacionales o regionales establecidas sobre esta cuestión y, por tanto, su delegación desea que se establezca un marco multilateral que asegure una eficaz protección jurídica y permita a los poseedores legítimos de estos conocimientos ejercer un control efectivo sobre el acceso, la utilización y la explotación, y contra la reproducción, la imitación, la transmisión y otros actos comerciales relacionados con los conocimientos tradicionales, incluidas sus expresiones y manifestaciones. Añade que deberían hacerse respetar los derechos respectivos a través de un medio eficaz de cumplimiento cuyas normas no deberían ser inferiores a las ya establecidas a nivel multilateral. Dice que el Consejo debe trabajar junto con otros foros y órganos internacionales pertinentes.

242. El representante de las Comunidades Europeas dice que su comunicación trata de la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore, incluido el desarrollo de un sistema de protección *sui generis*. Su delegación opina que el Consejo de los ADPIC puede ocuparse de los enfoques preventivos para evitar la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales por medio de la concesión inapropiada de patentes y que ello requerirá que los Miembros estudien métodos de documentar y compartir la información sobre los conocimientos tradicionales. Añade que las CE apoyan las propuestas encaminadas a establecer bases de datos y registros que permitan a los examinadores de patentes tener en cuenta los conocimientos tradicionales en las búsquedas del estado de la técnica. Llama la atención de los Miembros sobre las propuestas de Suiza acerca de esta cuestión y dice que será útil reexaminarlas en este contexto. En su opinión, cuando se utilizan los conocimientos tradicionales como base para nuevas innovaciones, la divulgación de los conocimientos tradicionales originales sería una forma importante de asegurar la distribución de los beneficios entre los titulares de esos conocimientos. Por tanto, las CE apoyan que se siga trabajando en pro de la elaboración de un modelo internacional *sui generis* para la protección jurídica de los conocimientos tradicionales en la OMPI. En su opinión, en la fase actual el Consejo de los ADPIC no es el lugar adecuado para negociar un régimen de protección para una nueva materia de la complejidad de los conocimientos tradicionales o el folclore, pero debería construirse a partir de la labor que está realizando el Comité Intergubernamental de la OMPI. Partiendo del resultado del proceso que tiene lugar en la OMPI, los Miembros podrían determinar a continuación si es necesario seguir dedicando más esfuerzos en el Consejo de los ADPIC.

243. La representante de Venezuela se refiere a las observaciones formuladas por su delegación en la última reunión y dice que su delegación está interesada en que se presente un informe al CNC que incluya todas las cuestiones abordadas por los países en desarrollo en el Consejo de los ADPIC. Apoya la propuesta de modificar el Acuerdo sobre los ADPIC con el fin de hacerlo compatible con el CDB. Dice que una base de datos de los conocimientos tradicionales es un elemento importante para determinar la novedad o la actividad inventiva, que además impediría la biopiratería. En su opinión, el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC se apoyan mutuamente. A este respecto, la relación entre la base de datos y el estado de la tecnología es una cuestión importante que requiere una solución que haga posible incluir determinados elementos de los conocimientos tradicionales en la base de datos, sin que ello implique que tales conocimientos son parte del dominio público. La oradora recuerda a los Miembros que en el Acuerdo sobre los ADPIC no figura la obligación de divulgar el origen de los recursos genéticos ni de los conocimientos tradicionales conexos cuando se solicita la protección mediante patente. La aceptación de esa propuesta garantizaría la transparencia y además facilitaría a los Miembros el uso de sus derechos. Sugiere que los Miembros celebren un debate en profundidad encaminado a establecer dicha obligación, que luego podría incorporarse a la legislación nacional en materia de patentes.

244. Con respecto a la forma y el contenido de la base de datos propuesta, dice que hay muchas cuestiones pendientes y mucho camino que recorrer antes de que los Miembros puedan decidir conectar a una red internacional las autoridades regionales y nacionales encargadas de las patentes.

Se pregunta quién asumirá el coste de tal interconexión electrónica entre las bases de datos y dice que comparte la opinión de que, si en el futuro se adopta la decisión de establecer tales bases de datos, sólo deberán contener los conocimientos convenidos y divulgados voluntariamente por las comunidades. Añade que los Miembros deberán velar por que los datos que contengan no faciliten el otorgamiento de patentes sin el elemento de la novedad y, asimismo, por que se gestione debidamente su uso. La oradora dice que su administración es consciente de la diversidad de órganos que son competentes en esta esfera y recalca la importancia de la complementariedad entre la labor que se está realizando en varias organizaciones dentro de sus respectivas esferas de competencia. Además, dice que está segura de que la labor en la OMPI será fortalecida por los resultados que se obtengan en el Consejo de los ADPIC y viceversa, y por esta razón no considera deseable que se estudien estas cuestiones en una sola organización.

245. El representante de Hong Kong, China, se refiere a un simposio internacional sobre medicinas tradicionales acogido por su país con los auspicios del grupo de expertos de la APEC en propiedad internacional del 19 al 22 de marzo de 2002, y dice que se dispone del informe de este simposio, distribuido con la signatura IP/C/W/377/Add.4. Dice que este simposio abarca de manera detallada cuestiones relativas a la protección de la propiedad intelectual de los frutos de la investigación en medicinas tradicionales. Indica que el acta del simposio es pertinente para cierto número de cuestiones que se están debatiendo en el Consejo de los ADPIC, como la salud pública, el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27, el CDB, los conocimientos tradicionales y el folclore. Además, dice que el acta de los debates puede consultarse en formato DVD ROM y que ya se ha presentado a los miembros del APEC.

246. La representante de Nueva Zelanda dice que la protección de los conocimientos tradicionales es una cuestión compleja y sensible para su delegación y la comunidad internacional. En vista de lo cual, le preocupa que las comunicaciones de los Miembros se centren primordialmente en los mecanismos que pueden utilizarse para proteger los conocimientos tradicionales sin que exista previamente un entendimiento de lo que significa exactamente tal protección en el contexto de los ADPIC. Dice que a este respecto hay diferentes opiniones en su país. Por ejemplo, el pueblo maorí de Nueva Zelanda entiende que "proteger" significa preservar los conocimientos tradicionales e impedir que nadie los utilice salvo sus titulares. Otros piensan que con la protección se debería permitir el desarrollo de los conocimientos tradicionales, incluso cuando ello implique su utilización por otros, y permitir que los titulares de esos conocimientos compartan cualesquiera beneficios que pudieran derivarse de ellos, cuando corresponda.

247. Algunos titulares de conocimientos tradicionales en Nueva Zelanda consideran que su lengua e imágenes son tesoros culturales que no deben ser utilizados por otros; están disgustados por recientes acontecimientos en que se han utilizado sin su permiso la lengua o imágenes maoríes, por ejemplo en una gama de juguetes "Lego" y en el diseño de botas de rugby de la marca "Adidas". Otros consideran que hay algunos aspectos de los conocimientos tradicionales maoríes que pueden ser compartidos o incluso explotados comercialmente, siempre que haya el debido reconocimiento de la fuente de esos conocimientos. En su opinión, los derechos de propiedad intelectual son pertinentes para lograr el objetivo de facilitar el desarrollo apropiado de los conocimientos tradicionales, aunque no siempre sean capaces de lograr su preservación. A la luz de estas diferencias en los modos de ver, dice que la opinión de su delegación es que tal vez sea prematuro embarcarse en debates para establecer mecanismos específicos que se puedan aplicar a nivel internacional. En su lugar, convendría estudiar en primer lugar debatir la finalidad de la protección y la gama completa de mecanismos, ya se basen en la propiedad intelectual o tengan un carácter *sui generis*, que pudieran ayudar a los pueblos indígenas a proteger y desarrollar sus conocimientos tradicionales. También sería importante procurar que este proceso estuviera informado por los deseos de los propios titulares de los conocimientos tradicionales.

248. Con respecto a la legislación neozelandesa en materia de propiedad intelectual, dice que en la actualidad estas leyes no contienen disposiciones específica y directamente encaminadas a la protección de los conocimientos tradicionales, aunque en cierta medida se protegen determinados aspectos de esos conocimientos mediante la legislación general existente sobre propiedad intelectual, dentro de los límites inherentes a esas leyes. Añade que su país ha realizado progresos en la elaboración de medidas específicamente ideadas para preservar o para facilitar la utilización apropiada de los conocimientos tradicionales. Por ejemplo, en la actualidad hay ante el Parlamento de Nueva Zelandia un proyecto de ley que modificará la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio a fin de impedir el registro indebido de esas marcas y permitir la invalidación de las marcas existentes que contengan textos e imágenes maoríes cuando ello resulte ofensivo para un sector importante de la población de Nueva Zelandia, incluida la comunidad maorí. En la esfera de las marcas de fábrica o de comercio, el Gobierno ha financiado el desarrollo de la marca "Maori-made". Esta marca es una certificación de autenticidad y calidad que indica a los consumidores que el creador de la obra que están adquiriendo es descendiente de maoríes y su obra es de una calidad particular. Esta marca colectiva se creó en respuesta a las preocupaciones del pueblo maorí con respecto a la protección de derechos de propiedad cultural e intelectual, el uso indebido y el abuso de sus conceptos, estilos e imágenes, y la falta de beneficios comerciales para los maoríes. Además, el Gobierno ha seguido reflexionando si sería apropiado el desarrollo de un sistema nacional *sui generis* para proteger los conocimientos tradicionales. Dice, además, que su país ha prestado ayuda a países de las Islas del Pacífico, por la que se encomienda a la Comisión del Pacífico Sur que elabore un proyecto de ley marco para la protección de los conocimientos tradicionales.

249. Con respecto a la acción internacional para preservar y facilitar la utilización de conocimientos tradicionales, su delegación considera que la instauración de medidas apropiadas en el plano nacional es un precursor esencial. Dice que la acción internacional puede ser necesaria, puesto que la economía mundial está interconectada. Sin embargo, la oradora no tiene una opinión acerca de la forma que debería adoptar esa acción, pero dice que su delegación seguirá trabajando sobre esta cuestión en el plano nacional y participará en la labor de otros foros internacionales, como la OMPI, con miras a lograr un progreso.

250. El representante de los Estados Unidos dice que la expresión "conocimientos tradicionales" se utiliza de manera muy parecida a la de "propiedad intelectual" para referirse a una amplia variedad de materias. No obstante, como ha señalado la representante de Nueva Zelandia, a diferencia de la situación de la propiedad intelectual, la materia objeto de los conocimientos tradicionales realmente no se ha identificado con claridad. Dice que su delegación cree, como en el caso del acceso a los recursos genéticos, que mediante la legislación nacional en materia de contratos que contemplan el consentimiento fundamentado previo y la distribución de beneficios se puede regular el acceso a los conocimientos tradicionales. Además, algunas formas de derechos de propiedad intelectual, como las marcas de certificación, la legislación contra la apropiación indebida, la legislación sobre los delitos civiles, los derechos morales y otros derechos de ese tipo que contempla la legislación nacional, pueden utilizarse en muchos casos para facilitar o mejorar la protección de tales conocimientos. Además, dice que el uso de leyes actualmente en vigor y de las que ya se entienden bien permitirá a los titulares de los conocimientos tradicionales protegerlos inmediatamente. En su opinión, dado que los derechos tradicionales suelen ser una combinación de elementos como el cultivo de recursos genéticos, el uso de medicinas tradicionales, los cantos rituales y los atuendos rituales, la máxima eficacia de la protección puede conseguirse recurriendo a una combinación de leyes.

251. Pasando al folclore, señala que cierto número de países, entre ellos el suyo, ya han descrito cómo han regulado la preservación del folclore. El orador se refiere a los debates que están teniendo lugar en el Comité Intergubernamental de la OMPI e insiste en que los Miembros no tienen que esperar a que concluyan esos debates o los debates en la OMC. Dice que en la actualidad los Miembros interesados en proteger las canciones tradicionales disponen de varios cauces y anima a los que no lo hayan hecho a que se adhieran al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y

Fonogramas. Este Tratado prevé la protección de las interpretaciones de música tradicional y es el único Tratado sobre derechos conexos que incluye de manera explícita la protección de intérpretes de expresiones del folclore. Los Miembros también pueden estudiar el poner en práctica las disposiciones modelo de la OMPI-UNESCO, cuya adopción se remonta a 1982, en las leyes nacionales sobre la protección de expresiones del folclore contra su explotación ilícita y otras acciones perjudiciales. Además, los Miembros pueden poner en vigor legislación nacional *sui generis* para proteger las canciones tradicionales u otras expresiones del folclore. Dice que su delegación es consciente de que algunos países confieren cierto grado de protección de las expresiones del folclore en su legislación sobre derecho de autor. Por consiguiente, su país ha examinado aspectos en que la legislación actual puede utilizarse para proteger los conocimientos tradicionales y se ha llegado a un acuerdo para proteger al consumidor contra el engaño relativo a expresiones tribales del folclore mediante la Ley de Artes y Oficios Indios.

252. El representante del Perú está de acuerdo con las declaraciones formuladas por los representantes de Bolivia y Venezuela y opina que el Consejo de los ADPIC, en coordinación con otros órganos internacionales competentes, debe analizar las maneras de proporcionar una protección defensiva y positiva a los conocimientos tradicionales que esté sujeta a procedimientos multilaterales de solución de diferencias.

253. El representante de la India comparte la opinión de que las bases de datos destinadas a evaluar el carácter genuino y novedoso y la inventividad en una solicitud de patente que implique la utilización de recursos biológicos o de conocimientos tradicionales son un instrumento útil al que pueden recurrir los examinadores de patentes en todo el mundo. En su opinión, la necesidad de erradicar la apropiación indebida de los conocimientos, la innovación y las prácticas de las comunidades locales e indígenas constituyen la base de la justificación de la propuesta de que las solicitudes de patentes divulguen el cumplimiento de las normas del consentimiento fundamentado previo y la distribución de beneficios según lo prescrito en las leyes nacionales. Añade que una disposición en ese sentido sólo mejora el compromiso de asegurar que las solicitudes de patentes cubran invenciones que sean novedosas e inventivas y construidas a partir de la información y los recursos obtenidos de los países y las comunidades de origen. Respecto de las bases de datos de los conocimientos de las comunidades locales e indígenas, dice que en muchos países ya han empezado a hacerlo y que la Biblioteca Digital de los Conocimientos Tradicionales de la India es un ejemplo al respecto. Dice que en la actualidad la biblioteca digital de la India trata de abarcar solamente información sobre recursos biológicos que han sido codificados en los textos escritos de la India, lo que en sí constituye una impresionante tarea dada la vasta amplitud y profundidad de la información disponible en forma escrita. No obstante, es consciente de las limitaciones inherentes a esta tarea, y en particular de que tales bases de datos no pueden abarcar por entero de manera general y exhaustiva la totalidad de los conocimientos tradicionales y los recursos biológicos existentes en la India. Por ejemplo, quizá no pueda abarcar los conocimientos y recursos que están documentados en los textos menos conocidos del territorio de la India, o los preservados oralmente por las comunidades, o los que están en constante evolución debido a innovaciones informales dentro de una comunidad. Otro matiz en todo este debate surge cuando la información sobre un recurso contenida en la base de datos lleva al inventor en la práctica a utilizar un elemento cercano no documentado de tal recurso a los efectos de realizar su invención. Además, es posible que la información que figura en la solicitud de patente en los regímenes actuales no contenga elementos que puedan rastrearse directamente hasta tal base de datos y que una búsqueda sencilla en la base de datos no siempre arroje un resultado directo con respecto al estado anterior de la técnica. En su opinión, para abordar estas zonas grises será esencial la obligatoriedad de que se divulguen la fuente de la información y los conocimientos.

254. El representante de Kenya dice que los Miembros que, como su propio país, proceden de regiones de vivos conocimientos tradicionales, y muy practicados, son conscientes de las ventajas que pueden derivarse de la protección de los conocimientos tradicionales. En su opinión, esta protección es importante para garantizar el sostenimiento de los conocimientos tradicionales, porque

determinadas comunidades o países/sociedades que los utilizan no pueden acceder a la tecnología moderna. Además, los conocimientos tradicionales han resultado ser más eficaces en determinados casos para solucionar problemas de la tecnología moderna. El autor cita al respecto un incidente acaecido en una aldea de Malawi que tuvo que ver con un animal salvaje en el que se demostró la importancia de esos conocimientos. Por esa razón, agrupaciones regionales como la ARIPO están analizando las maneras de acelerar el mecanismo para la protección de los conocimientos tradicionales.

255. El representante del Brasil reitera que mientras que la propuesta de los países en desarrollo descansa en el trípode de los tres requisitos bien conocidos que ha mencionado anteriormente, el documento de las CE sólo descansa en un pie, el del requisito en materia de divulgación. Por este motivo, su delegación cree que la propuesta de las CE podría ser insuficiente para proporcionar una solución sostenible que impida actos de piratería biológica en el extranjero. El orador suma su delegación a la opinión manifestada por las delegaciones de Venezuela, Perú, Nueva Zelandia, India, Kenya y otras de que el sistema de propiedad intelectual convencional contiene limitaciones que impiden proteger de manera eficaz y adecuada los conocimientos tradicionales. Respecto de las bases de datos, comparte la opinión de que pueden ser útiles para facilitar la tarea de los examinadores de patentes al comprobarlas con las solicitudes de patentes relacionadas con el uso no autorizado de los conocimientos de comunidades tradicionales. También comparte las opiniones de las delegaciones de Venezuela y Nueva Zelandia de que la creación de bases de datos no se debe fundar en la información divulgada sin el consentimiento fundamentado previo de sus propietarios. Dice que las bases de datos no deben dar por resultado la facilitación de la piratería biológica, cuestión ésta que suscita una grave preocupación.

256. El Presidente propone que se pida a la Secretaría que actualice periódicamente sus notas recapitulativas sobre los puntos E, F y G del orden del día, no necesariamente después de cada reunión, sino cuando se haya presentado material significativamente nuevo. Además, con referencia a la sugerencia del Perú, propone que el Consejo invite a la FAO a que haga una exposición sobre el Tratado Internacional en la próxima reunión del Consejo.

257. El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas en el marco de estos tres puntos del orden del día y acuerda proceder según lo sugerido por el Presidente.

H. EXAMEN DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 71

258. El Presidente recuerda que, en la reunión del Consejo de marzo de 2002, el Presidente saliente señaló que antes de la Conferencia Ministerial de Doha se había formulado un número considerable de sugerencias acerca de asuntos a considerar en el marco del examen del párrafo 1 del artículo 71, pero algunas de ellas se habían solapado con otros asuntos que estaban en el orden del día del Consejo posterior a Doha. Al examinar la manera de organizar su labor, el Consejo ha invitado a los Miembros a que presenten ideas acerca de las cuestiones que se han de abordar bajo este punto del orden del día en la presente reunión, sin perjuicio del derecho de los Miembros a presentar ideas en una etapa ulterior. Hasta la fecha, ningún Miembro ha plantado sugerencia alguna.

259. El Consejo acuerda volver sobre este asunto en su próxima reunión.

I. APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 66

260. El Presidente recuerda que en Doha los Ministros encomendaron al Consejo de los ADPIC que estableciera un mecanismo para garantizar la supervisión y la plena aplicación de las obligaciones dimanantes del párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Ministros también convinieron en que, para este fin, los países desarrollados Miembros presentaran, antes de finales

de 2002, informes detallados sobre el funcionamiento en la práctica de los incentivos ofrecidos a las empresas para la transferencia de tecnología en cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de ese artículo. Estas comunicaciones deben someterse a examen en el Consejo de los ADPIC y los Miembros deben actualizar anualmente la información. Por tanto, la Decisión de Doha ha fijado un calendario claro para la presentación de estos informes por parte de los países desarrollados Miembros, a saber, para finales de 2002. Recuerda asimismo que, en respuesta a una solicitud formulada a los países desarrollados Miembros para que faciliten información sobre la aplicación de las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC, muchos de esos países han proporcionado información sobre este asunto, y el Consejo de los ADPIC ha debatido las correspondientes comunicaciones. En su última reunión, el Consejo de los ADPIC recibió de los países menos adelantados una comunicación que contenía consideraciones acerca del establecimiento de un mecanismo de supervisión en el marco del párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC.

261. Puesto que es necesario actuar con prontitud para aplicar la instrucción ministerial, y a la luz de las sugerencias y debates habidos en el Consejo de los ADPIC y de las consultas informales, el orador ha distribuido una nota informal (JOB(02)118) en la que ha sugerido, para que el Consejo los examine, algunos elementos que pueden constituir la base para adoptar una decisión sobre este asunto. Como las delegaciones quizá necesiten más tiempo para examinar estas sugerencias, propone que el Consejo vuelva sobre este asunto en su próxima reunión. Recuerda que la Decisión de Doha exhorta a cada país desarrollado Miembro a que presente informes detallados para finales del año 2002. Por tanto, también sugiere que se pida a los países desarrollados Miembros que tengan disponible tal información para la reunión del Consejo de noviembre de 2002. Al mismo tiempo, se los puede invitar a que utilicen las directrices que contiene su nota informal en caso de que les parezcan útiles.

262. Así lo acuerda el Consejo.

J. RECLAMACIONES EN CASOS EN QUE NO EXISTE INFRACCIÓN Y RECLAMACIONES EN CASOS EN QUE EXISTE OTRA SITUACIÓN

263. El Presidente recuerda que, en Doha, la Conferencia Ministerial adoptó una Decisión sobre cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación (WT/MIN(01)/17) cuyo párrafo 11.1 dice así: "Se dispone que el Consejo de los ADPIC prosiga el examen del alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 y formule recomendaciones al quinto período de sesiones de la Conferencia Ministerial. Mientras tanto, los Miembros no presentarán tales reclamaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC." Por tanto, el Consejo de los ADPIC dispone de un plazo para su labor, a saber, que debe estar en situación de formular recomendaciones a la Quinta Conferencia Ministerial, a celebrar en Cancún (México), en septiembre de 2003. Según solicitó el Consejo de los ADPIC en su reunión de marzo de 2002, la Secretaría distribuyó con anterioridad a la reunión de junio, en el documento IP/C/W/349, una nota resumida de las cuestiones planteadas hasta la fecha en el debate sustantivo de este punto del orden del día. Por entonces, el orador distribuyó también un orden del día anotado en el documento JOB(02)/66 en que planteaba cierto número de cuestiones que quizás los Miembros desearían abordar. No obstante, en la reunión de junio el Consejo no dispuso de tiempo suficiente para tratar adecuadamente este punto.

264. Para poder preparar recomendaciones, será necesario que el Consejo de los ADPIC cuente con propuestas específicas de las delegaciones y las haya debatido plenamente con suficiente antelación a la Quinta Conferencia Ministerial de modo que los Miembros tengan una idea clara de las opciones disponibles y de sus repercusiones. Sugiere que, como fecha objetivo para la presentación de propuestas, se fije la primera reunión del Consejo en 2003; mientras, el Consejo podría continuar debatiendo este asunto todavía en la reunión de noviembre sobre la base del orden del día anotado. No obstante, dice que ello no excluirá los documentos que se presenten antes, y anima a los Miembros

a que lo hagan, ni los que se presenten después, en el empeño de encontrar un terreno de entendimiento.

265. El Presidente dice que el Consejo acaba de recibir una comunicación del Perú en nombre de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Egipto, Malasia, Pakistán, Perú, Sri Lanka y Venezuela.

266. La representante del Perú, en su presentación de la comunicación conjunta en nombre de sus patrocinadores, dice que el Consejo tiene la tarea prioritaria de lograr un consenso acerca de las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación con respecto al Acuerdo sobre los ADPIC con el fin de cumplir el mandato encomendado por la Conferencia Ministerial de Doha, según el cual el Consejo ha de efectuar recomendaciones a la Quinta Conferencia Ministerial. La oradora cree que es incorrecta la aseveración de que la expiración del plazo previsto en el párrafo 2 del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC puede hacer automáticamente aplicables al Acuerdo las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación. El párrafo 1 del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que serán de aplicación a dicho Acuerdo las disposiciones del artículo XXIII del GATT, con sujeción a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC. A pesar de la expiración del plazo previsto en el párrafo 2 del artículo 64, las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación sólo son aplicables al Acuerdo sobre los ADPIC de conformidad con los procedimientos establecidos en el párrafo 3 del artículo 64, es decir, una vez alcanzado un consenso sobre el particular.

267. La oradora se manifiesta a favor de un mecanismo transparente, previsible y equitativo para solucionar las diferencias comerciales. No obstante, cree que la aplicación al Acuerdo sobre los ADPIC de reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación suscita preocupaciones fundamentales. No es necesaria porque el Acuerdo sobre los ADPIC, a diferencia de otros Acuerdos de la OMC, es un Acuerdo *sui generis* que no está destinado a proteger el acceso a los mercados o el equilibrio de las concesiones arancelarias, sino más bien para establecer normas mínimas de protección de los derechos de propiedad intelectual, cuyo abuso podría incluso socavar el acceso a los mercados. Este tipo de reclamaciones son innecesarias para proteger cualquier equilibrio de derechos y obligaciones inherentes al Acuerdo sobre los ADPIC, ya que éstos están reflejados en las principales obligaciones y flexibilidades del Acuerdo, que establece explícitamente que los Miembros de la OMC no están obligados a aplicar una protección más amplia. Los derechos y obligaciones en el Acuerdo sobre los ADPIC se cumplen mejor a través de una aplicación de buena fe de sus disposiciones, de conformidad con los principios establecidos en el derecho internacional público reconocidos por el Órgano de Apelación de la OMC. La aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC no requiere del recurso a la noción, legalmente imprecisa, de reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación.

268. Asimismo, la aplicación de dichas reclamaciones suscita preocupaciones sistémicas por introducir incoherencia entre Acuerdos de la OMC que pueden anular o menoscabar los beneficios del Acuerdo sobre los ADPIC. También amenaza con trastornar el equilibrio de derechos y obligaciones en el Acuerdo sobre los ADPIC al poner los derechos privados por encima de los intereses de los usuarios de la propiedad intelectual, tanto dentro como entre los países, y de otras consideraciones de política general pública, de manera incompatible con el párrafo 3 del artículo 2 del ESD. También puede socavar la autoridad de reglamentación e infringir derechos soberanos al exponer a cuestionamiento cualquier medida que afecte a la propiedad intelectual y que no fue prevista en el momento de la Ronda Uruguay. Además, amenaza con limitar el uso de la flexibilidad inherente al Acuerdo sobre los ADPIC para asegurar el logro de objetivos de política legítimos tales como la protección y promoción de la salud pública y la nutrición, la protección del medio ambiente y la biodiversidad, el fomento de la transferencia de tecnología y otros asuntos de interés público en sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico.

269. También opina la oradora que las ventajas resultantes del Acuerdo sobre los ADPIC están descritas de manera adecuada en su texto, incluido su preámbulo, objetivos y principios, que tiene plenamente en cuenta la dimensión del desarrollo. Estas ventajas aseguran que las medidas y procedimientos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo, la promoción de la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de la tecnología, y el beneficio recíproco de los productores y los usuarios de conocimientos tecnológicos de modo que favorezcan el bienestar social y económico. El equilibrio entre derechos y obligaciones, la protección de la salud pública y la nutrición, la promoción del interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo social, económico y tecnológico pueden hacer que los derechos de propiedad intelectual no limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología. Tales ventajas, que van a parar a los Miembros y no a entidades privadas, están adecuadamente protegidas por la aplicación de buena fe de los derechos y obligaciones y no requieren del recurso al concepto, jurídicamente impreciso, de reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación.

270. La representante del Perú continúa diciendo que agradece los esfuerzos de otros Miembros para esclarecer y restringir la definición de las medidas que puedan dar pie a reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación. Sin embargo, definir el concepto "medida", incluso con carácter restringido, no resolverá las preocupaciones de que la reparación acabe infringiendo los derechos soberanos y reduzca las flexibilidades del Acuerdo. Estas preocupaciones surgen no solamente de una falta de claridad en cuanto a qué medidas pueden ser impugnadas, sino, y lo que es más fundamental, de la incertidumbre legal inherente al concepto de reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación. Ni el artículo 26 del ESD ni la práctica en materia de solución de diferencias del GATT, aportan suficiente orientación para que los grupos especiales y el Órgano de Apelación cursen reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC. Extender la reparación por casos de reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación, y con ello el derecho a impugnar medidas que en principio son compatibles con las obligaciones de la OMC, podría desequilibrar la correcta distribución de responsabilidades entre los Miembros de la OMC, los grupos especiales y el Órgano de Apelación. Todas estas preocupaciones plantean problemas fundamentales al sistema multilateral de comercio. Introducir reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC es innecesario y crea tensión con la seguridad y capacidad de predicción prevista por el sistema multilateral de comercio, a la vez que es incompatible con los mejores intereses a largo plazo de este sistema y de todos los Miembros de la OMC.

271. A la luz de estas preocupaciones, la oradora propone que el Consejo de los ADPIC recomiende a la Quinta Conferencia Ministerial que determine que las reclamaciones cuando no exista infracción y reclamaciones en casos en que exista otra situación, del tipo identificado en los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994, son inaplicables al Acuerdo sobre los ADPIC.

272. El representante de Chile dice que es importante que el Consejo de los ADPIC formule recomendaciones a la Quinta Conferencia Ministerial sobre la cuestión de las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación. La comunicación del Perú ofrece mucha materia para alimentar la reflexión de cara al futuro. El orador señala que es de gran interés la evolución histórica de este concepto bajo el GATT, y que tales reclamaciones pueden suscitar conflictos con diferentes Acuerdos de la OMC. Espera que el Consejo tenga más tiempo para tratar esta cuestión en el futuro.

273. El representante de Colombia, hablando en nombre de la Comunidad Andina, recuerda que el debate sobre reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación en el Consejo de los ADPIC se remonta a 1999. Desde entonces, varios Miembros de la OMC han presentado comunicaciones sobre este asunto. Las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación así como su aplicación en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC causan gran preocupación. Los Miembros

corren el riesgo de crear un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de productores y usuarios del conocimiento tecnológico, lo que puede dar por resultado la creación de nuevas obligaciones. La atención de las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación limitaría la capacidad tecnológica e innovadora de los países. También haría difícil que las autoridades nacionales aplicaran políticas y medidas económicas, sociales, de salud, ambientales y culturales que no se relacionaran directamente con los derechos de propiedad intelectual, al afectar su disfrute de los derechos y limitar las flexibilidades inherentes al Acuerdo sobre los ADPIC.

274. Al orador le preocupan además los criterios que se emiten sobre las modalidades de las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación, que pueden afectar a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. La Comunidad Andina insiste en que el concepto de tales reclamaciones, que se desarrolló en el marco del GATT de 1947, es ajeno al Acuerdo sobre los ADPIC. Hasta la fecha, los Miembros de la OMC sólo han recurrido en un número limitado de casos a estos tipos de reclamaciones, elaborados para poner remedio a situaciones no previstas entonces en el GATT, tales como las subvenciones internas a las mercancías. Por tanto, es difícil justificar su aplicación en el sistema actual de la OMC y, más en particular, en el ámbito del Acuerdo sobre los ADPIC. No es necesario y va contra los intereses de los Miembros de la OMC.

275. La representante del Canadá dice que la comunicación presentada por el Perú junto con la nota recapitulativa de la Secretaría ha dado al Consejo de los ADPIC una percepción general de la gama y la complejidad de las cuestiones objeto de este debate. Su delegación ha apoyado plenamente el examen encomendado acerca del alcance y las modalidades que conlleva permitir que estos tipos de reclamaciones se incluyan en asuntos que implican derechos de propiedad intelectual en el Consejo de los ADPIC. Desde el comienzo de este examen, su delegación ha expresado la preocupación de que trasplantar estos tipos de acción al entorno de los ADPIC introduciría inquietantes grados de incertidumbre. En el curso de los años, otros muchos Miembros se han hecho eco de las preocupaciones de su delegación. El Consejo ha generado colectivamente un cuerpo de análisis en el que se ha expuesto en detalle por qué el Acuerdo sobre los ADPIC debe ser tratado de manera diferente de los demás Acuerdos de la OMC con respecto a estas disposiciones. Aunque es posible que no todos los Miembros estén de acuerdo en cada tema específico, muchos de ellos convienen en principio en que la incertidumbre creada al buscar esta acción excepcional en el entorno de los ADPIC es inquietante. Sin embargo, el Consejo tiene la responsabilidad de proponer una recomendación sobre esta cuestión en la Quinta Conferencia Ministerial. El documento presentado por el Perú sugiere que el Consejo de los ADPIC recomiende que se determine que las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación son inaplicables al Acuerdo sobre los ADPIC. La oradora dice que, a pesar de que su delegación aún está examinando este documento, apoya muchos de los puntos planteados en él. Hace falta el tiempo suficiente para debatir esta cuestión con antelación a la Quinta Conferencia Ministerial. La oradora apoya la sugerencia del Presidente de celebrar un debate sustancial sobre este asunto en enero de 2003.

276. El representante de Hong Kong, China, dice que, aunque su delegación no ha patrocinado el documento presentado por el Perú, apoya la propuesta de su párrafo 56 de que el Consejo recomiende a la Quinta Conferencia Ministerial que se determine que las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación no son aplicables al Acuerdo sobre los ADPIC. En el documento se han expuesto argumentos bastante detallados en apoyo de esta propuesta. El artículo 1 del Acuerdo establece que los Miembros no estarán obligados a prever en su legislación una protección más amplia que la exigida por este Acuerdo, siempre que tal protección no infrinja las disposiciones del Acuerdo. Los Miembros pueden también determinar libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. Al orador le preocupa en particular la gran incertidumbre de que las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación se hagan aplicables al Acuerdo sobre los ADPIC y la carga potencialmente onerosa que recaería sobre un Miembro que defendiera esas reclamaciones. Además, dice que no está claro por qué el marco actual

del Acuerdo sobre los ADPIC es insuficiente ni la manera en que una acción no basada en una infracción puede contribuir a promover la finalidad y la intención del Acuerdo sobre los ADPIC.

277. El representante de las Comunidades Europeas dice que el documento presentado por el Perú es una valiosa contribución al debate que entraña complejas cuestiones de tipo técnico, jurídico y sistémico. Está de acuerdo en que es necesario llegar a una conclusión sobre este asunto antes de la Quinta Conferencia Ministerial. Conviene con el Canadá en que, a la vista del tiempo disponible, convendría prorrogar hasta enero de 2003 la continuación del examen de esta cuestión. Su delegación necesita algún tiempo para examinar el documento del Perú y sin duda volverá a ocuparse de él en una etapa ulterior.

278. En tanto que uno de los patrocinadores del documento presentado por el Perú, el representante del Brasil dice que su delegación suscribe plenamente los elementos presentados en la intervención peruana. Las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación pueden entenderse de manera más apropiada en el contexto del GATT de 1947, en que algunos ámbitos importantes del comercio internacional, como el de los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias y las subvenciones, no se habían codificado aún. La evolución del sistema multilateral de comercio demuestra, sin embargo, que las reclamaciones en casos de no infracción raramente se han planteado en el mecanismo de solución de diferencias cuando era más apropiado ocuparse de ellas en el contexto del comercio de mercancías. A la luz de la naturaleza *sui generis* del Acuerdo sobre los ADPIC, el orador cree que la aplicación al Acuerdo sobre los ADPIC de reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación puede suscitar algunas preocupaciones de orden sistémico acerca de la creación de incertidumbre jurídica y la posibilidad de perturbar el equilibrio de todos los Acuerdos de la OMC. Preocupa particularmente la posibilidad de que las medidas en casos de no infracción puedan socavar, en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, las competencias de los Miembros en materia de reglamentación, afectando así a importantes ámbitos de interés público, como la salud pública y la alimentación. El orador cree que la manera más coherente de abordar este asunto consiste en una recomendación del Consejo de los ADPIC para velar por que las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación no vayan a aplicarse al Acuerdo sobre los ADPIC.

279. El representante de la India asocia a su delegación con la exposición del Perú y pide a la Secretaría que incluya a la India entre sus patrocinadores.

280. El representante de la Argentina dice que, como uno de los patrocinadores del documento del Perú, su delegación comparte las opiniones expuestas por el Perú. Las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación son inherentes a acuerdos en que existe un intercambio de concesiones y en que las partes asumen recíprocamente obligaciones que están directamente vinculadas con el acceso a los mercados. En ese contexto, las concesiones convenidas en el caso del GATT de 1994 pueden quedar anuladas o menoscabadas por medidas no arancelarias. Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC no es uno de esos acuerdos sobre el acceso a los mercados. El efecto típico de los derechos de propiedad intelectual es evitar que terceras partes entren en el mercado o intervengan en el comercio sin el consentimiento del titular del derecho de propiedad intelectual. Además, las cuestiones relativas al acceso a los mercados se refieren a productos y no a derechos. Con respecto a un acuerdo que contiene normas y disciplinas y donde hay acuerdo para observar tales normas y disciplinas, no es posible anular una ventaja sin cometer una infracción de la norma que se ha acordado. Con respecto a este tipo de acuerdo, como el Acuerdo sobre los ADPIC, no puede haber anulación si no hay violación o infracción. La posibilidad de presentar una reclamación en caso de no infracción o de otra situación cuando no existe infracción daría lugar a incertidumbre en cuanto a la legalidad de las medidas gubernamentales que un Miembro pudiera adoptar legítimamente. También daría paso a la posibilidad de que tales medidas, aun legales y legítimas, fueran cuestionadas por otros Miembros. Además, las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación perturbarían el equilibrio de derechos y obligaciones que existe en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Por tanto, su delegación apoya la propuesta que figura en el párrafo 6 del documento del Perú.

281. La representante de Malasia dice que, en tanto que patrocinadora del documento del Perú, su delegación da su apoyo a la declaración formulada por ese país. Hablando en nombre de los países de la ASEAN, dice que la ASEAN agradece a la Secretaría su amplia recopilación de las diversas intervenciones que se han producido en el debate acerca del alcance y las modalidades de las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación en el documento IP/C/W/349. Esta recopilación pone de relieve la complejidad del debate para encontrar interpretaciones comunes de lo que se entiende por la ventaja, la naturaleza o las medidas que dan lugar a estos tipos de reclamaciones. Añade que el hecho de que el Consejo de los ADPIC no haya podido intervenir sustancialmente para establecer el alcance y las modalidades en los seis últimos años pone de relieve el hecho de que se trata de un asunto nuevo y de que es difícil establecer algún entendimiento concreto en relación con tales reclamaciones. Los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, como se señala en su preámbulo y su párrafo 7, exhortan a que se fomente la protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual que contribuyan a la innovación tecnológica y a la transferencia de tecnología y que las medidas y procedimientos encaminados a hacer observar los derechos de propiedad intelectual no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio ni afecten a las políticas públicas. Hay una tensión inherente entre hacer observar los derechos de propiedad intelectual y velar por que tales medidas y procedimientos no se conviertan en obstáculos al comercio internacional ni a otras políticas que protegen los intereses públicos. El Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo sobre normas mínimas que trata de conseguir un equilibrio de derechos y obligaciones entre el objetivo de promover el comercio internacional y la innovación tecnológica y el de tratar de atender el interés público con la protección de los derechos privados de propiedad intelectual. La introducción del concepto reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación elevaría aún más la tensión entre ambos conjuntos de derechos. Se podría plantear cualquiera de esas reclamaciones, en función del lado en que uno estuviera. Ambos lados podrían al parecer tener razones para formularlas. Una parte podría plantear una reclamación por menoscabo de una ventaja debido a una protección ineficaz en materia de observancia. Del mismo modo, la otra parte podría presentar el cargo o la reclamación de que determinadas medidas compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC no habían tenido por efecto la transferencia de tecnología o habían impedido la aplicación de objetivos de política pública. Cualquier reclamación de esa índole puede desatar una interminable cadena de acusaciones y contraacusaciones. La oradora dice que el Consejo de los ADPIC debe evitar las disposiciones que permitan que eso suceda. El Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo negociado entre gobiernos para la protección de derechos privados. Cualquier reclamación en caso de no infracción y de otra situación puede significar técnicamente que los derechos privados pueden extenderse más allá de lo que se ha negociado. Está claro que no debe ser esa la intención de las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación. La oradora se pregunta si algunas medidas pueden someterse a un caso de reclamación sin infracción si, proporcionando el nivel más elevado de protección y siendo compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC, pueden tener otros efectos como limitar la transferencia de tecnología o impedir el logro de objetivos de política pública. También se pregunta si constituye un caso de no infracción el que el gobierno de un país Miembro haya promulgado toda la legislación pertinente para dar efecto al Acuerdo sobre los ADPIC y tomado todas las medidas razonables de observancia pero el resultado se quede corto respecto del impacto que se pretendió. La oradora dice que si constituyen casos de no infracción, la existencia de reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación obligará a un gobierno a otorgar una protección mayor que la estipulada en el Acuerdo sobre los ADPIC. Dice que la ASEAN comparte las preocupaciones de que la aplicación de las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación a la propiedad intelectual dará lugar a incertidumbres jurídicas e imprevisibilidad, y también a obligaciones que irían más allá de la aplicación normal del Acuerdo sobre los ADPIC. Por estas razones, dice que la ASEAN opina que tales reclamaciones no se justifican y que no se deberían hacer aplicables al Acuerdo sobre los ADPIC. Por último, su delegación insta al Consejo de los ADPIC a que adopte la recomendación propuesta en el documento del Perú para la Quinta Conferencia Ministerial.

282. El representante de Singapur suma su delegación a las observaciones formuladas por el coordinador del grupo de la ASEAN, Malasia. Dice que la cuestión de las reclamaciones en casos de

no infracción y de otra situación es sumamente delicada y difícil. El hecho de que los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC no se sientan con la suficiente confianza para tomarlas como acción reparadora y el hecho de que el Consejo de los ADPIC se haya pasado los cinco o seis últimos años tratando de entender su aplicación al Acuerdo indican cuán difícil e incierto es aplicarlas al Acuerdo sobre los ADPIC. El orador cree que, tras un nuevo estudio de este asunto, todos los Miembros concluirán que el Consejo de los ADPIC debe hacer al Comité de Negociaciones Comerciales y a la Conferencia Ministerial la recomendación de que las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación no deben aplicarse al Acuerdo sobre los ADPIC. No tiene objeciones a que se continúe debatiendo, porque puede ser que se abran camino nuevas ideas. No obstante, con la aplicación de estas reclamaciones al Acuerdo sobre los ADPIC se entra en un terreno donde, más que una solución, podría producirse una complicación.

283. El representante de Egipto, patrocinador del documento IP/C/W/383, dice que este documento plantea algunas cuestiones importantes y ofrece un detallado análisis de los diversos elementos que rodean el concepto de reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación. El mecanismo de solución de diferencias de la OMC supone una importante contribución a la estabilidad de la economía mundial. Hace al sistema de comercio más seguro, predecible y creíble. No obstante, el recurso a reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación aumentaría la incertidumbre jurídica y amenazaría la previsibilidad y seguridad del sistema que se trata de garantizar. Dada la naturaleza especial del Acuerdo sobre los ADPIC, es sumamente difícil e inadecuado transponer al mismo esas reclamaciones, que sólo están en su lugar en un acuerdo concerniente al acceso a los mercados y las concesiones recíprocas. Uno de los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC es asegurar la máxima flexibilidad en la aplicación interna de leyes y reglamentos. No obstante, la aplicación de reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación en el ámbito de los ADPIC podría limitar la capacidad de algunos Miembros para adoptar nuevas medidas socioeconómicas relativas al desarrollo, el medio ambiente y la cultura.

284. El representante de Kenya suma su delegación a la comunicación presentada por el Perú, y dice que apoya plenamente la propuesta de que las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación no se apliquen al Acuerdo sobre los ADPIC.

285. El representante de Corea dice que a su delegación le complace poder continuar la labor acerca de las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación, aunque se ha registrado una divergencia de opiniones entre los Miembros. Recuerda que Corea presentó un documento sobre este asunto en el año 2000, documento que destacó tres elementos que han sido considerados requisitos esenciales para la acción respecto de una reclamación, a saber, las medidas, las ventajas que se derivan del Acuerdo sobre los ADPIC y la causalidad entre las medidas y los perjuicios. La comunicación del Perú y de otros patrocinadores contribuye a que los Miembros entiendan mejor las cuestiones que intervienen a la vez que ofrece al Consejo de los ADPIC buenas perspectivas para tratar este asunto. En los debates del Consejo debe tenerse plenamente en cuenta la naturaleza especial del Acuerdo sobre los ADPIC. El preámbulo, los objetivos y los principios del Acuerdo sobre los ADPIC, recogidos en sus artículos 7 y 8, ofrecen al Consejo una buena orientación para lograr una conclusión apropiada.

286. El representante de los Estados Unidos dice que su delegación sigue manteniendo la opinión de que es totalmente apropiado que todos los Miembros de la OMC puedan recurrir a reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación. Esta ventaja o acción no sólo estará disponible para los Estados Unidos. Toma nota de determinadas cuestiones señaladas en el documento del Perú que su delegación acaba de recibir, pero que aún no ha podido leer en su integridad. Por tanto, espera que el Consejo de los ADPIC vuelva a ocuparse de las cuestiones que le han sido planteadas en la próxima oportunidad. Conviene con la sugerencia del Presidente de que el Consejo aplaze esta cuestión hasta enero de 2003. Espera que en algún momento el Consejo de los ADPIC pueda resolver de una vez por todas el recurso a reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación en el Acuerdo sobre

los ADPIC así como el alcance y las modalidades de su aplicación. Su delegación cree que, en realidad, en el Acuerdo sobre la OMC ya se han hecho accesibles y se han previsto con claridad esas reclamaciones. No obstante, el párrafo 11 del documento del Perú indica que algunos Miembros piensan que los Estados Unidos creen que las reclamaciones en casos de no infracción y de otra situación pasarán a estar disponibles automáticamente cuando expire el plazo de la Declaración de Doha que trató de determinar su alcance y modalidades.

287. El Presidente aclara que su sugerencia es que el Consejo continúe sus debates sobre esta cuestión en su reunión de noviembre. Además, sugiere que la primera reunión del Consejo en 2003 se fije como fecha para la presentación de propuestas.

288. Así lo acuerda el Consejo.

K. COMERCIO ELECTRÓNICO

289. El Presidente recuerda que en la reunión de marzo del Consejo de los ADPIC se pidió a la Secretaría que actualizara su nota de antecedentes fácticos sobre propiedad intelectual y comercio electrónico, distribuida con la signatura IP/C/W/128 en febrero de 1999. Pide a la Secretaría que informe al Consejo sobre la situación del documento solicitado.

290. Un representante de la Secretaría dice que lamentablemente, debido a la escasez de recursos de personal, la Secretaría no ha podido actualizar a tiempo este documento.

L. OTRAS CUESTIONES PENDIENTES RELATIVAS A LA APLICACIÓN (INCISOS 93 Y 94 Y PROPUESTA DE LOS PMA SOBRE SU PERÍODO DE TRANSICIÓN)

291. El Presidente dice que el Consejo ha abarcado la mayoría de las cuestiones pendientes relativas a la aplicación en los anteriores puntos del orden del día y recuerda que el resto de esas cuestiones a que se refiere el párrafo 13 de la Decisión de Doha sobre cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación son las siguientes:

- Inciso 93: Se prorrogará el período de transición previsto para los países en desarrollo en el párrafo 2 del artículo 65.
- Propuesta de los países menos adelantados, 22 de octubre de 2001: El Consejo General acuerda que el período de transición para los PMA se prorrogará mientras éstos conserven su condición de PMA.
- Inciso 94: Se harán operativos los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC, previendo la transferencia de tecnología en condiciones equitativas y mutuamente ventajosas.

292. El Presidente dice que antes de la reunión del Consejo de noviembre de 2002 tiene la intención de celebrar consultas con los Miembros acerca de la manera en que el Consejo debe informar al Comité de Negociaciones Comerciales para finales del presente año.

293. El Consejo acuerda volver sobre este asunto en su próxima reunión.

M. EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN RELATIVA A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 24

294. El Presidente recuerda que, en su reunión de marzo de 2002, el Consejo instó a los Miembros que no habían facilitado respuestas a la Lista recapitulativa de preguntas que figura en el

documento IP/C/13 y Add.1 a que, de ser posible, lo hicieran antes de la presente reunión. La Secretaría distribuyó el aerograma WTO/AIR/1756 el 26 de marzo de 2002 para recordar a los Miembros la invitación del Consejo a facilitar esta información. Desde la reunión del Consejo en junio de 2002 se han recibido nuevas respuestas de Lituania y Marruecos, distribuidas en los Addenda 24 y 25 al documento IP/C/W/117. Hasta la fecha, el Consejo ha recibido respuestas de 42 Miembros a la Lista recapitulativa. Estas respuestas, con la salvedad de las cuatro más recientes, se han resumido en una nota de la Secretaría que figura en el documento IP/C/W/253. Informa al Consejo de que acaba de recibir una comunicación del Canadá con información sobre la protección de las indicaciones geográficas en el Canadá (distribuida seguidamente en el documento JOB(02)119). En la última reunión del Consejo, el representante de las Comunidades Europeas indicó que las Comunidades Europeas y sus Estados miembros han tratado de presentar preguntas a Australia en relación con sus respuestas a la Lista recapitulativa de preguntas distribuida en el documento IP/C/W/117/Add.19. Las Comunidades Europeas han indicado que, por medio de esta lista de preguntas, están tratando de obtener más aclaraciones con respecto a la legislación australiana pertinente, su interpretación y aplicación en términos prácticos, así como su aplicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Desde entonces, la lista final de estas preguntas se ha distribuido en el documento JOB(02)/97.

295. En la presentación de su comunicación, la representante del Canadá dice que el Canadá utiliza su régimen de marcas de certificación en el marco de la Ley federal de Marcas de Fábrica o de Comercio para dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Una marca de certificación es un tipo especial de marca de fábrica o de comercio que se utiliza con el fin de distinguir mercancías y servicios que cumplen unos criterios definidos frente a los que no los cumplen. Los criterios definidos pueden hacer referencia, entre otras cosas, a la calidad de las mercancías o servicios y/o a la zona en la que se han producido las mercancías o se han prestado los servicios, es decir, el origen geográfico de las mercancías o servicios. Los criterios los fija únicamente el titular de la marca. Las marcas de certificación deben registrarse de conformidad con la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio y han de ser publicadas y pueden ser objeto de procedimientos contradictorios en el Canadá. El plazo de protección es de 15 años y el registro puede ser renovado cada 15 años, lo mismo que las marcas de fábrica o de comercio ordinarias. El titular de una marca de certificación tiene derechos para impedir el uso no autorizado de la marca. La Ley de marcas de Fábrica o de Comercio del Canadá contiene una disposición que permite expresamente la protección de las marcas de certificación que sean descriptivas del lugar de origen de las mercancías y servicios.

296. El uso de las marcas de certificación en el Canadá ofrece una serie de ventajas. En primer lugar, los costos son bajos. Los gastos administrativos de una solicitud de registro para una marca de fábrica o de comercio, incluida una marca de certificación, son sólo de 150 dólares canadienses (unos 100 dólares EE.UU.). Las marcas de certificación se introdujeron por primera vez en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio del Canadá en 1952, lo que significa que la protección está firmemente establecida. Muchos otros países usan ya marcas de certificación y están familiarizados con este método. El titular de la marca de certificación determina la norma a la que han de sujetarse las mercancías a fin de utilizar la marca. Por ejemplo, la norma correspondiente al "queso azul danés" exige que el queso sea producido de conformidad con la legislación danesa vigente relativa a esa producción. El titular de la marca de certificación dispone de un margen de libertad considerable para definir la norma, y puede hacer que ésta sea todo lo estricta o amplia que desee. Los nombres geográficos también pueden registrarse como marcas de certificación, y no se limitan a nombres. Las marcas de certificación también pueden registrarse con respecto a un determinado elemento (una o más palabras, un diseño, un símbolo o una combinación de ellos), siempre que se cumplan los mismos requisitos que se exigirían para el registro de una marca de fábrica o de comercio ordinaria. Su delegación ha incluido en su comunicación parte de su legislación, una dirección de Internet donde consultar la legislación completa, unos cuantos ejemplos de otras indicaciones geográficas que están

protegidas y algunos detalles acerca del tratamiento que reciben en la legislación del Canadá los vinos y las bebidas espirituosas.

297. El representante de Australia dice que su delegación está dispuesta a hacer una exposición acerca de cómo se aplica en Australia el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta exposición abarca la mayor parte de las cuestiones que han sido planteadas por las Comunidades Europeas. No obstante, el orador cree que quizá sea más sensato presentar el documento por escrito y distribuirlo con el fin de ahorrar tiempo.

298. El representante de las Comunidades Europeas agradece a la delegación del Canadá la presentación del documento que ofrece información muy valiosa sobre la manera en que el Canadá ha dado cumplimiento o ha aplicado sus obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las indicaciones geográficas. También aprecia la disposición mostrada por la delegación de Australia de proceder a una exposición, y la oportunidad de oír esa exposición para ver si realmente contiene respuestas a las muchas preguntas que ha planteado. Esto suscita la cuestión de cómo proceder a este examen, por lo que el orador desea oír las propuestas de otras delegaciones en torno a cómo organizar la labor relativa al examen del párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Es ésta una valiosa oportunidad para comprender mejor las indicaciones geográficas.

299. Pide a la delegación canadiense que facilite más información acerca de cómo funciona el sistema de marcas de certificación. Primero, en lo que respecta al principio del país de origen, dice que todos los Miembros podrían convenir en el principio de que cuando un país reconoce una indicación geográfica, los terceros países tienen que asumir literalmente que la indicación geográfica en cuestión satisface la definición del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo. El orador entiende que puede haber marcas de certificación que realmente contengan una indicación geográfica, mientras que otras marcas de certificación pueden no contenerla, porque depende de la norma aplicable. Por ejemplo, si el titular canadiense de un derecho va a Suiza y reivindica la protección de una indicación geográfica, se pregunta cómo podría el juez suizo saber si la marca de certificación contiene o no una indicación geográfica. Su segunda pregunta se refiere a la cuestión de los conflictos entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas. En muchos países un conflicto entre marcas de fábrica o de comercio se decide con arreglo a la norma de que el derecho corresponde al primero que llega. En la práctica ello significa que una marca de fábrica o de comercio que se anticipe en el tiempo a otra prevalece sobre esta última aun si conlleva engaño para el consumidor. El párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo, que estipula que "todo Miembro [...] invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica", sugiere que puede haber casos en que sea necesario invalidar una marca. En otras palabras, es necesario invalidar una marca de fábrica o de comercio que haya sido registrada porque contenga una indicación geográfica. Esta norma es diferente de la que dice que el derecho corresponde al primero que llega, y el orador se pregunta cómo se aplica esto cuando los dos elementos de propiedad intelectual que entran en conflicto son una indicación geográfica que está contenida en una marca colectiva o en una marca de certificación y una marca de fábrica o de comercio ordinaria. Su tercera pregunta se refiere a una cuestión de denominación genérica de la que no se ocupa explícitamente el documento del Canadá pero sí la actual legislación canadiense. El orador considera que esta pregunta es muy pertinente porque la cuestión de lo que es y no es una denominación genérica es muy pertinente para comprender la protección de las indicaciones geográficas. El párrafo 2 del artículo 11.8 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio del Canadá se titula "Excepciones para los nombres habituales", mientras que el párrafo 3 se titula "Excepciones para los nombres genéricos de los vinos". Parece haber dos categorías diferentes: las denominaciones habituales y las genéricas. Sin embargo, el párrafo 6 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que el orador entiende que trata de los nombres genéricos, sólo habla de términos habituales. El orador desea que se le aclare si existe una diferencia entre nombres genéricos y habituales.

300. Por último, señala que la legislación canadiense sobre marcas de fábrica o de comercio contiene una lista muy larga de nombres genéricos. Dieciocho en el caso de los vinos, entre ellos Claret, Bordeaux, Medoc, Masala, Málaga, Chablis y Tokai, y otros en el de las bebidas espirituosas, como la marca Grappa, la ginebra de Ginebra y Cresso. Esta lista implica que las autoridades canadienses han tomado la determinación de que realmente esos nombres son genéricos. El orador desea saber cómo han llegado a esa determinación. En otras palabras, su delegación está interesada en averiguar cuáles son los aspectos que las autoridades canadienses han tomado en consideración al confeccionar esa lista. En particular, está muy interesado en averiguar, por ejemplo, cómo ha sido incluida en la lista una denominación como Bordeaux, dado que, según sus fuentes, la denominación Bordeaux no ha sido utilizada en el Canadá más que por los productores franceses.

301. El Consejo toma nota de las exposiciones.

N. COOPERACIÓN TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD

Actualizaciones anuales sobre actividades de cooperación técnica

302. El Presidente recuerda que, en su reunión de junio de 2002, el Consejo de los ADPIC acordó centrarse en la cooperación técnica en la presente reunión. En la preparación de este examen anual, se pidió una vez más a los países Miembros desarrollados que actualizaran la información sobre sus actividades de cooperación técnica y financiera pertinentes a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC con tiempo suficiente para la presente reunión. Se animó a otros Miembros que también prestaron cooperación técnica a que, si lo desearan, ofrecieran información sobre estas actividades. Además, se invitó a organizaciones intergubernamentales con calidad de observadoras en el Consejo así como a la Secretaría de la OMC a que facilitaran información. El Consejo ha recibido información de los siguientes países desarrollados y otros Miembros: Japón; Australia; República Checa; Noruega; Canadá; Hong Kong, China y los Estados Unidos. La documentación resultante relativa a las actividades de cooperación técnica de países desarrollados y otros Miembros está siendo distribuida en los documentos IP/C/W/377 y Addenda. El Consejo también ha recibido información actualizada de las siguientes organizaciones intergubernamentales: FMI, OCDE, FAO, OMS, OMPI, UNCTAD y UPOV. Esta información está siendo distribuida en los documentos IP/C/W/376 y Addenda. En el documento IP/C/W/375 puede encontrarse información actualizada sobre las actividades de cooperación técnica de la Secretaría de la OMC en el ámbito de los ADPIC. Parte de esta información no se ha recibido hasta hace muy poco, y en su mayor parte sólo está disponible hasta la fecha en su idioma original. Por tanto, el orador tiene la intención de ofrecer a los Miembros del Consejo la oportunidad de formular en la próxima reunión del Consejo nuevas observaciones sobre la información presentada para la presente reunión que aún no hayan podido estudiar, o cualquier otra nueva información facilitada antes de esa reunión.

303. El representante de los Estados Unidos, hace la presentación del informe de la asistencia técnica de su país y dice que le complace informar que su Gobierno ha ofrecido más de 100 programas desde septiembre de 2001 a la policía, las aduanas, los jueces, los fiscales y las ramas nacionales de producción de más de 70 países. En 2002 el formato de su comunicación fue ligeramente diferente al de pasadas comunicaciones debido a una novedad de la que el orador se enorgullece particularmente. Por vez primera, la información sobre programas de asistencia técnica en propiedad intelectual del Gobierno de los Estados Unidos está siendo reunida y ofrecida en Internet. La base de datos se sirve al mundo en la página www.training.ipr.gov. La base de datos se ofrece gratuitamente a cualquiera que tenga acceso a Internet. Esta base de datos ha sido creada por la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales del Departamento de Estado, con el pleno respaldo de todos los organismos relacionados con la propiedad intelectual. El orador invita a la Secretaría y a todos los Miembros de la OMC a que visiten el sitio Web para obtener información al día sobre los programas que ofrecen el Gobierno de los Estados Unidos y las empresas estadounidenses acerca de la propiedad intelectual. Los Miembros contarán así con un panorama actualizado de toda la gama de

programas a su disposición. El orador saluda toda manifestación de interés de los Miembros, principalmente a través de sus embajadas locales, por cualquiera de los programas que figuran en el sitio Web.

304. El Presidente insta a los Miembros que aún no lo hayan hecho a que faciliten información actualizada.

305. El Consejo toma nota de las declaraciones.

Iniciativa Conjunta

306. El Presidente recuerda que el 14 de junio de 2001 las Secretarías de la OMPI y la OMC lanzaron una Iniciativa Conjunta de Cooperación Técnica para los Países Menos Adelantados. Desde entonces, la Secretaría de la OMC ha mantenido informado al Consejo acerca de la aplicación de esta iniciativa.

307. El representante de la Secretaría dice que la Iniciativa Conjunta con la OMPI tiene dos fases: primera, la organización de dos importantes acontecimientos regionales y, segunda, las actividades específicas por país. El primero de los principales talleres regionales, dedicado a los países menos adelantados de África y Haití, tuvo lugar en Dar es Salaam (Tanzanía) en abril de 2002. El segundo, destinado a los países menos adelantados de la región de Asia y el Pacífico, se celebraría en Bangladesh del 11 al 14 de diciembre de 2002. En lo que respecta a la segunda fase de las actividades específicas por país, la Secretaría ha estado examinando con la OMPI la forma de responder al enorme número de solicitudes que se han recibido en el marco de la Iniciativa Conjunta. La Secretaría tiene la intención de iniciar estas actividades específicas por país antes de finales de 2002. Espera realizar un número bastante elevado de estas actividades en el curso de 2003, y está tratando de este asunto con la División de Cooperación Técnica de la OMC, que tiene a su cargo los fondos para la cooperación técnica. Debe asegurarse que en el plan de cooperación técnica de la Secretaría para 2003, que se está preparando en la actualidad, encuentren su lugar las necesarias actividades específicas por país para países menos adelantados en el marco de la Iniciativa Conjunta. Dice que otra limitación que deberá tenerse en cuenta es la de los recursos de personal para afrontar el nivel cada vez mayor de actividad en el Consejo de los ADPIC. Esta situación se está convirtiendo en una limitación muy significativa que afecta a las actividades de cooperación técnica en esta esfera. El número de páginas de las actas del Consejo en los diferentes años constituye un fiel indicador de la intensidad general de las actividades en la esfera de los ADPIC. En los cuatro primeros años de actividad del Consejo de los ADPIC, entre 1995 y 1998, se produjeron entre 55 y 75 páginas de actas por año, que posteriormente aumentaron a 130 en 1999 y a 294 en 2001. En 2002, el número de páginas ya se elevaba a 237 al final de la reunión del Consejo del mes de junio. No obstante, el personal de cuadro orgánico de la Secretaría ha pasado de cuatro a cinco durante ese período. Aunque se han ofrecido puestos adicionales para cooperación técnica recurriendo al Fondo de Apoyo a los Programas, no se ha asignado ninguno de ellos para los ADPIC. Por último, como la Secretaría está preparando su plan de cooperación técnica para 2003 y trata de cooperar lo más posible con otras organizaciones intergubernamentales en esta esfera, dice que sería de utilidad que estas organizaciones pudieran facilitar en los próximos días detalles de los acontecimientos en que les gustaría participar en 2003 a fin de poderlas incluir en el plan de cooperación técnica.

308. La representante de la OMPI recuerda la solicitud formulada por las Comunidades Europeas en reuniones anteriores a raíz de una comunicación que la OMPI recibió del Comisario Pascal Lamy relativa a la Iniciativa Conjunta. El Comisario Lamy pidió que las dos organizaciones asocien a la OMS en la aplicación de la Iniciativa Conjunta. En respuesta, la OMPI ha señalado que ha cooperado con otras organizaciones intergubernamentales, entre ellas la OMS, para alcanzar las metas y objetivos de sus actividades de cooperación técnica. A tal fin, la OMPI y la OMC han invitado a la OMS a participar en la cuestión de la propiedad intelectual y la salud pública en su reunión conjunta

celebrada en Tanzania. En esa reunión, la OMS estuvo representada por un enviado especial y varios funcionarios regionales destacados en África. La OMPI también proyecta invitar a la OMS a la próxima reunión conjunta en Bangladesh. Como hace habitualmente, la OMPI invitará también a la OMS a otras reuniones que organice y en las que estime que la OMS puede aportar una contribución significativa.

309. El representante de Zambia reconoce los problemas que afronta la Secretaría debido a lo elevado de las demandas y lo limitado de los recursos para atenderlas. Cree que la mayoría de los Miembros son conscientes de la situación, pero no está seguro de cuál es el procedimiento apropiado para responder a los problemas de la Secretaría en materia de recursos. Sugiere que en la próxima reunión el Consejo analice las diversas maneras en que esos Miembros pueden ayudar a la Secretaría, por ejemplo en recursos humanos así como financieramente. Pide al Presidente que aclare si ésta es la forma de proceder.

310. El representante del Senegal agradece al representante de la Secretaría su exposición de las iniciativas que se han adoptado y las reuniones que se han celebrado. Da su apoyo a la declaración del representante de Zambia, que no sólo es coordinador general del grupo de PMA en la OMC, sino también el centro en que convergen los PMA en lo relativo al Acuerdo sobre los ADPIC. El orador se da cuenta de que hay problemas, y le preocupa la falta de actuación en el Consejo para superarlos. Agradece a la delegada de la OMPI su declaración acerca de la Iniciativa Conjunta entre la OMPI y la OMC sobre asistencia técnica para los PMA. Se congratula en particular de que se incluya a la OMS en esta labor. A la luz de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, la incorporación de la OMS a la iniciativa conjunta no debería seguir haciéndose con carácter *ad hoc*, sino de manera más estructurada. Las Secretarías de la OMPI y la OMC deberían estudiar la posibilidad de hacerlo de manera más sistemática, lo que proporcionaría una mayor seguridad.

311. El representante de Singapur dice que las observaciones relativas a la ayuda a la Secretaría sin duda cuentan con la simpatía de su delegación y afirma que debe hacerse algo sobre esta cuestión particular. Refiriéndose a sus experiencias con el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual durante la Ronda Uruguay, dice que la escasez de recursos en la esfera de la propiedad intelectual es un problema que se arrastra desde muy atrás.

312. El representante de la Secretaría dice que agradece las reacciones de las delegaciones a lo que ha dicho antes. Se está haciendo muy difícil combinar el aumento del énfasis en la cooperación técnica que se exige a la OMC en cumplimiento de la Declaración de Doha con la mayor intensidad del trabajo en el Consejo de los ADPIC y prestar un servicio adecuado a los Miembros. Dice que algunos de los documentos del Consejo, por ejemplo, no siempre salen todo lo pronto que sería deseable desde el punto de vista del funcionamiento eficiente del Consejo. En lo que respecta a las medidas para afrontar este problema, corresponde a la Secretaría presentar propuestas presupuestarias a los Miembros de la OMC. En un plazo muy breve la Secretaría formulará esas propuestas. Luego le tocará al Comité de Presupuesto examinarlas y a los Miembros decidir acerca de lo que pueden ofrecer.

313. El Presidente dice que el Consejo ha diagnosticado bien la situación, con independencia de cuáles son los procedimientos que hace falta seguir para hacer frente a la escasez de recursos. La Secretaría tiene que prestar un buen servicio a los Miembros, en un momento en que éstos cada vez piden más información y más servicios. Habrá que encontrar alguna solución. Los Miembros del Consejo de los ADPIC también lo son del Comité de Presupuesto, que es el órgano idóneo para adoptar las decisiones necesarias.

314. Respondiendo a la delegación del Senegal, la representante de la OMPI dice que la cooperación entre la OMPI y la OMS no fue de tipo *ad hoc*. Existía ya una estructura general en el sistema de las Naciones Unidas destinada para cooperar entre los organismos hermanos y las propias

Naciones Unidas. La oradora añade que la OMPI espera ser invitada a reuniones de la OMS que traten de temas de derechos de propiedad intelectual. Va a celebrarse una reunión entre los Directores Generales de la OMPI y la OMS, y la OMPI está esperando la respuesta de la OMS sobre este punto. La OMPI queda a la espera de una cooperación más estrecha con otros organismos en cuestiones de propiedad intelectual.

315. El Presidente invita a los países menos adelantados a que presenten a las Secretarías de la OMPI y de la OMC sus solicitudes de asistencia. También destaca la importancia de ayudar a los países menos adelantados Miembros a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC y a utilizar de la mejor manera el sistema de propiedad intelectual para el desarrollo y bienestar económico, social y cultural de esos países.

316. El Consejo toma nota de las declaraciones.

O. INFORMACIÓN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE INTERÉS REGISTRADOS EN OTROS FOROS DE LA OMC

Solución de diferencias

317. El Presidente dice que, en comunicación de fecha 6 de noviembre de 2000, los Estados Unidos, Irlanda y las Comunidades Europeas notificaron al Órgano de Solución de Diferencias que habrían llegado a una solución mutuamente convenida acerca de todas las cuestiones suscitadas por los Estados Unidos en los documentos WT/DS/82/1 y WT/DS115/1 relativas a la protección del derecho de autor y derechos conexos en la legislación irlandesa. Esta comunicación se ha distribuido con las firmas IP/D/8/Add.1 e IP/D/12/Add.1.

Consejo General

318. El Presidente recuerda que el Consejo de los ADPIC, en su reunión de 25 a 27 de junio de 2002, aprobó un proyecto de exención con respecto a las obligaciones de los PMA Miembros en virtud del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC hasta el 1º de enero de 2016, y se convino en remitirlo al Consejo General para que lo adoptara. Este proyecto de exención fue adoptado por el Consejo General el 8 de julio de 2002. La decisión del Consejo General se ha distribuido con la firma WT/L/478.

319. El Consejo toma nota de esta información.

P. CONDICIÓN DE OBSERVADOR DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES INTERGUBERNAMENTALES

320. El Presidente recuerda que, en la reunión del Consejo de junio de 2002, propuso, tras celebrar consultas, que el Consejo concediera la condición de observador a la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG) con carácter *ad hoc*, esto es, a reserva de revisión a la luz de cualquier orientación ulterior del Consejo General acerca del otorgamiento de la condición de observador a otras organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, en ese momento no todas las delegaciones estaban preparadas para adoptar una decisión sobre este asunto. El orador pregunta si se han producido novedades en las reflexiones de las delegaciones y si el Consejo puede decidir ya el otorgamiento *ad hoc* de la condición de observador a estas tres organizaciones.

321. El representante de Kenya apoya la sugerencia del Presidente de que se otorgue la condición de observador a estas tres organizaciones.

322. El representante de las Comunidades Europeas señala que no ha habido ninguna modificación en la posición de su delegación. Se pregunta si el Presidente tiene algún plan de nuevas consultas, puesto que el Consejo tiene que presentar a otros órganos de la OMC un determinado informe y recomendación para que se pueda adoptar una decisión sobre la condición de observador de las organizaciones internacionales intergubernamentales.

323. El Presidente dice que si ha habido cambios en la posición de los países a los que su propuesta plantea problemas, le gustaría saber cuáles son esos cambios. Si no, interpreta que el Consejo está en la misma situación que en su reunión anterior. En tal caso, da por supuesto que el Consejo no está en condiciones de adoptar una decisión en la presente reunión.

324. El representante del Senegal dice que está de acuerdo con la delegación de Kenya en apoyar el otorgamiento de la condición de observador a la ARIPO, la OAPI y el CCG. En cuanto a la OAPI, apela una vez más a las delegaciones que se han opuesto al consenso en el Consejo de los ADPIC a que reconsideren su posición. El Senegal está presidiendo el Consejo de Administración de la OAPI, que es una organización intergubernamental con 16 países miembros de habla francesa. El tratado inicial fue adoptado en 1977. Los países africanos de lengua francesa tienen unos 40 años de experiencia en la aplicación de los sistemas de propiedad intelectual. El primer acuerdo fue firmado en Libreville en 1962 y, desde entonces, la OAPI ha sido el principal vehículo de la asistencia técnica a los 16 países de lengua francesa. La OAPI engloba a 133 millones de habitantes, y en ella hay depositadas 35.000 patentes. La OAPI cuenta con una abundante y prolongada experiencia en esta esfera, lo que debería contribuir a inclinar la balanza a favor de otorgarle la condición de observador del mismo modo que a la ARIPO, cuya administración difiere algo con respecto a la de la OAPI. El orador dice que, en el párrafo 6 de su declaración, su delegación ha venido defendiendo que el concepto de mercado interno a que se refiere el apartado f) del artículo 31) del Acuerdo sobre los ADPIC abarque también las zonas de libre comercio y las organizaciones que tengan determinados tipos de legislación sobre propiedad intelectual. Tal es el caso de la OAPI. El orador no ha observado ninguna oposición importante a este respecto.

325. Es consciente de la naturaleza sistémica de la condición de observador en la OMC. Existe consenso en la OMC en que los órganos subsidiarios deben tratar caso por caso las solicitudes de la condición de observador. Sobre la base de las solicitudes de la OAPI, la ARIPO y el CCG, el Presidente formuló su propuesta, que fue objeto de un acuerdo informal y unánime en la reunión informal del Consejo antes de ser presentada a una reunión formal para tomar una decisión. Garantizar la condición de observador con carácter *ad hoc* a estas organizaciones en ningún modo debe prejuzgar la cuestión sistémica. En primer lugar, el Consejo aún tiene que tratar la materia sistémica de la condición de observador y, en segundo lugar, hay que adoptar una decisión final en la OMC. El orador apela a favor de este consenso y una vez más insta a todo Miembro que no pueda avenirse a este consenso a que reconsidere su posición. El orador pone su confianza en que el Presidente celebrará nuevas consultas a fin de que en la próxima reunión el Consejo pueda adoptar una decisión.

326. El representante de Zambia expresa el apoyo de su delegación a que se admita a las organizaciones que solicitan la condición de observador. Pide una aclaración sugiriendo que el Presidente invierta el sentido de la pregunta, es decir, si hay algún Miembro al que la admisión de las organizaciones citadas le plantee algún problema.

327. El representante de las Comunidades Europeas expresa el pleno apoyo de su delegación a lo que ha dicho la delegación del Senegal, y hace un llamamiento al sentido común de aquellos Miembros que por razones sistémicas aún no hayan podido sumarse al consenso.

328. El representante de Kenya no cree que ninguna delegación se oponga a otorgar a estas organizaciones la condición de observador con carácter *ad hoc*. Dice que agradecería al Presidente

que planteara la cuestión de la manera en que lo hizo Zambia, a fin de que el Consejo pueda saber si hay alguna delegación que se opone a la decisión.

329. El representante de Egipto dice que a su delegación le gustaría que se otorgara la condición de observador a todas las organizaciones interesadas en asistir a las reuniones del Consejo, particularmente si son relevantes para la labor de éste. No obstante, el Consejo no puede llegar a una decisión selectiva ni aplicar un método selectivo a cada decisión acerca de una cuestión de naturaleza sistémica, de la que el Consejo lleva ya bastante tiempo ocupándose. Por ese motivo, su delegación no ve cómo pueden los Miembros del Consejo en la presente reunión encontrar la salida a ese problema, ya sea tratando de que haya categorías diferentes, como observador *ad hoc* o invitados especiales, o mediante cualquier otro enfoque selectivo. Esta posición es compartida por algunos Miembros y grupos de la OMC.

330. El Presidente dice que el Consejo no está en condiciones de adoptar una decisión en la presente reunión. Indica que celebrará consultas antes de la próxima reunión con miras a dar con una solución que sea satisfactoria para todas las delegaciones.

331. El Consejo toma nota de las declaraciones.

ANEXO

DECLARACIÓN ESCRITA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

SOBRE EL PUNTO D

(Ver párrafo 142)

- Agradecemos la comunicación de Australia, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Nueva Zelandia y Paraguay sobre la "extensión" (documento IP/C/W/360).
- También quisiéramos agradecer al Presidente su "Lista recapitulativa de cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas prevista en el artículo 23 a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas". Esta delegación, señor Presidente, le apoya muchísimo en sus esfuerzos, por hacer que todas las delegaciones intervengan en un debate constructivo de esta cuestión.
- Dado el poco tiempo transcurrido desde la recepción de su nota, yo había preparado una respuesta completa a los argumentos y cuestiones planteados en el documento IP/C/W/360. No obstante, tenemos la intención de ajustarnos lo más posible a la estructura propuesta en su nota y ceñiremos nuestros argumentos y respuestas relativos a las cuestiones de los "costos" al calendario de noviembre propuesto por usted.
- A modo de comentario general preliminar, quisiéramos aprovechar la ocasión para subrayar que en el documento presentado por Australia, los Estados Unidos y otros países son más las preguntas que se plantean que las respuestas que se proporcionan. No obstante, deseo reiterar que esta delegación está comprometida a debatir todas las cuestiones como lo hemos hecho en el pasado y no nos negamos a debatir ningún documento. Me temo que me llevará algún tiempo, pero espero que valga la pena.
- En primer lugar, deseo afirmar que no es cierto que quienes proponen la "extensión" pidan a los Miembros de la OMC que asuman nuevas obligaciones sin ninguna concesión compensatoria como se afirma en el párrafo 3 de la comunicación de Australia y otros países. Que nosotros sepamos, jamás lo hemos afirmado y creemos que todos los Miembros de la OMC siguen teniendo libertad para solicitar en el momento apropiado las concesiones que deseen pedir. De hecho, nos interesaría mucho saber en qué están pensando Australia y otros cuando piden concesiones compensatorias en la esfera de la "extensión". Esto plantea, por supuesto, la primera pregunta. ¿Podría Australia y los patrocinadores de ese documento aclarar a los Miembros qué concesiones compensatorias desean recibir a cambio de dar su acuerdo a la "extensión"? Estoy seguro de que ésta es una pregunta pertinente, desde luego para los proponentes de la "extensión".

CUESTIONES RELATIVAS A LA MATERIA OBJETO DE PROTECCIÓN

1. Desigualdad numérica

a) Repercusión cuando se trata de indicaciones geográficas

- Permítaseme pasar a la cuestión de la "desigualdad numérica" como primer punto para el debate de hoy y cuestión número 1 del documento presentado por Australia, los Estados Unidos y otros. En ese documento se argumenta en esencia que algún

Miembro, como las CE, tiene gran número de indicaciones geográficas que pueden beneficiarse de la "extensión", y otros no. Ahora bien, la "extensión" impondría una carga para proteger esos cientos de indicaciones geográficas sin un beneficio compensatorio. Debo confesar que el argumento parece bueno, pero lamentablemente no se corresponde con la realidad, lo que ilustraré con dos ejemplos. Tomemos el caso de dos Miembros de la OMC: un país mediano, el Paraguay, y otro grande, el Brasil.

- El Paraguay promulgó una Ley de Marcas e Indicaciones Geográficas (Ley 1294) el 6 de agosto de 1998. Esa Ley ya prevé la "extensión". En otras palabras, la misma "extensión" a la que se opone el Paraguay en el Consejo de los ADPIC está ya disponible en virtud de su propio ordenamiento jurídico interno. El Paraguay carece de un sistema de registro de indicaciones geográficas y ha optado por hacer respetar su protección incluyéndola en una ley sobre derechos de propiedad intelectual que puede invocarse ante los tribunales nacionales. Ahora bien, nos hemos puesto en contacto con el Director del Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria y Comercio, Sr. González, al que preguntamos cuál es el número de titulares extranjeros de derechos que se han interesado por el registro de sus indicaciones geográficas o han intentado hacer respetar su protección en el Paraguay desde la promulgación de la protección de indicaciones geográficas. La respuesta fue muy clara: NINGUNO. Desde 1998, NINGÚN titular extranjero de indicaciones geográficas ha tratado de hacer respetar la protección de éstas en el Paraguay.
- Pasemos al caso del Brasil. El Brasil, a diferencia del Paraguay, protege las indicaciones geográficas tanto extranjeras como nacionales por la vía de un sistema de registro. Nos encontramos de nuevo con que el Brasil es un país que ya contempla la protección "extendida" por medio de su Ley de Propiedad Industrial (nº 9279) de 4 de mayo de 1996 y su ley de aplicación de 28 de noviembre de 2000. Nos pusimos en contacto con representantes del INPI, el organismo nacional encargado del registro de indicaciones geográficas, según el cual el gran número de indicaciones geográficas extranjeras que se han registrado y cuya carga debe soportar la administración brasileña se eleva a DOS. Repito, DOS indicaciones geográficas extranjeras. No obstante, debo admitir algo: que las dos son de la UE. También debo admitir otra cosa, hay otras tres solicitudes de Europa, aparte de seis solicitudes brasileñas (*Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos*, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, así como la región de *Cerrado de Minas Gerais*, para el café, los *Queijos of Friburgo* y los chocolates de *Gramado*), y una indicación registrada brasileña que, a efectos ilustrativos (y no publicitarios) es la "*Cachaça*".
- Ahora bien, de estos dos ejemplos no deduzco pruebas de este supuesto "desequilibrio numérico". Les diré por qué. Las obligaciones que impone el Acuerdo sobre los ADPIC en materia de indicaciones geográficas son muy limitadas. El Acuerdo pide a los Miembros de la OMC que arbitren los "*medios legales a las partes interesadas*" (artículos 22 y 23 del Acuerdo). Por tanto, a los titulares de los derechos corresponde acudir a determinados países para valerse del tipo de protección contemplado en el país de que se trate. El Acuerdo sobre los ADPIC no protege automáticamente nada ni obliga a hacerlo a ningún país Miembro de la OMC. Los titulares de los derechos que deciden acudir a un tercer país para acogerse a los beneficios de esa protección lo hacen cuando 1) tienen una capacidad de exportación tal que la inversión vale la pena y 2) tienen interés en ello. Las cifras revelan que no son muchos los titulares de derechos que se aventuran a ir al extranjero a acogerse a la protección que ofrece el Acuerdo sobre los ADPIC.

b) ¿Desequilibrio numérico e importancia económica?

- Con todo, realmente existe otro elemento que debe tenerse en cuenta al evaluar las ventajas económicas de la "extensión" de la protección de una indicación geográfica y las consiguientes oportunidades de comercialización: las corrientes actuales y potenciales de comercio respecto de cada indicación geográfica. Australia y los patrocinadores de ese documento, que se oponen a la extensión, parecen aplicar la siguiente ecuación: cuantas más indicaciones geográficas, más beneficios. Cuando se la comprueba, el resultado es de risa. ¿Cómo se puede comparar el potencial de las corrientes del comercio de, por ejemplo, la indicación geográfica estadounidense "*Napa Valley wines*" con la pequeña indicación geográfica de la UE "*Costers del Segre*"? ¿Cómo se pueden comparar los aflujos comerciales del "arroz basmati" que, según reciente informe de la CIPR, citado anteriormente por otro delegado en esta sala, se eleva a 300 millones de dólares y a miles de agricultores con los del "Calgots de Tarragona" francés, que ni siquiera exporta fuera de la UE? Está claro que existe una diferencia de realidad y de potencial de nombres como el "*Café de Colombia*" y la indicación geográfica italiana "*white asparagus from Cimadolmo*". Una vez más, repito que las cifras no parecen importar mucho pero los valores comerciales sí.

c) Desequilibrio numérico y otros derechos de propiedad intelectual

- Como he dicho antes, la cuestión numérica no es, en nuestra opinión, real. No obstante, también deseo llamar la atención acerca de un hecho claro. Los Estados Unidos denuncian que la UE obtendría ventaja en mayor medida que otros porque tiene unas 500 indicaciones geográficas, lo cual es suficiente para rechazar la reclamación de extensión. No obstante, nos preguntamos si los Estados Unidos aplicarían el mismo razonamiento a otros campos de la propiedad intelectual. La Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de la UE lleva registradas hasta la fecha unas 132.218 marcas pero, señoras y señores, en mayo de 2002 la Oficina de Patentes de los Estados Unidos otorgó el certificado de registro 2.570.478. Repito: 2.570.478. Más de 2 millones de marcas de fábrica o de comercio. En el caso de las patentes las cifras son incluso considerablemente más elevadas. Señor Presidente, si hemos de hablar de desequilibrio numérico, quisiera preguntar a los Estados Unidos qué planes tienen para las marcas de fábrica o de comercio. ¿Vamos a derogar el capítulo de los ADPIC sobre marcas de fábrica o de comercio porque sólo los Estados Unidos le sacan provecho?

2. Sistemas de registro y trato nacional

- Bien, antes de pasar a ocuparme, una vez más, de la definición, quisiera tratar de un tema que se plantea respecto del hecho de que el registro de la UE de indicaciones geográficas de productos alimenticios no permite el registro de indicaciones geográficas extranjeras a menos que se determine que un tercer país cuenta con un sistema equivalente o recíproco de protección de indicaciones geográficas. Ello, por supuesto, trae a colación la cuestión del papel que desempeñan los sistemas de registro en general, así como las de la protección de indicaciones geográficas extranjeras y del trato nacional.
- Permítaseme explicar en primer lugar cómo cumplimos en la UE el requisito del Acuerdo sobre los ADPIC de ofrecer protección en materia de indicaciones geográficas a las indicaciones de terceros países. Como ustedes no ignoran, la sección del Acuerdo sobre indicaciones geográficas deja a los Miembros de la OMC total libertad para darle cumplimiento. En efecto (leeré la disposición pertinente

porque alguna delegación parece olvidarla), el artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula que *"los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos."*

- Pasemos ahora a las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC. Tanto el párrafo 2 del artículo 22 como el párrafo 1 del artículo 23 de ese Acuerdo establecen con claridad la única obligación que pesa sobre los Miembros de la OMC: la de arbitrar *"los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica"*.
- Hemos visto cómo, por ejemplo, el Brasil arbitra esos medios por la vía de un sistema de registro, mientras que el Paraguay carece de tal sistema pero permite que la protección de las indicaciones geográficas, como se dispone en su legislación nacional, sea invocada por titulares de derechos extranjeros. Las CE, por ejemplo, arbitran esos medios legales por la vía de su legislación en materia de etiquetado de productos alimenticios (Directiva 2000/13). Dicha legislación, en el párrafo 1 de su artículo 2, prohíbe que:

"[e]l etiquetado y las modalidades según las cuales se realice [la comercialización de productos alimenticios] no deberán: a) ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador, especialmente: i) sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia, y modo de fabricación o de obtención".

- Esta Directiva complementa la legislación de las CE en materia de competencia desleal y ofrece a todas las indicaciones geográficas extranjeras el nivel mínimo de protección prescrito por el artículo 22 contra el engaño al consumidor. Cualquier titular de derechos de un tercer país puede invocar esta disposición ante cualquier tribunal de la UE y acogerse a la protección del Acuerdo sobre los ADPIC. Por cierto que, como sabrán ustedes, ello no conlleva costo alguno para la administración de las CE, dado que todos los gastos corren por cuenta del productor interesado.
- Esto no es más que un ejemplo de un sistema eficiente en relación con el costo que permite la protección de las indicaciones geográficas reduciendo los costos al mínimo indispensable.
- Pero hablemos de los sistemas de registro y de la cuestión del registro de las indicaciones geográficas extranjeras. Las cuestiones de identificar las indicaciones geográficas y de protegerlas deben separarse y distinguirse con claridad. Ya hemos visto que el Acuerdo sobre los ADPIC no exige el establecimiento de sistemas de registro de indicaciones geográficas. Sin embargo, muchos países han optado por instaurarlos, como es el caso, según hemos visto, del Brasil y también el de la UE. Ahora bien, ¿cuál podría ser la función de los sistemas de registro con respecto a las indicaciones geográficas? Cuando echo un vistazo a la práctica de los Miembros de la OMC, me siento inclinado a responder que tal función tiene dos vertientes: la identificación de las indicaciones geográficas nacionales y, en ocasiones, la protección de las indicaciones geográficas extranjeras.
- Las CE creen que los sistemas de registro deben orientarse sobre todo a la identificación de las indicaciones geográficas nacionales. Por ejemplo, el sistema de registro de las CE de indicaciones geográficas de la UE exige que los solicitantes

aporten pruebas de que se satisface la definición de indicación geográfica del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Ello puede significar, en particular, probar que existe un vínculo entre la calidad, reputación u otra característica protegida, que se debe al origen geográfico, y que el nombre protegido evoca ese origen, incluidos, en algunos casos, los "nombres de países", si satisfacen los criterios del párrafo 1 del artículo 22, como en el caso de cualquier otra indicación geográfica. También pedimos a nuestros Estados miembros de la UE que verifiquen esas pruebas. Este procedimiento concreto de la UE se adapta mal a las indicaciones geográficas extranjeras. Permítanme ponerles un ejemplo. ¿Cómo pueden las CE comprobar si el "arroz Jasmin" satisface los criterios de una indicación geográfica en un país como Tailandia que se encuentra a más de 10.000 km de distancia?

- Nos parece que la conclusión lógica es la de limitar el sistema de registro a las indicaciones geográficas nacionales y proteger las extranjeras por otros medios, como expliqué antes, tales como el de la legislación en materia de etiquetado de productos alimenticios o las leyes sobre competencia desleal o, como el Paraguay, por la vía de la legislación general sobre indicaciones geográficas. El Brasil ha decidido utilizar también sus registros para proteger las indicaciones geográficas extranjeras, lo que es asimismo una opción válida que aplaudimos. Señor Presidente, siguen diciendo que las obligaciones que impone el Acuerdo sobre los ADPIC en materia de trato nacional hacen a las indicaciones geográficas acreedoras a ser registradas en los sistemas nacionales.
- Para mi gran sorpresa, he descubierto que el trato nacional, según los Estados Unidos, confiere derechos a las indicaciones geográficas y al parecer también a las marcas de fábrica o de comercio y a las patentes. Mayor aún fue mi asombro, señor Presidente, cuando volví a leer el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC sobre el trato nacional. En él se dispone que (lo leo en beneficio de ciertos Miembros que siguen sin entenderlo) "*[c]ada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales ...*". Permítaseme subrayar la palabra "nacionales" porque es crucial. El trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC confiere derechos a los nacionales, no a las indicaciones geográficas ni a las marcas de fábrica o de comercio. Esto es diferente en el GATT, cuyo artículo III estipula que "(...) los impuestos y otras cargas interiores, así como las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el mercado interior y las reglamentaciones cuantitativas interiores que prescriban la mezcla, la transformación o el uso de ciertos productos en cantidades o en proporciones determinadas, no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la producción nacional".
- No debería pasarse por alto esa diferencia. En el Acuerdo sobre los ADPIC, los acreedores a los derechos son los nacionales. En el GATT, son los "productos". Ahora bien, dijimos que tienen perfecto derecho a solicitar el registro de indicaciones geográficas en las CE como lo han hecho algunas de sus empresas con respecto a las indicaciones geográficas de la UE.
- Con todo, me alegra informar a este Consejo de que muchos otros países parecen haberlo entendido perfectamente. Ya hemos hablado del Uruguay y el Brasil. Permítaseme ahora continuar en el continente sudamericano.

- Comencemos por la Argentina, que en enero de 2001 promulgó una ley sobre indicaciones geográficas para productos agroalimentarios que, de forma bastante curiosa, ya prevé la extensión. Puede que vuelva a referirme a ese hecho curioso de que, estando la Argentina contra la "extensión", su legislación nacional ya la contempla. Ahora deseo centrarme en el artículo 23 de esa Ley. En él se dispone de hecho que "las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios extranjeras, podrán registrarse, cuando nuestro país hubiese celebrado acuerdos de reciprocidad, los que establecerán las condiciones del registro". Esta disposición es casi idéntica al artículo 12 del Reglamento pertinente de las CE que los Estados Unidos creen incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. Tendré que concluir que, según los Estados Unidos, la nueva ley argentina infringe el Acuerdo sobre los ADPIC.
- Pasemos ahora al Uruguay. El Decreto Regulator 34/999 de 3 de marzo de 1999 en aplicación de la Ley 17011 sobre la Propiedad Industrial contiene también una disposición, en su artículo 65, que indica que "los productores, fabricantes, artesanos o proveedores de servicios extranjeros, así como las autoridades públicas competentes extranjeras, podrán registrar sus indicaciones geográficas extranjeras de conformidad con los tratados internacionales concluidos por esta República". Es interesante constatar que la legislación uruguaya ya contempla la "extensión". Sin embargo, según la forma de ver de los Estados Unidos, la legislación uruguaya resulta ser infractora del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que concierne al trato nacional.
- Permítaseme en este punto decir también unas cuentas palabras acerca de Chile. Antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, Chile promulgó la Ley 18455 de 31 de octubre de 1985 por la que se fijan normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes y vinagres. Esta ley protege las denominaciones de origen, pero solamente si son chilenas. El artículo 27 de la misma estipula que "el Presidente de la República podrá establecer (...) denominaciones de origen, de vinos y destilados" en determinadas "*áreas del país*". De modo que parece que en el caso de Chile tenemos el mismo problema de trato nacional que en los de la UE, la Argentina y el Uruguay: aunque los nacionales extranjeros pueden solicitar el registro, las indicaciones geográficas extranjeras no se pueden registrar.
- Merece la pena señalar que Chile carece aún de legislación específica relativa al reconocimiento y la protección de indicaciones geográficas para otros productos. Sin embargo, existe un Proyecto de Ley, el 824-01, cuyo artículo 95 establece que "*los titulares extranjeros de los derechos de indicaciones geográficas protegidas en su país de origen (...) disfrutarán la misma protección que esta ley proporciona a las indicaciones geográficas nacionales. No obstante, esto no será de aplicación en aquellos casos en que, de conformidad con los convenios y tratados internacionales, no haya obligación de reconocer el efecto legal a esas indicaciones geográficas extranjeras*". No es de extrañar, pues, que las CE hayan celebrado recientemente un tratado bilateral con Chile que prevé la protección de las indicaciones geográficas de la UE en territorio chileno.
- Pasemos ahora a la Comunidad Andina. Se trata de un caso especial ya que el instrumento aplicable abarca al Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Una vez más, en este caso la Decisión 486 de la Comunidad Andina estipula en su artículo 219 que "tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el país Miembro sea parte".

Nuevamente nos encontramos frente a un desafortunado grupo de países que, como la UE, al parecer están infringiendo el Acuerdo sobre los ADPIC, según la interpretación que de éste hacen los Estados Unidos.

- El siguiente de la fila es Panamá, que constituye un caso especial. En primer lugar, Panamá ya prevé la "extensión", lo que, a estas alturas, no es ninguna noticia para este Consejo. Sin embargo, la Ley panameña sobre propiedad industrial estipula, en su artículo 137, que "el Estado panameño es el titular de las denominaciones de origen" y la manera en que esto encaja con la idea de proteger las indicaciones geográficas extranjeras.
- Con respecto a Costa Rica, parece que, como en el Brasil, en este país se pueden registrar las indicaciones geográficas extranjeras pero, a diferencia del Brasil, éstas tendrán que pagar impuestos que no pagarán los nacionales extranjeros. Siguiendo el argumento de los Estados Unidos, esto suena a que tanto el Brasil como Costa Rica bien pueden estar infringiendo las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de trato nacional.
- Prosigamos nuestro camino hacia el norte. Tengo que decir que sin duda Nicaragua se suma al grupo de países que no cumplen el Acuerdo sobre los ADPIC, según la interpretación estadounidense del trato nacional. La Ley 380 sobre marcas y otros signos distintivos estipula, con respecto a las indicaciones geográficas (artículo 71) que los productores, fabricantes y artesanos extranjeros, así como las autoridades públicas extranjeras competentes, sólo podrán registrar sus indicaciones geográficas cuando ello esté previsto en un tratado internacional del que Nicaragua sea parte o cuando en la jurisdicción extranjera las indicaciones geográficas nicaragüenses reciban un trato **equivalente** al otorgado en el marco de la presente Ley.
- Honduras también se encontraría en la misma situación. El artículo 126 de la Ley de Propiedad Industrial estipula que "los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como, las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar denominaciones de origen extranjeras que les correspondan cuando ello estuviese previsto en algún convenio o tratado aplicable, cuando en el país extranjero correspondiente se concediere **reciprocidad** de trato a los nacionales y residentes de Honduras".
- De El Salvador puede decirse mucho de lo mismo. El artículo 67 del Decreto 868 sobre marcas y otros signos distintivos establece que "los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar las denominaciones de origen extranjeras que les correspondan cuando ello estuviese previsto en algún convenio o tratado del cual El Salvador fuese parte, o cuando en el país extranjero correspondiente se concediera reciprocidad de trato para las denominaciones de origen de El Salvador".
- También resulta que Guatemala, uno de los proponentes de la comunicación, tiene el mismo problema que está aireando. En efecto, la Ley guatemalteca (Decreto 57-2000) sobre propiedad industrial establece en su artículo 81 que las indicaciones geográficas extranjeras se protegerán de conformidad con los tratados internacionales celebrados por Guatemala. La contradicción habla por sí misma, pero no pasaré a México sin indicar que esta Ley de Guatemala resulta que ya contempla la extensión. Para quienes deseen verla y leer su artículo 83, guardo un ejemplar.

- Por último, la Ley mexicana sobre indicaciones geográficas también contempla la "extensión" pero, con respecto a las indicaciones geográficas extranjeras, no parece que permita su registro. En efecto, la protección de la Ley mexicana sobre indicaciones geográficas comienza con una declaración del Instituto de la Propiedad Intelectual (artículo 157) estableciendo, como en el artículo 167 de esa Ley, que las indicaciones geográficas pertenecerán al Estado mexicano. Esto encaja mal con la protección de las indicaciones geográficas extranjeras, que ciertamente no pertenecen al Estado de México. Sin embargo, México ha concluido un acuerdo con las CE para la protección mutua de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, lo que nos hace pensar que también lo hace por la vía convenios internacionales, como hizo la UE al concluir un acuerdo bilateral para la protección mutua de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.
- Señor Presidente, siento la tentación de pasar a la zona del Caribe, pero va a oír más de lo mismo. De modo que he decidido facilitar una última muestra de información acerca de otro continente, para que no tenga la impresión de que sólo la totalidad de Sudamérica y las CE están infringiendo el Acuerdo sobre los ADPIC, según los Estados Unidos, por no permitir el registro de indicaciones geográficas extranjeras. Por eso quiero mencionar el Acuerdo de Bangui, que prevé la protección de la propiedad intelectual en 15 países africanos. Lamentablemente, el artículo 4 del Acuerdo de Bangui de 1999 también estipula que "las indicaciones geográficas extranjeras en los territorios de los Estados miembros de esa organización no podrán registrarse por la organización a menos que esté previsto en un convenio internacional del que los Estados miembros sean parte ni por ninguna legislación de aplicación conexa".
- Me consta, Señor Presidente, que no sólo las CE, los países sudamericanos y la mitad de África entienden que se pueden proteger las indicaciones geográficas extranjeras sin registrarlas, sino que muchos otros países se encuentran en la misma situación. La interpretación de los Estados Unidos del principio del trato nacional choca con la práctica legislativa de un gran número de Miembros de este Consejo. No registrar las indicaciones geográficas extranjeras no significa que no se las pueda proteger.
- Sin embargo, de la investigación precedente un hecho aflora tozudamente con muchísima frecuencia. Muchos países que se oponen a la extensión ya la tienen en casa. ¿Por qué oponerse entonces? Creo que este Consejo tiene derecho a comprender por qué ...

La función del país de origen y el principio de territorialidad

- Con respecto a la cuestión de la territorialidad, entendemos que carece de razón de ser. De hecho, quisiéramos que constara nuestro acuerdo con los puntos de vista manifestados por la delegación australiana en la última reunión del Consejo de los ADPIC en sesión extraordinaria. El principio de territorialidad se aplica en efecto al Acuerdo sobre los ADPIC y asume que los Miembros de la OMC aceptan en su sentido literal la reclamación de otro Miembro de que determinado término satisface en el territorio de aquéllos la definición de indicaciones geográficas, incluidas las relativas a nombres de países, para que las partes interesadas tengan derecho a los "medios legales" que imponen las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Tal derecho no determina si la indicación geográfica particular será protegida al final. En este caso se encontraría una reclamación para la protección del nombre "teléfono" para la indicación geográfica de un vino, como hizo observar el delegado de Australia

en la última reunión del Consejo de los ADPIC en sesión extraordinaria. Deseamos recordar que nosotros expusimos ese mismo punto de vista en la última reunión en sesión extraordinaria, como se señala en el párrafo 63 del acta de la reunión.

Nombres de países

- Señor Presidente, Australia, los Estados Unidos y otros patrocinadores de la comunicación IP/C/W/360 continúan intentando hacernos creer que la definición es un problema. En el párrafo 5 de su comunicación mantienen que los "nombres de países" o las "denominaciones extravagantes" no pueden responder a la definición.
- Señor Presidente, estoy un poco perplejo. Esta cuestión la tratamos en la reunión extraordinaria sobre el "sistema multilateral de notificación y registro", en la que nuestra posición, que ahora no voy a repetir, quedó recogida en el párrafo 63 del acta de la reunión. No escuché ni una sola voz contra el hecho de que los "nombres de países" pueden optar a acogerse a la definición de indicación geográfica del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. De hecho, nuestra comunicación IP/C/W/353, en su párrafo 7, admite expresamente que los "nombres de país" pueden optar a la protección. La UE ha registrado nombres de países como indicaciones geográficas, por ejemplo en los casos de "*Luxemburgo*" y "*Svecia*". Con todo, la UE no lo ha limitado a pequeños países. Hasta la fecha, la UE no ha limitado esta protección a nombres de países de indicaciones geográficas de productos alimenticios. Por ejemplo, en la esfera de los vinos y las bebidas espirituosas la UE protege los siguientes nombres de países: Ron de la Martinica, Ron de Guadalupe, Ron de Reunión, Ron de Guyana, Whisky Irlandés, Whisky Español, Brandy Italiano, Deutscher Weinbrand (Brandy de Alemania), Eau-de-vie de marc o de pommes o de poires o de kirsch o de quetsch o de mirabelle o de prunelles (marca nacional luxemburguesa), Dansk Akvavit (Akvavit danesa), Anís Español, Ginjinha Portuguesa, Anís Portugués. De modo que están protegidos como indicaciones geográficas incluso los nombres de países de los Estados miembros más grandes de la UE (como Alemania). No hubo desacuerdo en que éste es un asunto relativo a la aplicación, como indicó el Presidente de la reunión en sesión extraordinaria en el párrafo 140 del acta de esa reunión (TN/IP/M/2). Me parece que plantear esta cuestión una vez y otra, y otra, y otra no es más que una pérdida de tiempo para este Consejo. Nos satisface tratar de temas de definición, si existe un problema de verdad, en el marco del examen previsto en el párrafo 2 del artículo 24, que resulta que incluso es citado en el párrafo 5 de la comunicación de Australia, los Estados Unidos y otros. A este respecto, la cuestión legítima es la siguiente: ¿Por qué no tratar de esta cuestión en el marco del examen del párrafo 2 del artículo 24? ¿Por qué insiste Australia en debatir la definición, cuando en tal debate existe un acuerdo general? Señor Presidente, sencillamente la razón se me escapa ... Estamos ofreciendo debatir esto en el marco del párrafo 2 del artículo 24. ¿Por qué no es suficiente?

Nombres no geográficos en tanto que indicaciones geográficas

- Australia, los Estados Unidos y otros sugieren, al hablar del "Arroz Basmati" que los nombres no geográficos pueden no ser objeto de protección en tanto que indicación geográfica. Acerca de la cuestión de la condición de los nombres no geográficos como no protegibles, una vez más reitero nuestra opinión, que figura en el párrafo 7 de nuestra comunicación IP/C/W/353 y el párrafo 63 del acta de la reunión del Consejo de los ADPIC en sesión extraordinaria. En nuestra opinión, esos términos pueden optar a la protección en tanto identifiquen un producto como proveniente de

un determinado territorio. Como dije anteriormente esta semana, el nombre "Arroz Jasmin" me evoca claramente Tailandia y, en lo que a mi respecta, puede ser una indicación geográfica con independencia de su naturaleza no geográfica. La UE cuenta con cierto número de esas indicaciones geográficas, como "Vinho Verde", "Cava" y algunos otros.

Expresiones tradicionales

- Señor Presidente, Australia y otros sostienen que la UE considera que las expresiones tradicionales son indicaciones geográficas y reclamarán la protección de esos términos por la vía del Acuerdo sobre los ADPIC. Una vez más, deseo reiterar nuestra posición, que aparece en los párrafos 58 y 63 del acta de la última reunión en sesión extraordinaria. Las "expresiones tradicionales" NO son indicaciones geográficas. La UE no las protege como indicaciones geográficas y por tanto, en virtud del párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, no son susceptibles de protección como indicaciones geográficas. Esta opinión es por tanto idéntica a la manifestada por el Brasil, incluso por Australia, en los párrafos 60 y 62. Estas expresiones no son indicaciones geográficas porque no están protegidas en cuanto tales y no tienen derecho a protección.

DECLARACIÓN ESCRITA DE SRI LANKA SOBRE EL PUNTO D (Ver párrafo 168)

Al igual que otras delegaciones, mi delegación quisiera darle las gracias por su iniciativa de sacar una lista recapitulativa de cuestiones con el fin de facilitar un debate más centrado y sistemático en el Consejo. Desde el comienzo mismo esperábamos que todos los Miembros abordaran esta cuestión de manera más pragmática y no se enzarzaran en un debate confuso y acalorado. Es necesario que las deliberaciones sean más enriquecedoras y aclaradoras en muchos asuntos conexos. Ahora que los Miembros cuentan con una lista recapitulativa, esperamos que todos ellos apliquen un enfoque más constructivo y estructurado.

También esperamos que todos los Miembros tengan en cuenta su sugerencia de evitar que se duplique la labor que se está realizando bajo otros puntos del orden del día del Consejo de los ADPIC.

Señor Presidente:

Mi delegación desea dividir su intervención en dos partes, haciendo primero algunas puntualizaciones acerca de las diferencias existentes entre el nivel general de protección para las indicaciones geográficas y la protección adicional establecida en el artículo 23 para los vinos y las bebidas espirituosas, y, abordando en segundo lugar los dos temas expuestos por usted en su documento informal.

Cuando se comparan las diferencias entre el nivel general de protección establecido en el artículo 22 y la protección absoluta o adicional o mejorada establecida en el artículo 23, se pueden deducir los puntos siguientes:

1. La protección normal que confiere el enfoque del artículo 22 se dirige contra las prácticas comerciales que se considere que inducen a error o constituyen actos de competencia desleal. El tipo de protección disponible en este marco se limita a casos en que se induce a error al público mediante el uso de una indicación geográfica como si se tratara del verdadero origen geográfico del producto, o cuando tal uso constituye un acto de competencia desleal.

2. La protección del artículo 22 es aplicable si los productos se presentan falsamente al público como originarios de determinado territorio, puesto que ello constituye un acto de competencia desleal. Por tanto, no ofrece la suficiente protección intelectual en beneficio del productor que tiene derecho a utilizar una indicación geográfica. Otros productores pueden utilizar indebidamente la indicación geográfica junto con la indicación del verdadero origen del producto. Por tanto, esa práctica permite que otros productores se aprovechen del renombre de una indicación geográfica. Por otra parte, la protección del artículo 23 no permite a los demás productores utilizar las diversas indicaciones geográficas de la misma manera, impidiendo por tanto su utilización indebida.
3. El requisito de la prueba de inducción a error en el marco del artículo 22, donde se formulan importantes cuestiones de definición y alcance de la protección de manera *ad hoc*, dependiendo de los sistemas judiciales nacionales, crea una considerable incertidumbre jurídica.
4. Como el productor que tiene derecho a utilizar una determinada indicación geográfica tiene que probar que se ha inducido a error al público y que se ha producido un acto de competencia desleal, el costo que le supone la protección de una indicación geográfica es elevado.
5. Por otro lado, el artículo 23 permite que todos los Miembros actúen de oficio contra la falsedad en materia de indicaciones u origen, reduciendo así el costo de la protección para el productor.
6. La protección que ampara el artículo 23 tiene dos componentes:
 - La protección para cada indicación geográfica identificada en el caso de indicaciones homónimas.
 - El establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas para tales productos identificados.
7. La protección absoluta o grado superior de protección en virtud del artículo 23 consiste en la prohibición de que se utilicen expresiones tales como "tipo, estilo, imitación u otras análogas" en productos que no son originarios del lugar indicado por la indicación geográfica en cuestión. Este nivel de protección sólo se ofrece en la actualidad a los vinos y las bebidas espirituosas, y exige la denegación o invalidación de oficio de toda marca de fábrica o de comercio que indique una indicación geográfica que se refiera a vinos y bebidas espirituosas (párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC).
8. La principal diferencia entre estos dos niveles de protección es que, con el fin de impedir el uso incorrecto de una indicación geográfica al amparo de la protección común u ordinaria, la parte que se considere lesionada debe aportar la prueba de que la utilización impropia de la indicación geográfica induce a error al público o que constituye un acto de competencia desleal.

Es también pertinente mencionar aquí que un grupo de países, incluido el mío, ya ha presentado a este Consejo los argumentos antes expuestos en la comunicación IP/C/W/247/Rev.2, efectuada en mayo de 2001, y en la sección II de la comunicación IP/C/W/353, efectuada en junio de 2002.

Permítaseme a continuación pasar al primer tema, el de las cuestiones relativas a la materia objeto de protección.

De partida, señor Presidente, creemos que la "extensión" carece de implicaciones en la definición establecida en el párrafo 1 del artículo 22, dado que el ejercicio que nos ocupa concierne al nivel diferente de protección existente entre las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas y las de los demás productos.

No obstante, como creemos que es necesario que los Miembros del Consejo tengan claro lo que estamos proponiendo, seguiremos interviniendo en el debate acerca de esta cuestión.

La comunicación conjunta del documento IP/C/W/353 expone con claridad que la definición del párrafo 1 del artículo 22 es lo bastante flexible, dado que protege los nombres geográficos de localidades, regiones o países o cualquier nombre a fin de que se los pueda utilizar como indicación geográfica en tanto satisfagan los siguientes criterios:

- 1) Si la materia a prometer es un producto que no representa ideas ni procedimientos y existe en la realidad.
- 2) La identificación por la indicación geográfica corresponde al territorio de un Miembro o a una región o localidad de ese territorio. Los productos también pueden ser identificados por una indicación y, por tanto, no necesariamente por el nombre de un lugar geográfico en la tierra.
- 3) Es necesario que exista una calidad, reputación u otra característica especial inherente a los productos.
- 4) La calidad, reputación u otra característica sea imputable fundamentalmente al origen geográfico de los productos. Ha de haber un vínculo especial entre el origen y la calidad, reputación y características especiales.

Por consiguiente, los nombres de país que no reúnan esos criterios no podrán ser susceptibles de protección como indicaciones geográficas. Los criterios anteriores se aplican a todos los productos, ya reciban la protección del artículo 22 o la del artículo 23. El párrafo 1 del artículo 22 también se refiere a las indicaciones que no son necesariamente los nombres de lugares geográficos en la tierra; no obstante, toda indicación que reúna los criterios arriba citados puede ser susceptible de protección en tanto que indicaciones geográficas. Ello se debe a que, pese a que esas indicaciones geográficas no representan un lugar real sobre la tierra, los productos se han ganado una reputación por su calidad y características especiales que son esencialmente imputables al lugar en el que tales productos se producen o tienen su origen.

Es importante que nos acordemos de lo que estamos tratando aquí: de indicaciones geográficas y no de "expresiones tradicionales". Unas y otras constituyen dos cuestiones diferentes y conceptos distintivos. Como dijo antes alguna delegación, las indicaciones geográficas deberían existir en la realidad y por tanto no representar "ideas" ni "expresiones".

Mi delegación también ha observado que algunas delegaciones tratan de confundir el término "indicaciones geográficas" con otros términos como "indicación de procedencia" y "denominación de origen". Comprendemos sus confusiones, dado que ambos conceptos están relacionados con la idea de indicaciones geográficas.

Qué es una "indicación de procedencia"

La expresión "indicación de procedencia", como se describe tanto en el Convenio de París como en el Arreglo de Madrid, significa toda expresión o signo que se usa para indicar que un producto o servicio es originario de un país, una región o un lugar específico.

"Indicación de procedencia" es un concepto más genérico, sencillo y amplio que corresponde al origen de un producto. Este concepto incluye tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen. Se refiere a la designación de cualquier país o lugar situado en donde tiene su origen el producto. Sólo indica una región o un lugar geográfico y no implica ninguna calidad o característica especial del producto respecto del cual se utiliza una indicación de procedencia.

Por lo tanto, este concepto no requiere que el producto posea determinada calidad, ni una reputación ni características ni condiciones naturales y humanas relacionadas con su origen geográfico. En ese sentido, las indicaciones de procedencia abarcan los nombres de países y los de regiones geográficas.

Qué es la "denominación de origen"

Por "denominación de origen", según la definición del artículo 2 del Arreglo de Lisboa, se entiende la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad, que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. Los nombres geográficos que identifican a las "denominaciones de origen" indican que un producto es originario de determinada región geográfica sólo cuando la calidad y características del producto son debidas al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

"Denominación de origen" es un concepto específico y muy estricto, que se limita y está relacionado con la calidad y las características pertenecientes a determinado medio geográfico en el que tienen su origen los productos. Los factores tanto naturales (suelo y clima) como humanos conforman la calidad y características especiales del producto y las influyen. Esas calidades y características especiales del producto deberían deberse exclusivamente a su medio geográfico.

Los nombres que identifiquen una "denominación de origen" deberán corresponder necesariamente al nombre geográfico de un país, una región o una localidad, y además deberán estar relacionados con la calidad o características que son esencialmente atribuibles al lugar de origen. En ese sentido, las "denominaciones de origen" sólo se relacionan con los nombres geográficos y no con símbolos o signos, u otra clase de expresiones que sirven para designar un producto.

Frente a "indicaciones de procedencia" y a "denominaciones de origen", por "denominación de origen", según la definición del artículo 2 del Arreglo de Lisboa, se entiende la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad, que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

La expresión "indicación geográfica" es un concepto relativamente nuevo; el Acuerdo sobre los ADPIC incluye la "denominación de origen" pero no abarca las "indicaciones de procedencia". Por consiguiente, la definición del Acuerdo sobre los ADPIC difiere en varias maneras de los términos "indicación de procedencia" y "denominación de origen". El término "indicación geográfica" no es tan estricto como el de "denominación de origen", pero tampoco tan amplio como el de "indicación de procedencia".

En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, una indicación geográfica, para ser protegida, tiene que ser una indicación, por ejemplo símbolos o signos, que indique determinado país o región o localidad pero no necesariamente el nombre de un lugar geográfico en la tierra. La indicación tiene que identificar un producto en tanto que originario del territorio de un Miembro o una región o localidad de ese territorio. Por tanto, la definición que ofrece el artículo 22 amplía el concepto del Arreglo de Lisboa de "denominación de origen" para proteger los productos, que obtienen su reputación de su lugar de origen, siempre que esa reputación sea esencialmente imputable a la calidad u otras características del lugar de origen.

Cabe observar que algunos acuerdos bilaterales y plurilaterales celebrados entre países antes del Acuerdo sobre los ADPIC cobraron vigor y en unos cuantos casos, incluso después de que entraran en vigor, se basaron en el concepto de "denominación de origen", descansando por tanto en compromisos de ofrecer un mayor grado de protección que aquella a la que obligaba el Acuerdo sobre los ADPIC. Esos acuerdos celebrados fuera del marco del Acuerdo sobre los ADPIC proporcionaban a las partes en cuestión concesiones y ventajas mutuas. Estas concesiones y ventajas adoptaban diferentes formas. Algunas tenían que ver con la supresión de diversas formas de obstáculos al comercio por ambas partes, proporcionando así un mayor acceso al mercado para los productos que eran objeto de intercambio entre ellas.

Por tanto, mi delegación cree firmemente que la referencia en el Consejo de los ADPIC a acuerdos bilaterales y plurilaterales no hace ningún bien al proceso, sino que crea confusiones entre los Miembros. Lo que el Consejo de los ADPIC tiene encomendado hacer es aclarar las cuestiones relativas a la aplicación de los compromisos y obligaciones que establece el Acuerdo sobre los ADPIC. Cualquier Miembro que esté interesado en entender mejor estos conceptos puede remitirse a los antecedentes preparados por la OMPI en abril de 2002, que figuran en el documento SCT/8/4.
